



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**Criterio de valoración probatoria de la sospecha grave en la
prisión preventiva en el delito de lavado de activos**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Abogado

AUTOR:

León Segura, Jonattan Poul (ORCID: 0000-0002-5282-5667)

ASESORES:

Dra. Mejía Chumán, Rosa María. (ORCID: 0000-0003-0718-7827)

Dr. Chero Medina, Félix Inocente (ORCID: 0000-0003-2150-6556)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal - Derecho Procesal Penal

CHICLAYO – PERÚ

2020

Dedicatoria

A mi segunda madre, María Isabel Carranza Cepeda, que actualmente reside en lo alto de la misericordia de nuestro Señor, le puedo decir: tarea cumplida.

A mi madre, Ana Elisa Segura Carranza, quien ha sido siempre mi sosiego en momentos de incertidumbre y altivez.

A mis tías, Rosa Elvira Segura Carranza y Marlene Segura Carranza, quienes confiaron en mí y me dieron la mano en momentos de dificultad.

A mi abuelo, Martín Segura Reaño, quien es para mí más que un padre y más que un amigo, y siempre será la persona de quien más he aprendido en la vida.

Agradecimiento

Agradezco al Dr. René Santos Zelada Flores, Magistrado del Poder Judicial, quien además de haber sido mi docente en Derecho Procesal Penal y de infundirme un gran interés en el aprendizaje de esta ciencia jurídica, me ha brindado su apoyo en la divulgación virtual del instrumento de la investigación dadas las dificultades del Estado Emergencia Nacional.

Agradezco a los Especialistas judiciales, en especial a la Dra. Denisse Jazmín Cieza Samillan, a la Dra. Marilyn Cabrera Quiñones, a la Dra. Claudia Callacná Vera, a la Dra. Verónica Aracelly Castañeda Díaz, entre otros; y en general, a los Jueces del Módulo Penal Corporativo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por su apoyo.

Agradezco al Dr. Felix Chero Medina y a la Dra. Patricia Falen Guerrero, quienes me han apoyado, incluso excediéndose de sus obligaciones como docentes, dadas las dificultades vinculadas al Estado de Emergencia Nacional.

Agradezco al Centro de Investigación Jurídica “Iuris Mundi”, Asociación Jurídica, de la cual tengo el honor de ser Vicepresidente; y de manera especial, a sus miembros por la colaboración brindada en la aplicación del instrumento de la investigación.

Agradezco a mis compañeras y futuras colegas: Abog. Keyla Katherine Troyes Rimarachin, Abog. Leydi Esmith Alberca Castillo, Abog. Kathia Noemi Ramírez Torres, Abog. Fiorela Medalith Bobbio Vásquez; por el apoyo brindado en la divulgación virtual del instrumento de la investigación, dado el Estado de Emergencia Nacional.

Índice de contenidos

Carátula.....	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de Tablas	v
Resumen	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA.....	47
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	47
3.2. Variables y operacionalización	47
3.3. Población, muestra y muestreo	51
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.	52
3.5. Método de análisis de datos	52
3.6. Procesamiento de datos	53
3.7. Aspectos éticos	53
IV. RESULTADOS	54
V. DISCUSIÓN.....	68
VI. CONCLUSIONES.....	79
VII. RECOMENDACIONES	82
REFERENCIAS.....	99
ANEXOS	110

Índice de Tablas

Tabla N° 1. Condición de encuestados: jueces, fiscales y abogados.	54
Tabla N° 2: Al valorar probatoriamente los indicios en el delito de lavado de activos, ¿Qué método consideraría más oportuno para determinar la responsabilidad penal?	55
Tabla N° 3. ¿Qué grado de sospecha considera usted que se somete a valoración probatoria cuando se evalúa la medida de coerción procesal más gravosa en el lavado de activos?	56
Tabla N° 4. ¿Qué criterio de valoración probatoria cree usted que se puede considerar sospecha grave en relación al incremento patrimonial en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?.....	57
Tabla N° 5. ¿Qué criterio de valoración probatoria cree usted que se considera sospecha grave en relación a las operaciones financieras sospechosas en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?	58
Tabla N° 6. ¿Qué criterio de valoración probatoria desde su perspectiva se considera sospecha grave respecto a la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?	59
Tabla N° 7. Según Usted, ¿Qué criterio de valoración probatoria en relación a la carencia de la actividad económica lícita se considera sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?	60
Tabla N° 8. ¿Qué criterio usaría Ud. para la valoración lógica de los elementos de convicción en nivel de sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?	61
Tabla N° 9. ¿Cómo considera Ud. que se define a la sospecha fuerte cuando se analiza la medida de coerción procesal más gravosa en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?	62
Tabla N° 10. ¿Cree Usted que la sospecha grave y/o la sospecha fuerte están por encima del nivel de convicción de sospecha suficiente en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?	63

Tabla N° 11. Respecto a la pregunta anterior, ¿Considera Usted que el Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 confunden los términos “suficiencia probatoria” con “sospecha suficiente”? 64

Tabla N° 12. ¿Cree Usted que sustentar la prisión preventiva cuando la investigación está en un grado de sospecha reveladora contradice los criterios de sospecha grave y/o fuerte? 65

Tabla N° 13. ¿Considera pertinente realizar un Acuerdo Plenario Nacional a fin de unificar criterios de valoración probatoria en la acreditación de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos? 66

Resumen

La investigación determina el criterio de valoración probatoria que se toma en cuenta respecto a la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos; el diseño de esta investigación es cuantitativo, tipo descriptivo, el nivel explicativa; la muestra es no probabilística selectiva por conveniencia; se ha seleccionado a 14 jueces, 25 fiscales y 60 abogados. Aplicándose como técnicas la encuesta e instrumento el cuestionario, el método es deductivo; de los resultados se aprecia de la figura N° 2, que el 53.54% considera que la lógica es el método más oportuno para determinar la responsabilidad penal al valorar los indicios; y, en la figura N° 8, el 58.59%, usarían para la valoración lógica de los elementos de convicción en nivel de sospecha grave a la probabilidad especial o cualificada; finalmente, se concluye que la valoración probatoria de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos, se determina en un criterio de valoración lógica, basado en probabilidades; dado que, en el requerimiento, solamente se considera la gravedad de los elementos de convicción; la fortaleza en la convicción, o sospecha fuerte, es el producto de la valoración judicial.

Palabras Clave: Sospecha Grave, Sospecha fuerte, Prisión preventiva, Lavado de activos, Valoración probatoria.

Abstract

The investigation determines the criteria that must be taken into account regarding evidentiary valuation when there is serious suspicion in the pre-trial detention in the crime of money laundering. The design of this research is of a quantitative, descriptive and explanatory level. The sample is selected for convenience non-probability; 14 judges, 25 prosecutors and 60 lawyers have been selected. Applying the survey and the questionnaire as the instruments to use in the survey, the method is deductive. From the results, it can be seen from figure 2, that 53.54% consider that logic is the most appropriate method to determine criminal responsibility when evaluating the evidence. In figure N° 8, 58.59%, would use for the logical evaluation the elements of conviction where the level of serious suspicion is the special or qualified probability. Finally, it is concluded that the evidentiary evaluation in the crime of money laundering, is determined by a logical valuation criteria, based on probabilities; given that, in the request, only the gravity of the elements of conviction is considered; strength in conviction or a strong suspicion is the product of judicial valuation.

Keywords: Serious Suspicion, Strong Suspicion, Pre-trial Detention, Money Laundering, Evidentiary Valuation.

I. INTRODUCCIÓN

El movimiento de capitales ilícitos es una de las formas más comunes de criminalidad especializada, el lavado de activos (en adelante L. A.), nombre por el cual se conoce a este ilícito, es una etapa posterior a la ejecución criminal, cuya finalidad es hacer uso del dinero mal habido y regresarlo a la economía desprovisto de cualquier tipo de sospecha; para ello, el criminal hace uso de un delito fuente que tenga la capacidad de generar ingresos, lo que a su vez sustenta un delito posterior (acto de lavado); investigar el delito posterior permite desarticular la red criminal; por lo que, se considera pertinente llamar al L. A. “el delito de delitos”; ya que, reprimirlo implica enfrentar a la criminalidad en todas sus modalidades, siendo necesario evitar que estos delincuentes consigan revestirse de impunidad.

Los equipos de investigación de la materia están logrando éxitos antes impensados, alcanzando incluso las altas esferas de poder político y permitiendo que el ciudadano recupere la tan mermada confianza en los órganos jurisdiccionales. Esta realidad ha sido posible gracias al fortalecimiento de las normas procesales relacionadas al delito de delitos, tal como su autonomía, sustentada en la Sentencia Plenaria Casatoria (en adelante S. P. C.) N° 1-2017/CIJ-433, que tal como explica León (2017), está determinada por:

“Los criterios estándar de la autonomía del delito de lavado de activos serán tres, el primero será facultativo, otorgándole al magistrado la posibilidad de sancionar en base a sospecha suficiente; el segundo será un criterio de prescindibilidad de la noción de gravedad, que implica la carencia de apreciación del delito precedente; y finalmente el criterio de preponderancia de la prueba indiciaria sobre la prueba directa, siendo en este caso relevante la sola sospecha para determinar el nexo con el delito previo.” (p. 48)

La jurisprudencia es la que da cuenta de los presupuestos de sospecha delictiva, criterio que también ha sido estudiado en el extranjero de forma genérica; un ejemplo de ello es la investigación de Haigner, Schneider & Wakolbinger (2012) quienes mencionaron que: “(...) policy makers should clearly define the main information and data requirements authorities need to effectively thwart money

laundering (...). Then, they need to advice financial and non-financial businesses on how to detect these data and how to determine suspicious transactions.” (p. 75)

Traducción: “(...) los encargados de las políticas deben definir los datos y requisitos de información necesarios para que las autoridades puedan combatir efectivamente el lavado de dinero (...). Para ello, deben asesorar a las empresas, ya sean financieras o no financieras para que sean capaces de detectar estos datos y determinar transacciones sospechosas.” (p. 75)

Resalta el hecho de que las actividades sospechosas son elementos vitales del cumplimiento de los requisitos típicos del delito de L. A., siendo la colaboración del sector privado elemental para la investigación; contradictoriamente, acreditar los requerimientos de valoración probatoria respecto a los grados de sospecha, sigue siendo un punto de discusión doctrinaria; ya que, en ningún caso, debería mencionarse sólo de manera verbal la existencia de sospecha, sino que esta debe estar sustentada en claros estándares probatorios, y tales estándares en la actualidad son tan ambiguos, que los operadores del derecho consideran que su significado es contenedor de un razonamiento, cayendo en una dogmática jurídica producto del simbolismo de la sospecha.

En la actualidad, ha sido especialmente controvertido el caso de la sospecha grave, de la cual solamente se ha hablado jurisprudencialmente levantando polémica por las actuales medidas de coerción procesal aplicadas para los casos emblemáticos que se vienen tramitando en las instancias jurisdiccionales; es decir, a pesar de que la prisión preventiva tiene una larga data de aplicación, por primera vez, se ha requerido analizar a profundidad la constitucionalidad de la figura, la proporcionalidad y sobre todo su razonabilidad; en todo caso, debería haber un estándar de fundamentación adecuada para evitar vulnerar los derechos que le corresponden a la persona mientras no se haya superado su presunción de inocencia.

Esta problemática referida a la sospecha grave es un punto de álgida discusión, sobre todo porque la dirección de investigación suele sustentar su requerimiento inmediatamente después de concluidas las diligencias preliminares a pesar de estar en el exordio de convicción de sospecha reveladora; para

complicar aún más la problemática, el Acuerdo Plenario (en adelante A. P.) N° 1-2019/CIJ-116 sustenta que, la sospecha fuerte está compuesta por la sospecha grave y fundada, siendo este el estándar de sustentación de la medida de coerción procesal más gravosa; no obstante, al ponerla por encima del nivel de convicción de la sospecha suficiente ha provocado una mayor confusión y crítica en la administración de justicia.

Ante las cuestiones problemáticas manifestadas, esta investigación tuvo la finalidad de brindar un aporte aclaratorio a la teoría en materia de sospecha grave en el delito de L. A., de modo que se aplicará en la Ciudad de Chiclayo; y, se tomó el criterio de los órganos jurisdiccionales penales y la defensa técnica; es decir, jueces, fiscales y abogados, siendo la pregunta de investigación:

¿Qué criterio de valoración probatoria deben tener en cuenta los jueces, fiscales y abogados penales respecto a la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

La investigación se realizó porque existe un pronunciamiento contradictorio en los órganos jurisdiccionales penales sobre los requerimientos probatorios y su valoración respecto a los grados de sospecha en el proceso penal de L. A.; especialmente, en relación a la sospecha grave, cuya definición normativa, y su aplicación práctica, no se condice con lo establecido a través de la jurisprudencia vinculante de la materia, que ha determinado erróneamente que la sospecha grave está por encima de la sospecha suficiente; obteniéndose como resultado, el desarrollo de procesos penales muy criticados en la doctrina, ante el conflicto de la presunción de inocencia, la detención arbitraria y el uso de las medidas de coerción procesal.

El resultado de esta investigación permitió tener un contexto técnico, teórico, y práctico que estableció de forma clara el criterio de valoración probatoria de la sospecha grave en el delito de L. A., lo cual, permitirá una mejor sustentación del proceso penal; una definición de la sospecha grave que precisó la diferencia que ésta tiene con los demás grados de sospecha, para un mejor desenvolvimiento en sus respectivas labores de los sujetos procesales; ésta investigación servirá de sustento para la realización de un Acuerdo Plenario Nacional.

Esta investigación es beneficiosa para los sujetos procesales; es decir, a los jueces penales del Poder Judicial, a los fiscales del Ministerio Público, a los abogados de la defensa, públicos o privados, al imputado, la Unidad de Inteligencia Financiera y demás sujetos vinculados a la detección del delito de L. A.; en la medida que, favorece la correcta aplicación de la medida de coerción más gravosa al proceso de L. A.; es decir, que sea acorde a los derechos fundamentales, salvaguardando la presunción de inocencia, y permitiendo la aplicación de medidas coercitivas de manera idónea, evitando que se frustre el proceso de L. A. por una valoración probatoria inadecuada de la sospecha grave para este delito.

El objetivo general fue: Determinar qué criterio de valoración probatoria deben tener en cuenta los jueces, fiscales y abogados penales respecto a la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos; para el logro de este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- a) Establecer el criterio de valoración probatoria respecto a la sospecha grave que son utilizados en el análisis del requerimiento de prisión preventiva en el delito de lavado de activos y diferenciándolo de los grados de sospecha requeridos para avanzar en las etapas del proceso común.
- b) Identificar si la probabilidad cualificada como criterio de valoración probatoria tiene mayor relevancia para los jueces, fiscales y abogados penalistas respecto a la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos.
- c) Proponer que se desarrolle un Acuerdo Plenario Nacional a fin de unificar criterios respecto a la valoración probatoria y la suficiencia probatoria en la acreditación de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos.

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se planteó la siguiente hipótesis:

H1: El criterio de valoración probatoria que deben tener en cuenta los jueces, fiscales y abogados penales respecto a la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activo, es la probabilidad cualificada.

II. MARCO TEÓRICO

Es así que se presentan los trabajos previos de esta investigación, empezando por los trabajos a nivel internacional, es así que se encontró la investigación de la tesista Durrieu (2012) en su tesis titulada ‘Rethinking Money Laundering Offences: A Global Comparative Analysis’; Tesis para obtener el grado de Doctor en Filosofía del Derecho, en la University of Oxford – United Kingdom, quien en el segundo párrafo de su texto conclusivo expresó la siguiente característica:

“It is drafted as an autonomous and multi-offensive crime, which simultaneously safeguards the following main social values and interests: first, the right and social value protected by the predicate offence of ML; secondly, the administration of justice; and, finally, the fair competition of the economic market. That is to say, a crime of ML independently modelled from the predicate and the concealment offence.” (p. 349 - 350)

Traducción: “Se redacta como un delito autónomo y multi – ofensivo, que protege simultáneamente los principales valores e intereses sociales tales como: primero, el derecho y los valores sociales protegidos por el delito determinante de ML (lavado de dinero); en segundo lugar, la administración de la justicia, y, por último, la competencia leal en la economía de mercado. Es decir, un crimen de ML modelado independientemente del determinante y del delito de encubrimiento.” (p. 349 - 350)

El reconocimiento de la autonomía y la pluriofensividad del delito de L. A. se ha convertido en una tendencia internacional, no solo por el hecho de permitir una mejor investigación en términos procesales, sino que brinda efectivamente una protección más amplia, abarcando de esta manera un campo distinto a lo que está protegido por el delito fuente. Se presenta también la investigación de Lafolla (2015), en su tesis titulada: “Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy in Canada: Origins, Implementation, and Enforcement”; Tesis para obtener el grado de Doctor, en la University of Toronto – Canadá, quien, en la primera parte de su conclusión inicial, expresó:

“Through an empirical investigation of the origins the AML/CTF complex, its implementation in retail banking, and the enforcement practices of employees in this sector, I make intellectual contributions to three distinct literatures: the literature on policing, by calling into question the legally-mandated third party policing practices imposed in financial institutions and inquiring into the ways those practices are undertaken by the private sector; the literature on risk, by inquiring into the construction and mobilization of risk to identify suspicious financial activity; and the literature on the sociology of money, by examining the changing cultural and social meanings of money in the context of risky financial transactions. (...).” (p. 7)

Traducción: “A través de una investigación empírica de los orígenes del complejo AML / CTF, su implementación en la banca minorista y las prácticas de cumplimiento de los empleados en este sector, pueden hacerse contribuciones intelectuales a tres temáticas distintas: la temática sobre la vigilancia policial, al cuestionar legalmente las prácticas policiales obligatorias de terceros impuestas en las instituciones financieras y la investigación de las formas en que esas prácticas son llevadas a cabo por el sector privado; la temática sobre riesgos, investigando la construcción y movilización de riesgos para identificar actividades financieras sospechosas; y, la temática sobre la sociología del dinero, al examinar los cambiantes significados culturales y sociales del dinero en el contexto de transacciones financieras riesgosas.(...).” (p. 7)

Este aporte doctrinario resulta vital para desarrollar la investigación, por añadir elementos surgidos desde el empirismo del autor, las precisiones refieren carencias del sistema anti lavado en Canadá; pero, el autor no se enfoca en señalarlas sino que genera propuestas de solución, las que finalmente, están relacionadas a la vigilancia policial, los riesgos y la sociología del dinero; esto permite apreciar la problemática desde un punto más genérico de donde emanan una serie de criterios que configuren sospecha inicial simple, que es el primer grado de sospecha, y que será el primer atisbo de la investigación constituyéndose en prueba indiciaria.

Un antecedente a nivel internacional destacable es la investigación del tesista Terra de Oliveira (2016), en su tesis titulada: “Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”; para obtener el grado de doctor en derecho, en la Universidad

Complutense de Madrid – España, quien, en su vigésimo séptima conclusión, expresó:

“La prevención de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo debería ser el enfoque principal y la vía siempre preferente ante el avance desmesurado de medidas de carácter represivo y la franca expansión del Derecho penal en esta materia. No se puede aceptar la vulneración de derechos fundamentales y de históricas garantías construidas a lo largo de los últimos siglos en detrimento de demandas colectivas de seguridad.” (p. 615)

Es preocupante que el proceso penal lesione los derechos fundamentales, por lo cual, existen discrepancias argumentativas respecto a que invocando la sospecha grave en las medidas de coerción se esté soslayando la presunción de inocencia y las garantías otorgadas por la ley; lo cual no implica que sea imposible reprimir conductas que realmente vulneren las normas y que reúnan los requisitos legales exigidos para una medida de coerción procesal tal como lo señalado por el Artículo (en adelante Art.) 268 del CPP, dado que, además están sometidas a decisiones del Poder Judicial, el delito de L. A. debe ser analizado como un delito especial que requiere un tratamiento diferenciado, pericial, técnico e incluso científico, tal como se ha determinado en el ámbito jurisprudencial.

También se presenta como antecedente internacional la investigación del tesista Mendoza (2017) en su tesis doctoral titulada “El tipo base del delito de lavado de activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106): (apuntes desde el derecho penal español)”, en la Universidad de Salamanca – España, que en su trigésimo cuarta conclusión argumentó que:

“La prueba de la procedencia delictiva de los bienes debe efectuarse cuando menos mediante prueba indiciaria. En el art. 10 del D. Leg N° 1106, no se establece ninguna cláusula que suprima (o habilite eludir) los deberes de postular, probar o valorar el origen delictivo de los bienes (la categoría del delito fuente). Éste, por ser también un elemento objetivo de los tipos base y agravado del lavado, debe ser incorporado al objeto procesal, garantizándose su debate, como su ulterior valoración judicial.” (p. 461)

Este autor español hace un estudio de la tipificación del delito de L. A. en el Perú en el año 2017, año en que jurisprudencialmente se establecieron las explicaciones normativas necesarias para desligar la investigación del delito fuente del L. A., en tal sentido, fue la prueba indiciaria la que obtuvo preponderancia para evaluar el delito previo cometido, no siendo necesario un nivel mayor de convicción sobre la existencia de un delito previo; pero, evidentemente, si la fiscalía busca que su imputación tenga una mayor fuerza acreditativa, requerirá mayor evidencia del origen ilícito; no obstante, lo que se afirma es que el criterio de valoración en ese sentido quedará a discrecionalidad del juzgador, toda vez que la fiscalía no está obligada a sostener mayor evidencia del ilícito previo.

Otra investigación internacional relevante es la presentada por el tesista Naheem (2017) en su tesis titulada “Trade based money laundering: exploring the implications for international banks”; Thesis for the degree of Doctor, en la University of Wolverhampton – United Kingdom, quien en la primera parte de su texto conclusivo manifiesta que:

“Different forms of financial crime, including the laundering of money through trade related activities, continue to present as challenges to the global banking sector. The banks traditional approach of making a distinction between the source of the funds and the money in the client’s account is now facing stronger scrutiny by regulators and legislators across the globe. A number of factors are beginning to influence changes in how money laundering risk is being perceived by the financial services sector and by those who are stakeholders and customers of these services.” (p. 558)

Traducción: “Diferentes formas de delincuencia financiera, incluyendo el blanqueo de dinero a través de actividades relacionadas con el comercio, continúan presentando desafíos para el sector bancario global. El enfoque tradicional de los bancos de hacer una distinción entre la fuente de los fondos y el dinero en la cuenta de cliente se enfrenta ahora a un examen más sólido de los reguladores y legisladores en todo el mundo. Varios factores están empezando a influir en los cambios en la forma en que el sector financiero, los interesados y clientes perciben el riesgo de blanqueo de capitales.” (p. 558)

El sistema bancario, que está también obligado a detectar las actividades criminales de L. A., tiene un gran desafío, es sumamente importante que la operación criminal sea detectada antes de su ingreso al sistema y no después; por ello, la alta especialización requerida; por lo que, también ha empezado a hablarse de una teoría del riesgo sobre este delito en particular, y se han implementado políticas para detectar este delito con mayor eficacia, involucrando principalmente al sector público, sin excluir las innovaciones estratégicas en el sector privado.

Finalmente, para concluir los antecedentes internacionales se presenta la investigación de Maurer (2017), en su tesis titulada: "Release from Pre-Trial Detention in Theory and Practice in Modern International Criminal Justice in the Light of International and European Human Rights Standards"; para optar por el Grado de Doctor en Leyes, en la Universität Wien – Austria, que en la parte final del tercer párrafo de su texto conclusivo precisa:

"(...) four main conditions were established that may in certain cases justify such a reversal of the burden of proof: Firstly, to justify the shifting of the burden of proof to a defendant, it must be established that he or she either acted intentionally or at least negligently; (...). Secondly, the act of the defendant must have created a particular situation, meaning that for one reason or another, the evidence is not only closer to the defendant than to the prosecuting organ, (...). Thirdly (...), the interest in not letting such offences or crimes go unpunished must be of particularly significant interest to the wider public (...). Fourthly, because the imposition of any reverse burden of proof necessarily also increases the chance of a false conviction, the principle of proportionality must be respected: (...)." (p. 231 – 232)

Traducción: "(...) Se han establecido cuatro condiciones que para ciertos casos pueden justificar la inversión de la carga de la prueba: en primer lugar, para justificar la transferencia de la carga de la prueba al acusado, debe establecerse que actuaron intencionalmente o al menos negligentemente; (...). En segundo lugar, el acto del acusado debe haber creado una situación particular, lo que significa que, debido a las circunstancias, la evidencia está más cerca del acusado que del órgano acusador, (...). En tercer lugar, (...), el interés de no dejar que tales delitos o crímenes queden impunes debe ser de interés particularmente significativo

para proteger el orden público y las buenas costumbres (...). Cuarto, debido a que la imposición de la carga de la prueba al imputado aumenta la posibilidad de una condena falsa, debe respetarse el principio de proporcionalidad: (...).” (p. 231 – 232)

El tesista advierte enfocándose en el ámbito procesal de la prisión preventiva, que cuando la carga de la prueba es exigida al imputado, deben cumplirse requisitos, precisando cuatro de ellos, que implican la plena identificación del imputado, que el imputado cuente con más posibilidades de acceder a los medios de prueba, que los delitos cometidos afecten al orden público o sean pluriofensivos, y finalmente, que se respete la proporcionalidad no convirtiéndose en una falsa condena o “condena preventiva”.

A continuación, se presentan las investigaciones previas a nivel nacional, se ha ubicado al trabajo del tesista Guillen (2017), en su tesis titulada: “La investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015”; para optar por el grado de Magister en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, en la Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú, que, en su conclusión inicial, manifiesta:

“Los mecanismos de control implementado por el Estado Peruano en la lucha contra el lavado de activos son tres es decir la prevención, la detección y la represión, sin embargo existe una exigua o casi nula coordinación interinstitucional que no permite una acción eficaz por parte de los actores comprometidos. Esto se refleja en las cifras publicadas por cada una de ellas. En el caso de la Dirección de Lavado de Activos el 2004, no hubo ningún detenido mientras que el 2015 solo registra 2 detenidos. El Ministerio Público solo logró dos sentencias condenatorias durante el 2015 y el Poder Judicial a la fecha informó que desde la dación de la ley solo existen doce sentencias condenatorias, sin embargo la Unidad de Inteligencia Financiera reportó durante esos dos años que formuló 52 y 70 informes de inteligencia, respectivamente, con valor probatorio” (p. 53)

La casuística de L. A., en especial la relacionada a la corrupción de funcionarios, demuestra que prevaleció un ambiente de impunidad; el A. P. N° 3-

2010/CIJ – 116, debido a su inexactitud respecto al delito previo, generaba excepciones de improcedencia de acción, y consecuentemente el sobreseimiento o archivo del proceso; la modificación de la norma sustantiva a través del Decreto Legislativo (en adelante D. Leg.) N° 1249 del año 2016, dispuso su autonomía, la cual a posteriori se confirmaría jurisprudencialmente en 2017; a pesar de este cambio en la figura, no se definió a la sospecha grave, permitiendo que los requerimientos de prisión preventiva se planteen en un nivel de convicción de sospecha reveladora, provocando diatribas contra el abuso de esta medida.

Un antecedente nacional importante es la investigación de Castillo (2018) en su estudio titulado “Prueba indiciaria en el delito de lavado de activos en el distrito judicial de Lima Norte, 2016”, tesis de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, en la Universidad César Vallejo – Perú, que en su tercera conclusión manifiesta que:

“Según la Corte Suprema de Justicia de la Republica mediante el acuerdo plenario 03-2010 ha ubicado dentro del ámbito de aplicación de la prueba indiciaria a la verificación de operaciones inusuales o sospechosas y la verificación de negocios lícitos insuficientes que justifiquen el incremento patrimonial. Desde la percepción de los abogados el acto de transferencia constituye ventas, donaciones, liberalidades o actos jurídicos destinados a ocultar la procedencia delictiva del lavado de activos. Siendo las operaciones sospechosas quien constituye el mayor indicio del acto de transferencia.” (p. 55)

El incremento patrimonial es el principal indicio; ya que, levanta sospechas sobre la comisión de este hecho ilícito; dado que, jurisprudencialmente este elemento inicia la investigación criminal, y se conoce preliminarmente mediante la prueba por indicios, la cual se ha erigido como la prueba por excelencia; no obstante, si bien se puede aperturar investigación con prueba indiciaria, sigue siendo insuficiente para demostrar responsabilidad penal por el delito de L. A.; en todo caso, habrá que aportar una variedad de pruebas para sostener una imputación; pero, cuando lo que se pretende es sustentar el delito previo, bastará precisar el origen ilícito, siendo esta una de las estrategias que puede usar el director de la investigación, dentro de los lineamientos del debido proceso.

Otro antecedente nacional es el del tesista Rodríguez (2018) en su tesis titulada “La inconstitucionalidad de la No necesidad de condena del delito fuente para sancionar a procesados por lavado de activos”; Tesis para obtener el título de abogado, en la Universidad Continental – Huancayo, Perú, quien en la primera parte de su sexta conclusión expresa que:

“Para que el Artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106 subsista dentro del sistema legal, y sea armonioso con los principios constitucionales, debe de ser interpretada de manera sistemática, es decir, debe de tomar en consideración los supuestos de hecho que se encuentran contenidos en los Artículo 1°, 2° y 3° que hacen referencia a la procedencia ilícita, incluso con el Artículo 7° el cual precisa como regla de investigación que el levantamiento del secreto bancario, comunicaciones, bursátil y tributario debe de ser utilizado con la investigación de los hechos que la motivaron, siendo esto así mínimamente se debe de determinar la procedencia ilícita del activo y que esta efectivamente corresponda a una actividad criminal.” (p. 136)

Esta investigación refleja la necesidad de precisar el origen ilícito en la investigación de blanqueamiento de capitales; para ello, se debe aplicar un análisis sistemático de la autonomía del delito, precisando por supuesto el cumplimiento del tipo penal, por lo tanto, resulta muy relevante el análisis de la sospecha; ya que, se investigará la situación fáctica que dio origen al ilícito investigado, sin violentarse los principios constitucionales.

Se ha emplazado otro antecedente nacional que es la investigación del tesista Meza (2019) en su investigación titulada “La prueba como garantía mínima para el debido proceso en delitos de lavado de activos – distrito judicial Lima – 2018”, tesis para obtener el grado de abogado, en la Universidad San Andrés – Perú, que en su cuarta conclusión refiere que: “El 74% de los encuestados explican que los medios de prueba en los casos de lavado de activos son determinantes para la garantía de un debido proceso penal. Sin embargo, el 26% de lo analizado es resuelto contrariamente vulnerándose el debido proceso.” (p. 117); su estudio revela la realidad del procesamiento de este delito, destacándose la desconfianza en el debido proceso y el ofrecimiento probatorio.

Finalmente, como último antecedente nacional se ha ubicado a la investigación del tesista Zúñiga (2019), en su investigación titulada “Nuevos Estándares en la motivación de la Prisión Preventiva según el Tribunal Constitucional; sus efectos en la administración de justicia.”, tesis para optar al Grado Académico de Maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, quien en su segunda conclusión establece que:

“El primer presupuesto de la prisión preventiva ha sido considerado por la doctrina y la jurisprudencia como un elemento indiciario, que traducido ahora en la letra de la ley, consiste en fundados y graves elementos de convicción que vinculan al autor como autor o partícipe del delito. Es pacífica la doctrina en considerar que estos indicios deben ser de tal magnitud que hagan presumir razonablemente un altísimo grado de participación del agente en la comisión del delito. Pero para ello, no es necesario en esta etapa inicial desarrollar toda una actividad probatoria como exige el Tribunal Constitucional en la sentencia en comento, porque de esa manera se desnaturalizaría la esencia del indicio.” (p. 100)

Pronunciándose respecto a la prisión preventiva, el tesista señala que el indicio constituye una parte importante en el requerimiento de esta medida de coerción, toda vez que será la magnitud de estos indicios la que determine la participación del agente, contradiciendo lo señalado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional que prácticamente hace que este requerimiento tenga una pseudo actividad probatoria.

Consecuentemente, se presentan los trabajos previos a nivel local se presenta la investigación de Fernández (2017), en su tesis de Maestría en Derecho con Mención en Constitucional y Gobernabilidad, titulada “La vulneración al derecho a la libertad personal por aplicación abusiva de la prisión preventiva: Chota 2015 – 2016”; en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que en su tercera conclusión refiere que “Que la aplicación de la Prisión Preventiva se ha convertido en una pena adelantada y regla general en todo proceso iniciado (p. 213)”; con esta precisión, el tesista advierte que la prisión preventiva se está convirtiendo en una pena adelantada,

debido a que carece de precisiones normativas (siendo una de ellas la sospecha grave), siendo requerida para todos los casos sin cumplirse los requisitos.

Otro antecedente local emplazado es la destacada investigación enfocada en la desvinculación del L. A. y el delito previo, desarrollada por Céspedes (2018), en su investigación titulada “La autonomía del delito de lavado de activos y su aplicación en la legislación nacional.”, Tesis para obtener el título de abogado, en la Universidad Señor de Sipán, quien en su tercera conclusión precisa que:

“El elemento normativo del tipo penal de lavado de activos no es el denominado “delito previo” sino el “origen ilícito” por lo que para investigar, procesar y sancionar el lavado de activos, no se exige la postulación y probanza del delito previo, sino solamente se requiere la identificación a través de la prueba indiciaria de la actividad criminal que originó los activos ilegales.” (p. 89)

Esta investigación reafirma categóricamente la autonomía del delito de L. A., toda vez que reafirma que para sostener la imputación por L. A. basta señalar el origen ilícito; por lo que, lo relacionado con la investigación del delito previo resulta irrelevante, siendo posible, bajo estos presupuestos, sancionar la conducta criminal; lo cual, no exime de manera alguna la necesidad de alcanzar un nivel de convicción que sea capaz de vencer toda duda razonable; es decir, superar la sospecha suficiente exigida para conseguir un auto de enjuiciamiento al finalizar la etapa intermedia.

Otro antecedente local intimado es del tesista Rivas (2018) en su tesis titulada “El delito de lavado de activos en el ámbito empresarial peruano”; para obtener el título de abogado, en la Universidad Señor de Sipán – Pimentel, Perú, quien en el segundo párrafo de su texto conclusivo manifestó que:

“De igual manera se concluye que este ilícito penal, en cuanto a la ejecución por parte de las empresas, es un delito de naturaleza pluriofensivo, toda vez que no sólo vulnera al bien jurídico tutelado de la administración de justicia, sino también al orden económico o financiero del Estado.” (p. 76)

El autor referido analiza la esfera de protección que el legislador ha previsto para este delito, considerando tanto a las finanzas públicas como a la

administración de justicia; no obstante, el delito de L. A. va mucho más allá, protegiendo la administración pública en general; ya que, está determinado que las organizaciones criminales buscan adquirir poder, y a través de eso, impunidad.

Otra investigación a nivel local muy destacada es la realizada por el tesista Sánchez (2018), en su estudio titulado “La aplicación de la atenuación facultativa de pena del Art. 13.2 del Código Penal a la responsabilidad penal por lavado de activos del compliance officer.”, Tesis para obtener el título de abogado, en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, el cual, en la primera parte de su quinta conclusión define que:

“Dentro de las funciones que están dentro del Rol funcional del Oficial de Cumplimiento encontramos a: Vigilar el cumplimiento Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo-SPLAFT, verificando la aplicación de las políticas y procedimiento implementados para el conocimiento del cliente y el trabajador. Analizar las operaciones inusuales detectadas, con la finalidad de determinar las operaciones que podrían ser calificadas como sospechosas, llevando control de ellas. Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual de Prevención y Adoptar las acciones necesarias que aseguren su capacitación, la de la persona y del Sujeto Obligado. Ser el interlocutor ante la Unidad de Inteligencia Financiera- Perú y Emitir informes anuales y custodiar los registros y demás documentos., además, de Contar con un registro de operaciones y custodiarlo por el plazo establecido.” (p. 102)

Las normas de persecución del delito de L. A. han cambiado a lo largo del tiempo endureciéndose cada vez más, y también, haciendo partícipes a las instituciones privadas y públicas de la lucha contra estos actos delictivos, tal es así, que hoy en día se puede apreciar que las instituciones requieren necesariamente de un Oficial de Cumplimiento, figura que en muchos casos está inmersa en las funciones del Asesor legal de las empresas, o de un equipo de asesores, con la finalidad de adoptar acciones que permitan identificar las operaciones sospechosas; esto para evitar convertirse en cómplices de esta actividad delictiva, pudiendo ser sancionados tanto penalmente como económicamente por no brindar la información de manera oportuna.

Finalmente, también a nivel local, se desataca la investigación del tesista Santa Cruz (2018), en su tesis de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal titulada: “Propuesta de un proyecto de ley en la implementación de reglas de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos para proteger las garantías procesales del imputado”; en la Universidad Señor de Sipán – Perú, quien manifiesta en su tercera conclusión que:

“La prueba indiciaria en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se viene aplicando en el delito de lavado de activos donde no se tiene en cuenta en su valoración no solo los presupuestos materiales sino también las conductas sospechosas cuyas acciones contemplan los tres requisitos validos de la prueba indiciaria mencionados en la primera conclusión. Actualmente la prueba indicaría se encuentra regulada en el 2do párrafo del Art. 10 del Decreto Legislativo N° 1106, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249 de lucha contra el lavado de activos.” (p. 105)

La argumentación vertida responde a la observancia de la norma que regula el L. A. en el Perú, justamente se ha citado el Art. 10º del D. Leg. N° 1106, que da cuenta de la autonomía de este delito, pero sobre todo, a lo dispuesto por las jurisprudencias de la materia, toda vez que resalta la preponderancia de la prueba indiciaria; esto ocurre debido a que los presupuestos materiales son de difícil obtención dada la complejidad del delito, debiendo ser complementados por el análisis de otras conductas o pruebas indirectas, que bien hace el autor en llamar “conductas sospechosas”, estas serán las que finalmente precisen el proceder delictivo y la dirección que deberá tomar el investigador para cada caso específico.

Acto seguido, se procede a desarrollar las teorías relacionadas al tema; así pues, respecto a la Noción de los Derechos Humanos, se ha superado el positivismo respecto a estos derechos, actualmente, ya no se exige su regulación explícita, Mejía (2017) menciona, que la existencia humana se define por su dignidad, dicho derecho fundamental a su vez es el *ratio legis* de los derechos humanos, y de dicho concepto es que emanan todos los derechos, libertades y garantías. Tal definición enaltece a la dignidad sobre la vida humana, condición que también se concretiza en los ordenamientos jurídicos al priorizarlo normativamente,

lo cual de manera tácita pone en manifiesto que la condición humana se caracteriza propiamente por tener dignidad.

Ahora bien, uno de los derechos fundamentales reconocidos es la presunción de inocencia; este derecho fundamental es de naturaleza adjetiva en la rama de las ciencias penales, según González (2015), es “(...) una garantía procesal” (p. 1), toda vez que pertenece a los derechos vinculados al debido proceso; no obstante, este autor también manifiesta que este derecho vincula a los poderes públicos pues evita que se condene a quien no tuvo ninguna responsabilidad penal. De manera que, será en juicio oral y solamente en esta etapa procesal cuando se determine la responsabilidad penal del imputado, salvo que de forma previa decida aceptar los cargos en su contra, para lo cual también deberá sustentarlo de manera coherente.

La presunción de inocencia se define en dos principios que lo componen de forma elemental, según Aguilar (2014): “Firstly, it is a probative rule that is reflected in the ‘in dubio pro reo’ principle and secondly, (...), —the State— carries the burden of proof.” (p. 4)

Traducción: “En primer lugar, es una regla probatoria que se refleja en el principio “in dubio pro reo” y, en segundo lugar, (...), el Estado, lleva la carga de la prueba.” (p. 4)

La presunción de inocencia es un principio netamente procesal, pero que está garantizado como un derecho fundamental, en tal sentido, el autor ha considerado darle dos significados concretos, el primero que emana del derecho romano, y el segundo que resulta ser la labor fundamental del director de la investigación, toda vez que cada hecho que impute está obligado a demostrarlo, y ello incluye reunir los requisitos probatorios para acreditar cualquier requerimiento que solicite, así como el sustento de su acusación.

Para De Jong & Van Lent (2016), la noción que conocemos de presunción de inocencia esta ligado a “First, the presumption of innocence is firmly connected with the authority of the court or the adjudicating judge.(...) Second, the presumption of innocence is essentially a counterfactual notion.” (p. 48)

Traducción: “Primero, la presunción de inocencia está firmemente relacionada con la autoridad del tribunal o del juez que lo juzga. (...) Segundo, la presunción de inocencia es esencialmente una noción contra fáctica.” (p. 48)

Este autor recoge dos conceptos resaltantes respecto a la presunción de inocencia, cuando menciona la autoridad del tribunal, hace ver que quien está señalado para proteger este derecho durante todo el transcurso del proceso es el juez, por lo cual, este derecho no necesita ser invocado por las partes, porque ya consta como un principio en las normas del debido proceso; por otro lado, este derecho debe estar complementado con el contenido de la imputación, dado que, no basta con señalar al imputado como el presunto delincuente para vencer la presunción favorable de inocencia, todo lo contrario, este derecho permanecerá hasta que el mismo juez decida si corresponde atribuir responsabilidad penal sobre el imputado emitiendo una resolución que se someterá a segunda instancia.

La lucha contra la criminalidad ha generado políticas de acoso en los sospechosos, es así como operó el sistema inquisitivo procesal; Aguilar (2014) manifiesta, que la seguridad pública y la presunción de inocencia son derechos que comúnmente están en oposición debido a que obstaculizan la ejecución de políticas penales generando mitos en la detención preventiva; y es que, la aplicación de una medida de coerción procesal, que si bien es cierto, es extraordinaria, fue pensada para proteger el proceso y continuar con la investigación; tal ejercicio procesal es sometido a requisitos, por lo tanto, no puede menoscabar los derechos inquebrantables de la persona, el sometimiento al encierro bajo estas circunstancias no podría ser bajo ninguna óptica una arbitrariedad.

Los mitos a los que se refiere el autor son los que promueven que toda encarcelación antes de juicio del imputado es arbitraria, lo mismo sucede ante la aplicación de las demás medidas de coerción procesal; muchos juristas consideran arbitrarios los requerimientos solicitados por el representante del Ministerio Público, precisando que ha hecho de la excepción una regla; ya que, la norma adjetiva señala que es una medida extraordinaria, sin asumir ni reconocer que la decisión se somete a la administración de justicia a cargo del juez de garantías; por otro lado, cualquier influencia de terceros perjudica la investigación o proceso.

La casuística peruana ha demostrado la repulsiva intervención existente en el proceso penal; especialmente, en los casos que trascienden en los medios de comunicación por tener entre los imputados a un personaje público; es calamitoso ver a los funcionarios públicos y también magistrados en ejercicio hablando de manera previa sobre una causa que posiblemente llegará a sus despachos, hecho

que incluso ha ocurrido en el Tribunal Constitucional Peruano, donde es imposible la recusación, y que es lamentable porque inhabilita moralmente a los vocales; este comportamiento pretende ser justificado señalando que se encuentran en el marco de los derechos fundamentales que les asisten, cuando un juzgador debe evitar tomar una postura decisoria antes de celebrado el juicio.

El sistema anglosajón permite más libertad a los agentes policiales, los cuales, no se preocupan por la sanción penal, lo cual podría derivar en un uso desmedido de la fuerza por parte de los efectivos policiales, provocando denuncias en su contra; según Hsieh (2011), las denuncias de abuso de autoridad se ven frustradas por cuatro razones: la fiscalía es renuente a acusar a las fuerzas del orden, los policías encubren las evidencias de sus compañeros, manteniendo un código de silencio que les impide acusarse mutuamente, y finalmente, la benevolencia del jurado para acusar a los oficiales de policía; todo ello, demuestra que para evadir la sanción penal basta que se unan tres elementos: la renuencia a investigar, la falta de pruebas, y un juez parcializado.

Los principales modelos de administración de justicia son el sistema anglosajón y el sistema romano; Jimeno (2012) refiere, que ambos sistemas se distinguen en quien asume la responsabilidad de instituir el proceso, el sistema europeo aún mantiene los rezagos del sistema inquisitivo, para el caso específico del Perú esto se modificó en el Código Procesal Penal (en adelante CPP), regulándose que la dirección de la investigación está a cargo del Ministerio Público, encontrándonos en un sistema acusatorio adversarial, con rezagos del modelo inquisitivo; por ejemplo, los jueces todavía pueden interrogar (aclaratoriamente), subrogando tácitamente la función del fiscal o la defensa; aunque en la práctica, las preguntas aclaratorias terminan beneficiando principalmente a la acusación.

Los modelos inquisitivo y acusatorio, a pesar de sus claras diferencias, pretenden determinar la responsabilidad penal del hecho criminal, Hedstrom (2018) menciona, que las diferencias están básicamente ligadas al sistema de fianzas sobre la imposición de medidas de coerción, así como la carencia de capacitación de sus actores legales (en este caso quienes dirimen la responsabilidad penal); siendo difícil determinar si los factores educativos, los procesos penales que están en trámite y la influencia política, estarían alterando las decisiones finales; es decir, lo relacionado a la imposición de las penas, así como las tasas de encarcelamiento

y de reincidencia; lo cual resaltantemente, resulta ser una problemática inherente de los sistemas de administración de justicia.

El sistema penal anglosajón cuenta con sujetos procesales distintos, Marzec (2018) plantea, que en el modelo anglosajón es el juez quien toma las decisiones relevantes sobre el saneamiento probatorio, dado que, quien definirá la controversia será el jurado, el cual, será el llamado a pronunciarse sobre la credibilidad de la evidencia encontrada; en el sistema peruano por su parte, tendrá como encargado del saneamiento probatorio al juez de garantías, y el juez unipersonal o en su defecto el colegiado (según la pena del delito investigado) serán quienes finalmente motiven la sentencia; por lo tanto, la decisión estará sustentada en argumentos técnicos; es decir, el uso de doctrina jurídica; mientras el sistema anglosajón preferirá el enfoque económico del derecho.

Otra de las grandes diferencias está ligada con el director de la investigación, Brown (2015) afirma, que en el sistema anglosajón, la policía es quien dirige la investigación, tal es así, que incluso puede presentar el caso en la Corte si decide que la gravedad del delito es menor; el fiscal solo aparecerá cuando debido justamente a la complejidad del caso (gravedad del delito) debiendo asumir con qué cargos formulará su acusación, la persecución del delito iniciaría con un nivel de convicción de sospecha inicial simple; ya que, se está tomando conocimiento de los hechos delictivos, podrá formalizar la investigación preparatoria, cuando el nivel de convicción es revelador; siendo la gravedad del delito determinante para que la investigación quede a cargo de una de las autoridades antes mencionadas.

El sistema penal europeo, ha implementado modificaciones relevantes, según Bergsmo (2017), para la democracia moderna europea, el proceso penal es la respuesta a la comisión de un delito, siendo un proceso estándar, sin embargo, la posición del autor es principalmente una crítica; ya que, se basa en la necesidad de atender específicamente algunos crímenes a través de un proceso abreviado, con el objeto de revestirlos de celeridad; por su parte, Bergsmo (2017) también refiere, que las metas fundamentales de este proceso penal deben garantizar la protección del estado de derecho, brindar justicia a las víctimas, eliminar los desequilibrios causados por los crímenes que incluso benefician a sus autores, y reparar la moral de la sociedad; lo cual representaría, los fines del proceso penal.

El principio de objetividad de la dirección de la investigación es una garantía del debido proceso y se perjudica cuando los investigadores priorizan a su favor la búsqueda de información del caso, según describe Ask (2006), los investigadores prefieren la evidencia incriminatoria, siendo esto un defecto de la administración de justicia, los persecutores del delito no solamente deben buscar acreditar que el imputado es responsable penalmente, sino que deben buscar, sobre todo, la verdad, y para ello, también deben integrar en esa búsqueda las pruebas que resulten beneficiosas al imputado, toda vez que no actuar de esa manera es alejarse más del suceso real y enfocarse básicamente en la teoría del caso planteada, dado que, esta teoría es solamente una apreciación de la realidad.

Existen factores que facilitan la investigación, pero a la vez, son contradictorios a las normas procesales, por ejemplo, Kangur (2015) da a conocer, que en el modelo norteamericano es relevante la investigación sobre los sospechosos habituales; El Proceso Penal Peruano enfoca la persecución de un acto delictivo por haberse cumplido el hecho típico regulado (principio de legalidad), por lo tanto, es prioritario tener en cuenta el acto realizado, más no al comportamiento habitual de la persona; en el sistema anglosajón, se prioriza detectar a los delincuentes reincidentes y a los sospechosos habituales; es decir, se enfocará en los criminales conocidos, por lo cual la persecución está más enfocada en el autor del delito que en la conducta o acto criminal.

El proceso penal emana de una fuente constitucional, al igual que todas las instituciones del ordenamiento jurídico; Chiesa (1992) refiere que, en el contexto de desarrollo del proceso penal este debe brindar un grado de protección, siendo "(...) un arma ofensiva y defensiva" (p. 25), refiriéndose exclusivamente al beneficio que obtendrá el imputado tanto desde el punto de vista que el Estado es incapaz de accionar a través de medidas que vulneren derechos fundamentales, así como el aporte probatorio que puede brindar la defensa del imputado.

El Proceso Penal Peruano es un concepto relevante para esta investigación debido a que los grados de sospecha se desarrollan en sus etapas, las cuales avanzan según el grado de convicción del investigador, el Proceso Penal se desarrollará a través de la participación de los sujetos procesales que intervinientes, puesto que, son elementales para su desarrollo; Chero y Quispe (2013) argumentan que el proceso penal es como una relación jurídica en la cual también existen

derechos y obligaciones, las cuales serán cumplidas por las partes intervinientes, siendo estas partes: “(...) principales (juez, fiscal e imputado) y secundarios (actor civil, tercero civil responsable y defensor)” (p. 41).

El proceso penal está compuesto por etapas bien definidas, el CPP precisa en su libro Tercero referido al Proceso Común, tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y finalmente el juzgamiento; en la primera etapa mencionada se encuentra incluida una subetapa, conocida como diligencias preliminares de investigación, según Meza (2019): la investigación preliminar inicia cuando el Ministerio Público sospecha de la perpetración de un delito, pudiendo tanto hacerlo por recibir una denuncia de un hecho delictivo o por iniciativa propia al tomar conocimiento de ello; menciona además que esta sospecha podría estar simplemente circunscrita al desbalance patrimonial en los casos del delito de L. A..

El mismo CPP en su Art. 334^o Inciso (en adelante Inc.) 2 hace referencia al plazo de las diligencias preliminares, precisando que estas proceden conforme al Art. 3, el cual a su vez regula la comunicación al juez de investigación preparatoria, disponiendo el plazo de sesenta días, con la salvedad de que se produzca la detención de una persona, sin embargo, líneas más adelante en el mismo Inc., la norma fija un *numerus apertus*, al señalar que según las circunstancias, características y complejidad, el director de la investigación podrá fijar un plazo distinto, brindando la posibilidad, de que el afectado por un plazo que no sea razonable recurra al juez de garantías en un plazo de cinco días resolviendo luego de realizarse una previa audiencia.

La primera etapa es llamada investigación preparatoria, la cual se formaliza ante la aparición de indicios reveladores, es la etapa más larga; el Ministerio Público realizará, en esta etapa, una serie de actos de investigación a fin de recabar pruebas, según Schwartz (2007) hay un gran compromiso por parte de la fiscalía de los Estados Unidos de América respecto a la investigación criminal, dado que, cada caso implica una serie de variables diferentes; la investigación preparatoria se convierte en una fase crucial y de mayor obtención probatoria; por ello, los casos complejos requieren mayor interés en la averiguación de la verdad, la coherencia de la investigación se fortalece cuando ha permanecido desde sus inicios en el despacho del mismo fiscal responsable.

Las diligencias preliminares son parte de la investigación preparatoria, pero, gozan de una gran diferencia respecto a estas; ya que, cuentan con un plazo propio, según Figueroa (2015), es necesario e imprescindible actuar en diligencias preliminares los actos exclusivamente urgentes e inaplazables; ya que, será en investigación preparatoria cuando se recaben los demás elementos de convicción para complementar una posible acusación.

El CPP establece que la dirección de la investigación está plenamente confiada al Ministerio Público; en cuanto al plazo de esta investigación, está definido en el mismo cuerpo normativo en el Art. 342º teniendo tres supuestos, el primero sería el plazo normal que es de ciento veinte días, los cuales pueden ser prorrogables por sesenta días, tratándose de días naturales; el segundo supuesto, estaría relacionado a las investigaciones que tengan gran complejidad, cuyo plazo sería de ocho meses.

Finalmente, el tercer plazo está previsto para una investigación realizada para los miembros de organizaciones criminales, disponiéndose de treinta y seis meses; dicho plazo puede ser prorrogable por igual plazo, si así lo concede el juez de garantías; se definirá complejo un caso, cuando la cantidad de actos sea significativa, comprenda varios delitos, sean varios imputados o agraviados, se requiera análisis complejo de pericias y documentos, se requieran investigaciones internacionales, se realice investigación en varios distritos judiciales, involucre personas jurídicas o instituciones públicas, y cuando sean delitos que hayan sido perpetrados por miembros de una organización criminal; en esta etapa se decidirá si corresponde formular acusación o sobreseimiento.

La etapa intermedia inicia cuando el fiscal decide si se formula acusación o sobreseimiento de ser el caso; el Art. 343º del CPP señala que, en caso se venzan los plazos de la Investigación Preparatoria y no se haya dado por concluida, las partes podrán solicitar que dicha etapa concluya, si finalmente, el juez ordena la conclusión, el fiscal deberá formular acusación si cuenta con “base suficiente” (mencionado en el Art. 344, término que será relevante para esta investigación), contando con diez días; su incumplimiento acarreará responsabilidad disciplinaria; si se dispone que concluya la Investigación Preparatoria, deberá decidir si formulará acusación en un plazo de 15 días, siendo este plazo de 30 días si el caso es considerado complejo.

El juzgamiento, es la principal etapa del proceso, se tienen en cuenta los principios de la inmediación, publicidad, oralidad, y contradicción, principios rectores que regirán la actuación de la prueba; además de la concentración en las actuaciones del juicio, así como la continuidad del juzgamiento, la identidad del juzgador, la presencia del imputado de manera obligatoria y de su defensor; asimismo, la audiencia de juicio oral respecto a la continuidad puede ser prolongada en sesiones sucesivas, las cuales se realizarán al día posterior o al día subsiguiente de que el juzgado se encuentre en funcionamiento, hasta llegar a su conclusión. Nuestro sistema es un sistema acusatorio con elementos adversariales; tal como se ha dispuesto, en la norma adjetiva.

Sobre la prueba en el Proceso Penal, Condori y Zapana (2018) precisan que la prueba es un elemento central en el proceso penal, debido a que acreditan hechos, que a su vez, están demostrando la teoría del caso; de manera que, beneficiarán a uno de los adversarios del proceso, ya sea el Ministerio Público o la defensa técnica; por su parte, Talavera (2009) menciona que los derechos que asisten a los sujetos procesales relacionados a las pruebas son: el ofrecimiento, la admisión, la actuación adecuada, la conservación, la valoración racional; y finalmente, la obligación de motivar el razonamiento probatorio.

Estos derechos que le asisten a las partes son también reconocidos en otros sistemas jurídicos, por ejemplo, el modelo consuetudinario anglosajón tal como lo señala Hsieh (2011), hace una clara distinción sobre lo que implica el concepto de admisibilidad y peso de los medios probatorios, para lo cual, sería el juez quien decide la admisibilidad propiamente, y el jurado quien determina el peso que habrá de dársele a la prueba; es así que, el valor de la evidencia pasa a un segundo plano, lo mismo sucede respecto a la confiabilidad de las pruebas, estos cambios empezaron a aplicarse en Estados Unidos a partir del año 1940 y en Inglaterra en 1980.

En cuanto a la prueba anticipada, Zorzoli (2009) explica que busca asegurar medios probatorios que en el futuro sean de imposible actuación u obtención, considerando incluso que la prueba anticipada goza de una naturaleza procesal cautelar, ya sea ante la posible pérdida o destrucción del medio probatorio; puede ser requerida la actuación de este tipo de pruebas cuanto devengan de una urgencia, como el caso de una persona enferma o que pueda realizar un viaje al

extranjero de larga duración, también se aplica en los casos en los cuales pueda deteriorarse o alterarse el medio probatorio con el pasar del tiempo, es ahí justamente donde se evidencia a mayor escala su naturaleza cautelar.

Ahora bien, la prueba preconstituida, según Salas (2018) es un medio de registro, plasmado en un acta, que permite asegurar la fuente material, por lo tanto, está pensada para acreditar el recojo de este tipo de prueba; cabe resaltar, que el autor diligentemente ha sido cuidadoso en llegar a su definición, toda vez que todavía prevalece una gran contradicción en la doctrina en ese aspecto; en la investigación de McEwen (2011), se hace una mención sobre las pruebas que como personaje estelar del proceso penal, será ofrecida, admitida y valorada, pudiendo obtenerse antes del arresto del imputado, encontrando incluso pruebas indiciarias; el hecho delictivo es uno e inmutable, cambiando únicamente la convicción en el juzgador por las pruebas que demuestran hechos con teorías del caso variadas.

Acerca de la prueba directa e indirecta, Bravo (2010) las define de la siguiente manera, la prueba directa se presenta cuando el juzgador se apersona para su apreciación directa mediante sus sentidos y precepciones en el lugar de los hechos; por ejemplo, a través de una inspección o reconocimiento; la prueba indirecta es llevada ante el conocimiento del juez, por ejemplo, estará compuesta por testimonios, documentos o exámenes periciales. Desde otro punto de vista, la prueba es directa cuando tiene relación directa y substancial al hecho investigado, diferenciándose así de la prueba indiciaria, visto desde el punto de vista del criterio del conocimiento de la prueba; es decir, si la prueba cumple con demostrar un hecho por ser parte de este o por estar vinculada a él.

Para Shanmugam (2011) la evidencia digital, de gran relevancia en la actualidad, puede clasificarse en: evidencia directa referida a archivos hallados en un equipo digital que por solamente estar ahí son ilícitos, por ejemplo podemos citar a la contabilidad paralela; por otro lado, la evidencia circunstancial, la cual será llamada también indirecta, no siendo ilícita en sí misma, pero que, brinda una dirección a seguir en la investigación, por ejemplo, un conjunto de nombres en código que está vinculado a una serie de transferencias de dinero; y, la evidencia de intención, que da lugar a vincular hechos jurídico – económicos; un ejemplo específico sería: un político vende sus propiedades para luego volver a adquirirlas devaluadas a través de una persona jurídica bajo su administración.

La prueba indiciaria, ha sido siempre objeto de controversia por su vinculación indirecta con la investigación o con la escena delictiva, pero, su ofrecimiento brinda una aproximación a esta; Pisfil (2014) manifiesta que, esta prueba puede ser definida como la relación existente entre los indicios, los cuales están vinculados a hechos conocidos, con el hecho desconocido que está en investigación, además, el autor hace una clasificación de indicios muy destacable al señalar que los indicios pueden ser: de presencia u oportunidad física (condición del sospechoso para realizar el delito física o intelectual), participación delictiva (elementos materiales de vínculo con hecho delictivo), capacidad para delinquir (hecho conductual indubitable), móvil delictivo, actitud sospechosa, mala justificación.

Un ejemplo sobre estas clases de indicios en el delito de L. A. es: la UIF denuncia ante el Ministerio Público con un reporte de inteligencia financiera sobre incremento patrimonial y transferencias de cientos de miles de soles de un pequeño Mini Market, tal reporte hasta el momento es solo un indicio; que será corroborado posteriormente, es así que, se le pregunta al gerente: sobre sus vínculos con el narcotráfico, si recibe transferencias importantes de dinero, y si tiene conocimientos financieros; si lo niega y se comprueba que su declaración es falsa, en los tres supuestos mediante otras pruebas, el investigador habrá obtenido prueba directa partiendo de prueba indiciaria, ahí justamente se evidencia su relevancia.

La eficacia de la investigación será acorde a las decisiones que sean tomadas, para Ask (2006) las decisiones de investigación se pueden desarrollar de dos maneras, la que conocemos como investigación de escritorio, que permite consultar bibliografía y casos previos sobre delitos similares, y la otra sería la investigación de campo, la cual exigirá tomar acciones como solicitar medidas de coerción tales como el allanamiento, practicar interrogatorios, siendo esta forma de investigación más productiva probatoriamente; sin embargo, la investigación de escritorio no debe ser desestimada; ya que, la información obtenida es un recurso para continuar la investigación, sin esa base teórica es imposible o muy difícil decidir cuál es el siguiente paso para continuar recabando pruebas.

La prueba indiciaria hace necesario el uso de un análisis inteligente del caso, sin este factor, la investigación carecería de sentido lógico e incluso estaría completamente desorientada en su objetivo de formular convicción, para los juristas Nandayapa y Ramírez (2009) la inteligencia en la obtención de la prueba indiciaria

tiene que ver con los elementos de la litigación misma, por un lado, la coherencia interna (credibilidad), y la verosimilitud, unidos ambos conceptos por la lógica razonable; la obtención de la prueba, está compuesto por una serie de decisiones que permitan conocer a profundidad el caso, siguiendo un procedimiento, que finalmente sea, para obtener ventaja y superar a su enemigo, en este caso en relación a los adversarios en el juicio.

La prueba prohibida ha sido objeto de investigación y de largos debates doctrinarios, nunca ha habido un consenso sobre su verdadera función y determinación, más aún cuando su existencia se opone al propio sistema jurídico por trasgredir derechos protegidos por la Constitución, Pérez (2000) señala que muchos autores, respecto a la definición de prueba prohibida, tienen diferentes puntos de vista, algunos la consideran a las pruebas obtenidas ilegalmente, otros a las que se obtienen ilegítimamente, y un tercer grupo piensa que se refieren de manera exclusiva a las prohibiciones probatorias; hay juristas que ante las pruebas que taxativamente son reguladas como no admisibles, les llaman pruebas ilícitas.

Sobre la valoración probatoria, Talavera (2009) precisa que “(...) es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos. Tiende a establecer cuál es su real utilidad para los fines de la formación de la convicción en el juez” (p. 105); la ley exige al juez motivar la resolución de la instancia decisoria a fin de que pueda ser impugnada; el Perú usa el sistema de valoración de sana crítica, en tal sentido, no se cuenta con una predeterminada valoración o peso para las pruebas, siendo la sana crítica, la que finalmente, oriente la decisión del juez, siguiendo las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos y los principios de la lógica.

La reincidencia delictiva, por citar un caso de valoración probatoria, se considerará sospechoso de manera liminar al ex convicto encontrado cerca de una escena de un crimen similar, la lógica lo vincularía proposicionalmente, las máximas de la experiencia actuarían en su contra puesto que las tasas de reincidencia son altas; El jurista Kangur (2015) sugiere que la existencia de varios actos delictivos previos son eficientes para demostrar una conducta criminal futura; el autor reconoce que no existen evidencias suficientes que acrediten que el comportamiento pasado esté ligado a un actuar futuro; necesariamente se

someterán a juicio los hechos previos y posteriores, obteniéndose una probabilidad de reincidencia, que puede ser alta o baja según la prueba aportada.

Adicionalmente el autor Talavera (2009) menciona que la lógica dentro de la evaluación de la Sana Crítica requiere del análisis de principios tales como el principio de identidad (concepto sujeto es idéntico a concepto predicado), el principio de contradicción (no es posible aceptar y negar al mismo tiempo un concepto), el principio de tercero excluido (se excluye del razonamiento el concepto negado), el principio de razón suficiente (una proposición debe tener suficientes fundamentos para considerarse verdadera), y el principio de verificabilidad (los medios probatorios y material fáctico se encuentran fundados, en su defecto de ser así, la motivación y valoración son correctas).

La obligación del juez de motivar las resoluciones judiciales implica no solo tomar en consideración las normas de valoración probatoria; sino también, la jurisprudencia; el estudio de Curi (2018) establece que existen dos factores que deben quedar plasmadas en la motivación en base a la prueba indiciaria, la primera es lo relacionado a los indicios probados, para lo cual el juez deberá pronunciarse respecto a la prueba indiciaria que ha quedado demostrada y corroborada, y el segundo factor es lo que vincula al imputado con el tipo penal, y obviamente, el razonamiento que utilizó para que a partir del indicio conocido se llegue a la responsabilidad penal del imputado.

Las medidas de coerción procesal son reguladas en el Libro II Sección III del CPP, deben ser proporcionales y sustentadas con suficientes elementos de convicción, ese parámetro de suficiencia es justamente lo que ha llevado a que las jurisprudencias estén sometidas a una controversia debido a que el grado de sospecha suficiente varía según el estadio procesal, y dicha suficiencia refleja el grado en el que se encuentra la investigación, por lo tanto, decir sospecha suficiente en etapa intermedia, no es lo mismo que hablar de suficiencia probatoria en investigación preparatoria; ya que, la sospecha suficiente varía según la etapa procesal, ello ha provocado que muchos juristas consideren a la sospecha grave por encima del nivel de convicción de la sospecha suficiente.

Las medidas de coerción procesal son interpuestas por el juez de garantías, salvo el embargo y la ministración provisional de posesión, la que incluso puede ser solicitada por el actor civil; es así que, se han regulado: la detención, que puede ser

policial, ciudadana y la detención preliminar, la detención judicial por flagrancia, la prisión preventiva, la comparecencia, la internación preventiva, el impedimento de salida, la suspensión de derechos, el embargo, las medidas reales y la incautación; en el caso de la prisión preventiva, regulada en el Libro II, Sección III, Título III del ordenamiento procesal penal, considerada la medida más gravosa, se han fijado estándares nominales tales como la sospecha grave para el caso de L. A. y sospecha fuerte en términos del proceso común.

Según la explicación de Zúñiga (2019), la prisión preventiva “(...) es una medida cautelar personal que se impone para garantizar el desarrollo del proceso y, en su caso, el cumplimiento de la sanción penal.” (p. 20); el acatamiento de los plazos, etapas y actuaciones del proceso penal, implica que los imputados tengan un comportamiento adecuado a estos fines; es labor del Ministerio Público, identificar que tal conducta se cumpla, o prevenir que el comportamiento inadecuado del imputado pretenda eludir a la justicia, el Art. 268 del CPP exige que se cumplan presupuestos concurrentes determinados por ley para que el juez dicte el mandato de prisión preventiva; estos requisitos son: los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena, y el peligro procesal.

Los elementos de convicción graves y fundados se encuentran regulados en el Literal (en adelante Lit.) a) del Art. 268 del CPP, se deben analizar, en la medida que, permitan estimar razonadamente que se ha cometido un delito, y que existe un vínculo entre el imputado en calidad de autor o partícipe; respecto a la prognosis de pena, se encuentra regulada en el Lit. b) del Art. 268 del CPP, siendo relevante que la pena que ha de imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad.

Respecto al peligro procesal, se subdivide en dos aspectos, el peligro de fuga regulado en el Art. 269 del CPP, y el peligro de obstaculización regulado en el Art. 270 del CPP; el peligro de fuga está enfocado en analizar el arraigo; es decir, el domicilio del imputado ya sea su residencia habitual, familiar o su trabajo o negocios, y las facilidades con las que cuenta para abandonar el país, o para permanecer oculto; también analiza la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; asimismo, analiza la magnitud del daño y su ausencia de reparación voluntaria por parte del imputado; es relevante el comportamiento que ha tenido el

imputado durante el procedimiento o en otro anterior si lo hubiere, en cuanto a su sometimiento a la persecución penal.

Finalmente, respecto al peligro de fuga, es relevante si el imputado pertenece a una organización criminal, o se ha reintegrado a una organización de esta naturaleza; por otro lado, el peligro de obstaculización, involucra un análisis de riesgo razonable; es decir, analizar si el imputado pretenderá destruir, modificar, ocultar, suprimir, o falsificar los elementos de prueba; conviene mencionar que para lograr hacerlo, la condición del imputado debería permitirle de encontrarse en libertad; otro criterio de riesgo razonable, es que influya en los órganos de prueba; es decir, coimputados, testigos o peritos, para que informen falsamente, de manera desleal o reticentemente; también se analizará si el imputado induce a otros a realizar los comportamientos antes mencionados.

El fundamento Vigésimo séptimo de la Cas. N° 626 – 2013 – Moquegua introducen un nuevo criterio en la valoración probatoria, que será necesario para situaciones previas al juzgamiento, exigiéndose no una certeza sino un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, el fundamento Vigésimo noveno plantea una valoración probatoria de los hechos y su acreditación; el fundamento Cuadragésimo detalla que la inexistencia de arraigo no deviene en imposición de prisión preventiva, sino que exige que la valoración sea en conjunto con los demás elementos exigidos.

Existen normas que tácitamente invocan la sospecha en el Proceso Penal, el CPP, desarrollado a partir de las nuevas teorías acusatorio – adversarial, tácitamente ha invocado a la sospecha, pero, como un grado de convicción probatoria, así se puede identificar por ejemplo, el Art. 329° del mencionado código refiere que los actos de investigación inician cuando se toma conocimiento de la sospecha de perpetración de un hecho que reúne los caracteres de delito; tal mención enuncia el contenido la sospecha inicial simple; por su parte, el Art. 336° Inc. 1 regula que “(...) aparecen indicios reveladores” la cual invoca a la sospecha reveladora.

El CPP hace mención de forma ambigua de la palabra suficiente, reiterándola en varias etapas del proceso penal, debido a esta situación, la sospecha suficiente resulta ser confundida con la suficiencia probatoria, que a su vez resulta ser uno de los términos más mencionados en la norma procesal, en el Título Preliminar, el Art.

El hecho de que se menciona la presunción de inocencia, establece que “(...) se requiere de una suficiente actividad probatoria”, el Art. VI sobre la legalidad de las medidas limitativas de derechos menciona que debe sustentarse la orden judicial en “(...) suficientes elementos de convicción”.

La suficiencia conviccional o probatoria también es mencionada en el Art. 203 del CPP referido a la búsqueda de pruebas y restricción de derechos precisa “suficientes elementos de convicción”; por su parte, el Art. 253, del mismo cuerpo normativo, en relación a las medidas de coerción procesal menciona nuevamente “(...) suficientes elementos de convicción”, sobre las medidas preventivas aplicables para las personas jurídicas el Art. 313 Inc. 2 Lit. a) menciona “Suficientes elementos probatorios”, el Art. 336 Inc. 4 establece “(...) suficientemente la realidad del delito” para formular directamente acusación.

Respecto a la sospecha grave, esta es mencionada en el Art. 268 del CPP, en su Lit. a) refiere sobre la existencia de fundados y graves elementos de convicción; no obstante, este concepto termina siendo tergiversado en la jurisprudencia cuando se le atribuye estar por encima de la sospecha suficiente, que como bien se recuerda, es aquel grado de sospecha que le brinda al juez de garantías la posibilidad de emitir un auto de enjuiciamiento.

El A. P. N° 01-2019/CIJ-116 sustenta que la sospecha fuerte está por encima de la sospecha suficiente, y está compuesta por la sospecha grave y fundada, lo cual hace suponer que la prisión preventiva no podría ser solicitada hasta culminada la etapa intermedia, o que, la sustentación de la sospecha fuerte implicaría que la fiscalía tiene un nivel de convicción mayor que el suficiente; por lo que, habiendo reunido suficientes elementos de convicción debería dictarse junto con la medida solicitada el auto de enjuiciamiento, cabe resaltar, que esta propuesta resulta ser un criterio de valoración erróneo, haciendo necesaria una aclaración particular, salvo que se haya pretendido hacer de la prisión preventiva una condena preventiva, tornándola en innecesaria para la investigación.

El Fundamento Vigésimo cuarto del A. P. N° 1–2019/CIJ-116 recaba de la doctrina precisiones tales como el uso de la probabilidad, que determinará mediante la lógica la posibilidad de una condena futura; se afirma que, la sospecha fuerte es más intensa que la sospecha suficiente, refiriendo más adelante que a pesar de ello se da en una etapa en la que concurren reveladores elementos de convicción.

Tal uso de la probabilidad, sin embargo, desde un punto de vista práctico no resulta eficiente; ya que, al invocar la sospecha suficiente no hace diferencia de la que se invoca para dictar el Auto de Enjuiciamiento, convirtiéndose en un fundamento incoherente; ya que en la práctica, al invocarse en una etapa inferior como lo es la investigación preparatoria, se estaría desconociendo lo resuelto por este A. P.; el Fundamento Vigésimo sexto concluye que, las altas probabilidades no son cuantificables.

La probabilidad cualificada o especial es un criterio de valoración probatoria que se introduce en esta investigación para evaluar la gravedad de los elementos de convicción, siendo idóneo para aclarar lo establecido en las normas adjetivas penales y la jurisprudencia, tanto para el L. A. como para las medidas de coerción procesal; la probabilidad cualificada es una probabilidad suficiente para el requerimiento de prisión preventiva, superando a la sospecha reveladora, pero, en un nivel inferior a la sospecha suficiente.

La jurista Martínez de Morentín (2007), analiza las presunciones, precisando que éstas carecen de prueba directa y son de dos tipos, legales y judiciales, dichas presunciones exigen un juicio cualificado de probabilidad; adecuando esos términos a esta investigación, la probabilidad cualificada busca una presunción de culpabilidad basada en graves elementos de convicción, superior al que se tiene para formalizar investigación preparatoria, pero, inferior al que se tiene en la etapa intermedia; por lo tanto, al carecerse de certeza, no debe buscarse la convicción en base a cualquier indicio, sino a aquellos que siendo características propias del delito por su gravedad generen una convicción positiva de veracidad, pero, sin alcanzar la certeza.

Por lo tanto, este análisis permitirá un gran acercamiento a la certeza, lo cual a su vez no generará reproche al suprimir derechos fundamentales, tomando en cuenta que aún falta analizar los demás requisitos del requerimiento de prisión preventiva; ahora bien, la suficiencia es distinta a la sospecha suficiente de la etapa intermedia; ya que, está vinculada a los elementos de convicción fundados y graves, con la especial mención del origen ilícito de los activos indiciariamente, siendo fundada al ser sometida a la valoración probatoria del juez de garantías, y cumpliendo adicionalmente, con una alta probabilidad de peligro procesal por parte del imputado como está regulado en el Art. 268 del CPP.

Esta probabilidad cualificada o especial, originalmente vinculada al proceso civil, exigía un nexo causal entre el hecho y la consecuencia jurídica; de la misma manera están configuradas las normas penales, por lo tanto, esta probabilidad cualificada estará condicionada a características únicas de cada delito; por ello, en el caso del delito de L. A., se desarrollarán criterios de suficiencia probatoria para acreditar la sospecha grave, en tal sentido, estos fundamentos permitirán a los sujetos procesales conocer a fondo el contenido necesario para que el requerimiento de prisión preventiva para el delito de delitos sea fundado en relación a los elementos de convicción; siendo por lo tanto, una probabilidad cualificada de la realización del hecho criminal.

El delito de L. A. es un delito especial, su existencia como tal data de los últimos doce años del siglo XX; aunque ha sido cometido prácticamente en toda la extensión de la historia de la humanidad, la ley solo se permitía perseguir a los delitos previos, el delincuente se hacía poderoso económicamente, obteniendo financiamiento que por ser ilícito estaba fuera del sistema económico, de los impuestos y de los agentes reguladores de la economía.

Lo más execrable de esta situación ocurría cuando estos criminales ascendían buscando espacios políticos – económicos, lo cual les daba poder, brindándole impunidad a las organizaciones criminales; la represión actual contra este delito se ha visto insuficiente; ya que, la corrupción ha descubierto formas de evadir la sanción penal y de apoderarse incluso de la administración de justicia, hechos que impiden el desarrollo económico y social del Estado.

La curiosa palabra “lavado” según recuerdan Carvalho, Crosara & Jardim (2015) proviene de la década de los 20’, cuando las organizaciones criminales invertían el dinero en compañías de lavado de automóviles, haciendo pasar por lícito el dinero, generando que sea complicado demostrar o probar su origen delictivo; la fórmula básica de este delito tal como postulan Garry, Zapata & Moreno (2016), se compone de tres fases, la primera busca introducir el dinero ilícito en el sistema financiero, la segunda por su parte, busca transferir el dinero, de manera que, sea alejado de los hechos delictivos, para finalmente, volver a los delincuentes originales, y por último la tercera fase, que consiste en trabajar el dinero en operaciones comerciales lícitas.

La lucha internacional contra el L. A. ha representado una serie de esfuerzos enfocados en lidiar con esta actividad criminal, Ungar (2016) señala, que hay una carencia en Latinoamérica de financiamiento adecuado para la investigación delictiva, lo que impide también que existan fiscales especializados y la debida cooperación de las autoridades e incluso la participación ciudadana, es por tanto normal que las investigaciones terminen archivándose cuando hay escasos de testigos y pruebas, es notorio también la existencia de corrupción en el Ministerio Público.

El jurista Arratia (2016) narra las deficiencias de la lucha contra la criminalidad organizada, en especial vinculada al narcotráfico en Guatemala; ya que, las mafias organizadas, gozan de impunidad; y en esos Estados, se carece de los programas necesarios para combatir el L. A.; es necesario por ello que estos Estados se involucren en la lucha contra este delito; ya que, si no existe una colaboración entre las instancias estatales, lo que finalmente ganará, es el poder de la organización criminal enclaustrada en el Estado.

Esta deficiencia ha generado la necesidad de requerir cooperación internacional, Aspinwall & Reich (2013) comentan, que la ayuda prestada por Estados Unidos a través de la administración del presidente Barack Obama, permitió compartir los resultados de la lucha contra el tráfico de estupefacientes y contra el L. A., para este último delito, se empezó a aplicar mayor control en el sistema financiero, evitando que el dinero mal habido sea lavado en territorio mexicano.

En Latinoamérica, es específicamente resaltante, que cuando un país inicia políticas serias de lucha contra estas organizaciones criminales, se produce una fuga de capitales golondrinos en busca de otros estados especialmente paraísos fiscales para continuar el ocultamiento de los capitales ilícitos; Tourinho (2018) sostiene, que todavía hay una preocupación que surge por la regulación internacional del delito de L. A.; tal es así, que aplicar mecanismos de persecución en un país puede ocasionar que los capitales ilícitos fuguen a países que no cumplen con estas normas; por lo que, enfrentar a este delito solo tiene una forma, y es enfrentarlo de manera conjunta.

Esta lucha internacional se materializa como precisan De Souza & Ferreira (2019) al trazar un plan de acción contra la criminalidad organizada, dado que,

resulta ser vital para el mantenimiento de la democracia la lucha contra el L. A., y es necesario el cruce de información entre los Estados; por su parte, Nieto (2012) enfatiza la importancia que en los Estados Unidos tiene el delito de L. A., sobre todo por los daños que ha sufrido este país cuando el dinero ilícito se transformó en atentados terroristas y también en criminalidad organizada, y que implica combatir este delito con todas las fuerzas de la ley, tal es así, que actualmente se usa represión militar para enfrentarlo.

El delito de L. A. ha tenido una evolución normativa muy particular, León (2017), ha señalado dos etapas de esta evolución en el Perú, siendo estas: “Etapa Introductoria” (p. 14) y “Etapa de Regulación Especial” (p. 15), la primera comprendida desde la Convención de Viena de 1988, en la que se inicia su regulación internacional y el Perú se ve influenciado regulándolo como un delito ligado al narcotráfico e incluso la receptación; la segunda etapa, que inicia a partir del año 2002, en la cual el delito de L. A. es separado del delito de narcotráfico, con la introducción de la Ley N° 27765, la que se modificó por el D. Leg. N° 986 del año 2007, empezando a considerarse un delito autónomo excluyendo a la actividad ilícita conocida como receptación.

La definición del delito de L. A. ha variado, esto se debe principalmente a su regulación, mientras, como se decía en el párrafo anterior, el delito de L. A. surge como un delito vinculado al narcotráfico; por lo que, su definición estaba ligada a esos crímenes, la existencia de los capitales ilícitos derivados de una variedad de delitos hizo necesario que el concepto crezca y se fortalezca hasta convertirse en lo que es hoy en día; es decir, una serie de hechos que se concatenan y se constituyen en un proceso que pretende mediante la apariencia de legalidad reintroducir activos ilícitos al sistema económico, sin tener en cuenta la actividad delictiva que lo generó, contando con una serie de fases internas que se suceden la una a la otra.

El D. Leg. N° 1106 publicado en 2012, con el nombre de “Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”; es una norma novedosa y eficiente, ha tipificado tres subtipos o etapas de L. A., determinando agravantes y atenuantes; así como, la responsabilidad penal contra los obligados a prestar comunicación sobre actividades sospechosas, e incluso por su retardo y falsedad; esto recuerda, por

poner un ejemplo, el caso emblemático “lava jato”, los reportes periodísticos como el publicado en el periódico La República de fecha 20 de enero de 2019 titulaban “Telefónica negó registros de llamadas en el caso Keiko”, lo cual como se sabe, de contener información relevante, acarreará responsabilidad penal.

Respecto al bien jurídico materia de protección en el delito de L. A., Pariona (2017) señala, que es diferente a la protección del delito previo, bajo la observancia del principio de ne bis in idem; reconoce dos teorías: la uniofensividad y la pluriofensividad, que relacionan los criterios de protección del bien jurídico del delito previo, el bien jurídico administración de justicia, dado que, ocultar el dinero es una forma de ocultar los efectos del delito para evitar la acción de la justicia, siendo similar al delito de encubrimiento real; y finalmente, el bien jurídico orden económico, toda vez que se afecta el sistema financiero del Estado, pero, se hace la precisión de la existencia de aspectos tales como: la transparencia del sistema financiero, la seguridad del tráfico comercial y la libre competencia.

La tipificación del delito de L. A. está regulada en el D. Leg. N° 1106 y la modificación que tuvo a través del D. Leg. N° 1249 que data del año 2016, lo novedoso justamente al referir a esta norma, es que si bien, sus tres primeros artículos se basan en etapas o fases que han sido muy estudiadas en la doctrina desde el surgimiento de este delito, también tipifican conductas omisivas, lo cual complementa el tipo penal y le brinda efectividad a la persecución del delito; es así que, el delito de L. A. está tipificado en el Perú de la siguiente manera:

Los actos de transferencia y conversión, en esta fase del delito, está precisado que estos actos están directamente vinculados a los bienes, dinero, efectos o ganancias cuya procedencia sea ilícita; aplicándose un criterio doloso, ya sea dolo como tal (conoce) o eventual (debía presumir), para así, evitar que estos capitales ilícitos sean identificados en cuanto a su origen, decomiso o su incautación, la pena prevista en el Art. 1° del D. Leg. N° 1106 es de ocho a quince años, además de los días multa, siendo estos de ciento veinte a trescientos cincuenta.

Los actos de tenencia y ocultamiento, esta fase fue modificada por el D. Leg. N° 1249, agregando un nuevo verbo “posee”, y suprimiendo la finalidad, lo cual, resultaba problemático en el momento de sustentar en la acusación y los requerimientos de medidas de coerción procesal; de manera que, la fase del delito queda tipificada mencionando los verbos: utiliza, adquiere, guarda, posee, custodia,

administra, oculta, recibe, o mantiene en su poder, esto en relación a los efectos, los bienes y las ganancias de los cuales, su origen ilícito se conozca o se pueda presumir, la pena para este delito será entre los ocho a los quince años, y como días multa de ciento veinte a trescientos cincuenta.

Los actos de transporte o traslado de dinero ilícito, en este caso, este Artículo también ha sido modificado por el D. Leg. Nº 1249, en el cual se realizan precisiones normativas; de manera que, los medios de transporte y traslado serán tanto los que pretendan llevar instrumentos financieros emitidos al portador o dinero en efectivo, ya sea consigo mismo o por cualquier otro medio dentro del territorio nacional, a fin de evitar que se identifique su origen, decomiso o incautación; luego, la norma se traslada al ámbito internacional al referir que el sujeto activo pretenda ingresar o sacar del país dineros cuyo origen ilícito conoce o debió presumir, siendo la pena prevista entre los ocho a los quince años, y como días multa entre los ciento veinte a trescientos cincuenta.

Omitir la comunicación de operaciones sospechosas, este tipo penal se da bajo la necesidad del Estado de evitar que se oculten las actividades sospechosas, dirigida especialmente a los sujetos obligados a brindar dicha información como los profesionales y funcionarios que puedan detectar actividades ilícitas.

Si no se regulaba una penalización ante la omisión de comunicación de operaciones sospechosas, esto provocaría que difícilmente se cumplan las demás disposiciones típicas del delito de delitos; el que omitiera efectuar la comunicación de las actividades sospechosas de las que hubiera tomado conocimiento a la autoridad competente, tendrá responsabilidad penal, la pena prevista es entre los cuatro y los ocho años, y como días multa entre ciento veinte a doscientos cincuenta días, además de inhabilitación de entre cuatro a seis años; para este caso, se ha previsto una modalidad culposa, sancionada con pena de multa y con inhabilitación de uno a tres años.

El rehusamiento, retardo o falsedad de información; este tipo penal de lavado, es más bien, un requerimiento de investigación del delito; de manera que, su verbo rector está relacionado con el suministro de información; es decir, rehúsa, retarda, o brinda información falsa, perjudicando el desarrollo del proceso penal de L. A.; la pena privativa de libertad será entre los dos y los cuatro años, con días multa entre cincuenta a ochenta, e inhabilitación que no superará los tres años; previendo una

forma agravada por los delitos de crimen organizado, minería ilegal, o que las ganancias sean superiores o equivalentes a 500 Unidades Impositivas Tributarias, para estos casos la pena será de entre tres a cinco años, con días multa entre ochenta a ciento cincuenta e inhabilitación que no supere los cuatro años.

Sobre la consumación del delito de L. A., el jurista Prado (2013) ha precisado, que se trata de delitos de peligro abstracto y consumación instantánea, esta novedad normativa requiere el perfeccionamiento del ilícito por la realización del tipo penal; en cuanto a la tentativa, el autor precisa que se configura, pero no en todos los casos, es idónea para los actos de conversión y de transferencia aun sin perfeccionarse el delito, y conforme a lo dispuesto en el Art. 16º del Código Penal, siendo por tanto la ejecución delictiva relacionada con el origen ilícito una tendencia interna trascendente; los terceros involucrados no serán por tanto encubridores sino partícipes ya sea como coautores o cómplices.

En cuanto al tipo subjetivo, el delito de L. A. solo es de comisión dolosa, así lo afirma Céspedes (2018) al mencionar, que el autor de este delito obraría con el conocimiento y voluntad contraviniendo a la ley, dado que, se admite la comisión dolosa tanto de primer grado como de segundo grado, esta última como dolo de consecuencia necesaria, y el término expresado en la norma como “debía presumir” se traduce en la posibilidad de que el sujeto activo presuma el origen ilícito del activo; esta presunción deberá ser superada por el sujeto activo que pretenda su inocencia, demostrando haber agotado todas las diligencias necesarias para enterarse objetivamente de la procedencia del capital.

La Autonomía del delito de L. A. es tal vez el criterio más debatido en los últimos años respecto a esta materia, incluso se han planteado teorías aplicables para estudiar su autonomía, Céspedes (2018) plantea, que existe una teoría de autonomía absoluta, teoría en la que no se requiere probar la actividad criminal previa; no obstante, precisa que solamente en los casos relacionados con narcotráfico, minería ilegal, secuestro, terrorismo, trata de personas y extorsión, si se requeriría dicha prueba por tratarse de un criterio agravante.

La otra teoría planteada es la vinculación absoluta con el delito previo que consiste en la necesidad de la prueba que acredite la actividad criminal previa, además de citar al Oficio Circular N° 024-2013-MP-FN-SGPN desconociéndole eficacia vinculante, por demás está decir que esto nos devuelve al origen y

concepción inicial del L. A., un delito cuya investigación requería la existencia de otro delito, mientras por otro lado, las organizaciones criminales crecían y se fortalecían obteniendo poder en el Estado, e infectando de corrupción todas las instancias.

La teoría de la autonomía material relativa es una teoría ecléctica intermedia entre la autonomía y la vinculación absoluta, no requiere la probanza del delito previo, pero sí su valoración a través de elementos indiciarios, lo cual no vulnera la presunción de inocencia; ya que, el delito de L. A. ha sido regulado de forma autónoma, protegiendo bienes jurídicos que gozan de fuentes de prueba propios.

Respecto a esta autonomía material relativa, el jurista Peña (2017) manifiesta, la variada opinión que este tema genera en la doctrina, la cual se inclina por ambos argumentos; se advierte entonces que, el Art. 10 del D. Leg. N° 1106 con sus modificaciones acota que no se requiere respecto al delito previo los actos de investigación, objeto de prueba o condena, o proceso judicial, para realizar la investigación, procesamiento y sanción; tanto esta teoría, como la que postula la autonomía absoluta serán usadas en la investigación.

El delito precedente y el origen ilícito citado en la norma que regula el delito de L. A. no comparten necesariamente el mismo concepto, Rivas (2018) identifica, los conflictos doctrinarios que han existido sobre estos conceptos; no obstante, la S. P. C. N° 1-2017/CIJ-433 establece que el origen ilícito de los activos puede ser sustentado en base a prueba indiciaria, a efectos de que existan una probabilidad de la existencia de un delito, más no la certeza, esto se corresponde al Art. 10° del D. Leg. que regula este delito.

En cuanto a los indicios en el delito de L. A., es particularmente difícil determinar su valor probatorio; el incremento patrimonial como se dijo al inicio, es un indicio positivo de desarrollo económico, pero, los capitales ilícitos terminan fortaleciendo a la criminalidad organizada y perjudicando al sistema económico, una brillante investigación sobre este tema fue desarrollada por el jurista Tasayco (2018), que realiza un análisis de cuatro jurisprudencias: A. P. N° 3- 2010, R. N. N° 4003 – 2011, R. N. N° 3036-2016, I Pleno Casatorio de 2017; identificando las pruebas indiciarias características de este delito, las cuales son: el incremento patrimonial, las operaciones financieras sospechosas, carencia de actividad económica lícita y ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado.

Los indicios de este delito son estudiados por Lamas (2017), quien menciona, que son: el incremento de patrimonio injustificado, las garantías de mutuos, la adquisición de bienes, las transferencias electrónicas, las cartas crediticias, los seguros simulados, los fideicomisos, las transferencias entre matriz y filial, las exportaciones e importaciones ficticias, la venta de bienes inmuebles fraudulentas, la venta de obras de arte, la compra de empresas con riesgo crediticio, el contrabando en efectivo, los casinos, juegos de azar, la adquisición de loterías, las fundaciones fingidas, el mercado negro de divisas, los paraísos fiscales, las sociedades comerciales meramente instrumentales, la ausencia de actividad económica, el uso de jurisdicciones que brinden servicios de confidencialidad.

Para recabar los indicios hace falta un sistema coordinado, por ejemplo, Shapovalov (2015) rescata, la importancia de vigilar y controlar el funcionamiento de los mercados financieros, especialmente respecto al rol que estos cumplen en la detección del L. A.; por ello, se requiere garantizar que funcionen adecuadamente, lo cual implica mucha diligencia en la investigación; ya que, por contar con un *numerus apertus* respecto al delito previo permite considerar a todas las actividades delictivas que generen ganancias ilegales, haciendo más complejo el análisis de la prueba indiciaria.

Por citar un ejemplo de otras actividades criminales que generan ganancias, Soriano (2019) precisa que, la explotación ilegal de recursos, siendo un delito de diferentes características pero que genera ganancias, también crea la necesidad de cometer el delito de L. A.. Dichas actividades ilícitas pueden tener varias índoles e incluso tener varias formas de obtención de capitales.

Según el jurista Prado (2013), la criminalidad organizada ha cambiado, diferenciándose claramente de los modelos estándar antiguos tales como las mafias sicilianas o el modelo norteamericano la Cosa Nostra; es así que, se desarrolló el “Centro para la Prevención Internacional del delito y el Centro de Investigación Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones Unidas”.

Esta institución permitió el conocimiento, estudio y análisis de cinco tipologías de configuración de las organizaciones criminales: la jerarquía estándar (piramidal, rígida y tradicional), la jerarquía regional (piramidal regional, con reglamento), la agrupación jerárquica (corporativa, acuerdos deliberados, autonomía operativa), el grupo central (pocos miembros, junta general, especialistas en L. A.) y la red

criminal (gran complejidad, inconstantes actividades, individuos clave, estructura interna y externa).

Muchas de estas organizaciones son incluso parte de la Administración Pública del Estado, De Fragoso (2018) da a conocer, como la corrupción es inherente de los políticos que gobiernan los países de tercer mundo siendo una peculiaridad que los caracteriza, generando la necesidad posterior de lavar el dinero; Soares (2001) señala, que la impunidad es una condición que buscan los delincuentes que lavan activos; es por lo tanto vital, desterrar cualquier tipo de corrupción del sistema jurisdiccional que impida la libre investigación del delito; ya que, la complejidad y la alta especialización de quien comete estos crímenes no hace posible o hace muy difícil el procesamiento de los responsables, además de que el poder adquisitivo de estas organizaciones es capaz de comprar voluntades.

El A. P. N° 03-2010/CIJ-116 en su Fundamento Trigésimo segundo introduce una contradicción que ha sido discutida constantemente por los operadores jurídicos, refiere que el delito fuente es elemento objetivo del tipo legal que será debidamente probado (vinculación), pero concluye que no es necesario su investigación, proceso o sentencia, este criterio ha sido aclarado bajo nuevos criterios jurisprudenciales; por su parte, el Fundamento Trigésimo tercero hace expresa mención de unos presupuestos generales, materiales y formales respecto a la prueba indiciaria, estarán sustentados en: la acreditación, apreciación global, razonamiento claro y explícito.

El Fundamento Trigésimo cuarto de este referido A. P., se enfoca en la valoración de los indicios, para los que se tomará en cuenta: el incremento patrimonial, el movimiento y manejo del dinero, inexistencia o insuficiencia de justificación en negocios lícitos, la ausencia de explicación razonable del patrimonio, vínculo con actividades ilícitas; según el Fundamento Trigésimo octavo, el informe de UIF (Véase la estructura del mismo en el modelo del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación (2014) en Anexo N° 4), es de conocimiento de las partes del proceso y va acompañado de todo tipo de evidencia así como conclusiones y valoraciones, cumpliendo dos funciones, sirviendo de indicio para iniciar la investigación y elemento de contradicción por tener carácter pericial.

La S. P. C. N° 1 – 2017/CIJ-433, en su Fundamento Décimo cuarto precisa que el autor del delito de L. A. debe como mínimo inferir que los capitales que serán

sometidos a colocación, intercalación o integración se produjeron de actividades criminales; esta inferencia sometida a las debidas diligencias de las que pudo agenciarse el autor para evitar cometer el ilícito o para inferir que el activo era lícito.

La jurisprudencia mencionada en el párrafo anterior en su Fundamento Vigésimo tercero aclara como el CPP enfatiza los criterios de sospecha para las etapas del juicio, mencionando a la sospecha grave como requerimiento para la aplicación de la medida de coerción de Prisión Preventiva; tales conceptos, son desarrollados en el Fundamento Vigésimo cuarto, al precisar en el caso de la sospecha suficiente, que es un estándar idóneo para la acusación y para la emisión del auto de enjuiciamiento, cumpliendo tres presupuestos: hechos demostrables por la prueba, concluyentes respecto al tipo penal, y sin obstáculos procesales, con una alta probabilidad de condena.

El Fundamento Vigésimo cuarto de la sentencia antes citada también habla específicamente de la sospecha grave, siendo propia para dictar mandato de prisión preventiva, siendo un grado más fuerte según menciona la resolución que la sospecha suficiente, cumpliéndose criterios de punibilidad y perseguibilidad; no exigiéndose prueba plena de la autoría, tampoco la definitiva calificación de la conducta antijurídica, sino el uso de indicios y elementos de convicción fundados y graves.

Finalmente, en el Fundamento Vigésimo noveno establece doctrina legal reconociendo al L. A. como autónomo en su configuración material y persecución procesal, el Art. 10 del D. Leg. N° 1106 es una disposición declarativa y no un tipo penal, no existe un criterio de gravedad, basta la acreditación de actividades delictivas de modo genérico, el grado de convicción requiere constantemente mayor grado de sospecha.

La sospecha en el delito de L. A., es un concepto que proviene de presupuestos tomados del Derecho Alemán, la teoría de jurista Roxin (1981) traducida al español por el jurista Muñoz Conde, en la que se manifiesta la relevancia de la sospecha como una forma inicial pertinente para recabar información a fin de determinar la responsabilidad penal, dado que, esta sospecha va creciendo conforme crece la convicción del director de investigación hasta alcanzar un grado de “suficiencia probatoria”, la cual permite avanzar a una nueva etapa en el proceso penal, lo cual no invoca a la sospecha suficiente que se

manifiesta de manera exclusiva en la etapa intermedia, sino que se corresponde en si misma a los grados de sospecha existentes en el proceso penal.

La Ley N° 27693 crea la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú, tiene entre sus funciones recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del L. A. y/o el financiamiento del terrorismo, así como de coadyuvar a la implementación por parte de los obligados del sistema a efectos de que se detecten las operaciones sospechosas que generen dichos delitos. De manera que, podrá solicitar informes a diversas entidades que por ley se encuentran obligadas, resguardando dicha información; también tiene la facultad de solicitar ampliaciones de información; está facultada de comunicar al Ministerio Público las operaciones que presuma están vinculadas con los delitos antes mencionados.

Otra función relevante es la de disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de L. A. y el financiamiento del terrorismo, lo cual solo ocurrirá en casos de suma urgencia o peligro en la demora, dando cuenta posterior en un plazo de 24 horas al juez de turno para que convalide la medida o disponga su revocación inmediata. También la UIF podrá solicitar al Juez Penal competente el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del investigado; en este caso, el Juez Penal resolverá de forma reservada, sin intervención de terceros y dentro de cuarenta y ocho horas.

La Ley N° 29038 incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF – Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, manteniendo las atribuciones y funciones establecidas en la Ley N° 27693, así como las modificaciones y disposiciones complementarias por las que ha sido actualizada; de esta manera, se extingue la personería jurídica de la UIF, pasando a convertirse en una unidad especializada dependiente de la SBS, el titular de la UIF del Perú reportará de manera directa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; en efecto, será relevante dado que, los informes de inteligencia financiera dependen de esta entidad, y tienen un gran valor probatorio.

Cabe resaltar, que en el Art. 87 in fine de la Constitución Política Peruana, se establece que la designación del Superintendente de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensiones es designado por el Poder Ejecutivo, y ratificado por el Congreso; ello es preocupante, toda vez que se trata

de un órgano que puede someterse a la politización, y tratándose de órgano técnico en materia financiera, que ha adquirido entre sus funciones la de designar al titular de la UIF, cuya responsabilidad es la de los mencionados informes de inteligencia financiera.

La Resolución Administrativa (en adelante R. Adm.) SBS N° 2660-2015 modificado por R. Adm. SBS N° 4705-2017, establece un reglamento de gestión de riesgos de L. A. y del financiamiento del terrorismo; exige que las empresas obligadas cuenten con un sistema de prevención, analizando a los clientes, a los productos y/o servicios y a la zona geográfica en la cual se desempeñan, la responsabilidad de constituir un sistema interno de prevención del L. A. recae en los gerentes o su equivalente; para ello, deberán contar con un oficial de cumplimiento o *criminal compliance*, quien desempeñará sus funciones de manera exclusiva bajo los supuestos del Art. 13 de la resolución mencionada; el oficial de cumplimiento puede contar con el apoyo de un Comité de Riesgos.

A fin de precisar algunos conceptos consignados, se presenta el siguiente glosario de términos:

- a) Autonomía del delito: refiere la condición de autónomo, el conocimiento individual y particular de un delito, no siendo por tanto necesario analizarlo conjuntamente con otro delito o criterio.
- b) Capitales ilícitos: es aquella riqueza obtenida como consecuencia de la realización de actividades ilícitas (crímenes que generan ganancias); por lo que, adquieren esta característica; lo ilícitamente obtenido no podría de manera alguna convertirse en lícito; sin embargo, puede simular licitud, hasta ser descubierto por la autoridad competente.
- c) Casos emblemáticos: son casos que se han venido presentando en la realidad nacional peruana, en la que se encuentran involucrados políticos, famosos; siendo estos casos muy sonados por su relevancia jurídica o fáctica.
- d) Criminal Compliance: Término en lengua inglesa utilizado para definir al oficial de cumplimiento exigido por ley para ser operativo en las entidades obligadas a efectos de reportar operaciones financieras sospechosas.
- e) Criminalidad especializada: conjunto de crímenes desarrollados exclusivamente y especializadamente en una actividad delictiva particular,

ganando mayor impunidad conforme la experiencia de ejecución criminal se mantenga.

- f) Delito previo: delito por el cual se obtuvo las ganancias ilegales, es diferente de “origen ilícito”; ya que, la primera acepción refiere a un carácter específico tipificado en la norma, mientras la segunda solo a una apreciación indiciaria.
- g) Gasto público: desembolso pecuniario por parte del Estado para la realización tanto de su agenda política, como para el cumplimiento de sus obligaciones de diversas índoles, tal como la ejecución de obras, pago de servicios, conservación de bienes, etc.
- h) In dubio pro reo: acepción latina que establece que en cualquier caso que exista duda sobre la imputación o acusación, el juzgador tomará un criterio favorable al imputado.
- i) Lava jato: acepción portuguesa que evoca la industria de lavado de autos, que se ha usado para nombrar a la operación “lava jato” que es la mayor investigación de corrupción en la historia de Latinoamérica, vinculada con la ejecución de obras públicas.
- j) Lavado de activos (L. A.): acto ilícito por el cual se pretende introducir lícitamente en la economía capitales ilícitos, la norma de la materia a previsto una serie de verbos en la ejecución de esta actividad criminal tales como conversiones, transferencias, ocultamiento, tenencia, transporte y traslado.
- k) Ne bis in idem: acepción latina que invoca la imposibilidad de ser sancionado dos veces por el mismo motivo, siempre y cuando se constituyan los mismos elementos fácticos y jurídicos sobre el mismo sujeto, tiene naturaleza administrativa y penal.
- l) Numerus apertus: circunstancia normativa que permite abiertamente una serie de condiciones de similar naturaleza.
- m) Operaciones sospechosas: operaciones que dentro del tráfico económico son extrañas debido a sus montos o por las personas que las ejecutan, siendo identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
- n) Ratio legis: razón o justificación por el cual el legislador planteó la necesidad de la existencia de una norma jurídica.

- o) Sana crítica: sistema de razonamiento sobre la libre convicción de los hechos; el juzgador toma un criterio personal sobre un asunto en base a los elementos de convicción; motivando sus fundamentos derivados de la valoración probatoria aplicada.
- p) Sobreseimiento: estado del proceso penal en el que el director de investigación decide archivar el caso por no encontrar suficientes elementos de convicción.
- q) Suficiencia probatoria: grado de sospecha que se requiere según una etapa procesal, no es exclusivo de la Etapa Intermedia, por el contrario, la norma adjetiva ha previsto que la suficiencia aparezca en cada una de las etapas del proceso penal.
- r) Teoría ecléctica: Teoría filosófica aplicada al conocimiento jurídico, sirve para conciliar teorías jurídicas existentes siendo análogas o contradictorias; de manera que, se obtenga como resultado criterios de apreciación específica.
- s) Ultima ratio: aplicación de las normas penales para proteger los bienes jurídicos más importantes del ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha protección se aplicará después de agotadas todas las vías de solución de conflictos.

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación fue cuantitativo, debido a que los objetivos fueron definidos cuantitativamente, requiriéndose del análisis de datos sobre las variables.

3.1.2. Tipo de investigación

La investigación fue de tipo descriptivo, siendo necesario el análisis de información documental y de campo para profundizar en el conocimiento de las variables de estudio y lograr los objetivos propuestos.

3.1.3. Nivel de investigación

El nivel de investigación se definió como explicativo, debido a que, además de revelar y describir un problema, pretende encontrar las causas que lo provocaron, en tal sentido, la sospecha grave ha sido establecida jurisprudencialmente como un grado de sospecha para la prisión preventiva en el delito de L. A., lo cual es descrito a detalle en la investigación, precisando adicionalmente las condiciones de valoración probatoria que deben tenerse en cuenta, lo cual define el origen de la problemática y resulta en un aporte aclaratorio para la ciencia jurídica.

3.2. Variables y operacionalización

3.2.1. Variable Independiente:

Este estudio consideró pertinente señalar como variable independiente a la Valoración Probatoria en el Proceso Penal.

3.2.1.1 Definición Conceptual

Esta variable se define según Buitrago (2014):

“Por valoración probatoria debe entenderse el ejercicio científico e intelectual realizado por el juez, en el cual, cada una de las pruebas aportadas dentro del proceso de manera sistemática, lógica y ordenada, con el fin de reproducir los hechos que dieron origen a la conducta y determinar si esta es punible o no.” (p. 79)

Otra definición fue aportada por Contreras (2015) que sobre la prueba precisó que:

“(…) es menester señalar cuál es el sentido que debe darse a cada una de las acepciones indicadas. De este modo, deberá entenderse por medios a las modalidades, vehículos o formas en que se introducen al proceso las diferentes fuentes de prueba, en tanto elementos en favor de una determinada hipótesis de los hechos (documental, pericial, etc.); por procedimiento o actividad probatoria a la realizada tanto por las partes como por el tribunal para comprobar o adquirir la convicción de la veracidad de las afirmaciones de hecho, o bien, a las fases o etapas del juicio donde se realizan actos vinculados a la prueba (proposición, práctica, valoración); y por resultado, a la conclusión que se obtiene sobre los hechos, que puede ser el éxito o el fracaso en la acreditación de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes.” (p. 31)

3.2.1.2 Definición Operacional

La valoración probatoria resulta ser un criterio meramente discrecional del juzgador; por ello, es deber del acusador poner a su alcance la información de manera sistemática, lógica y ordenada, las pruebas, por tanto, que llegaron como meros indicios se han convertido en información relevante y posteriormente suficiente para acreditar un hecho delictivo.

La prueba contiene adicionalmente diversas acepciones relativas a esta, las cuales permiten comprender en un ámbito más profundo la obtención de información de un hecho delictivo, así se considerará que existen: medios de prueba, actividad probatoria, y finalmente, la acreditación de los hechos que determinará si son suficientes para demostrar responsabilidad penal en trámite del Proceso.

3.2.1.3 Indicadores

Como indicadores se cuenta con la Doctrina tanto nacional como extranjera, la legislación partiendo de la Constitución Política

Peruana, el Código Penal y el Código Procesal Penal, y finalmente, los Operadores Jurídicos tales como los Jueces Penales, los Fiscales y Abogados.

3.2.1.4 Escala de Medición

La escala de medición de las variables fue ordinal.

3.2.2. Variable Dependiente:

Este estudio consideró pertinente señalar como variable dependiente a la Sospecha Grave en la Prisión Preventiva en el Delito de Lavado de Activos.

3.2.2.1 Definición Conceptual

Esta variable se define por Heras (2018) quien manifiesta, en análisis a la S. P. C. N° 1-2017/CIJ-433, que:

“Para iniciar diligencias preliminares solo se exige elementos de convicción que sostengan una "sospecha inicial simple", para formalizar la investigación preparatoria se necesita "sospecha reveladora", para acusar y dictar auto de enjuiciamiento se precisa "sospecha suficiente", y para proferir auto de prisión preventiva se demanda "sospecha grave" (la sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia). La sentencia condenatoria requiere elementos de prueba más allá de toda duda razonable.” (p. 72)

Otro aporte respecto a esta variable es referido por Clavijo (2014) quien señala que:

Clavijo (2014) refiere que “(...) se promulgó el decreto legislativo 1106 (...). Esta norma tipifica diferentes delitos como los actos de conversión y transferencia (Artículo 1); actos de ocultamiento y tenencia (Artículo 2); actos de transporte o traslado de dinero o títulos valores (Artículo 3). Asimismo, tipifica el delito de omisión de la comunicación de operaciones o transacciones sospechosas (Artículo 5); delito de rehusamiento, retardo o falsedad en el suministro de información (Artículo 6). (...) consecuencias accesorias para personas jurídicas (Artículo 8) y el decomiso de los activos involucrados (Artículo 9).” (p. 636)

3.2.2.2 Definición Operacional

La fuente jurisprudencial que refiere los grados de sospecha es justamente la S. P. C. Nº 1-2017/CIJ-433, pero tiene una gran falencia, y esto es que no precisa los criterios de valoración probatoria que darán lugar a la acreditación suficiente del delito; la sospecha grave es uno de estos grados de sospecha, siendo este, el que más ha levantado suspicacias doctrinales.

Para el delito de L. A. han previsto diversos verbos rectores que tendrían un mayor alcance de las conductas delictivas, tal es así, que se han considerado diversos tipos de actos ilícitos que involucran incluso la omisión de parte de quienes están obligados a entregar información. Las etapas de investigación están directamente relacionadas con el grado de sospecha en el delito de L. A.; por lo tanto, la investigación preliminar como primera etapa de este delito se aperturará con la existencia de sospechas siendo una de ellas el desbalance patrimonial.

3.2.2.3 Indicadores

Para analizar la valoración probatoria de la sospecha grave se tiene como indicadores a la Doctrina tanto nacional como extranjera, a los operadores jurídicos tales como Jueces Penales, Fiscales y abogados, a la jurisprudencia tal como la S. P. C. Nº 1-2017/CIJ-433, el A. P. Nº 1- 2019/CIJ-116 y como normas jurídicas a las establecidas en el Código Procesal Penal.

Respecto al delito de L. A. propiamente, se tiene como indicadores a la jurisprudencia tal como los expedientes relevantes de la Corte Suprema de Justicia, la R. Adm. SBS Nº 2660-2015; como normas jurídicas al D. Leg. Nº 1106, D. Leg. Nº 1249, Ley Nº 27693, la ley Nº 29038, los operadores jurídicos tales como Jueces Penales, Fiscales y abogados, y la doctrina tanto nacional como extranjera.

3.2.2.4 Escala de Medición

La escala de medición de las variables fue ordinal.

La matriz de operacionalización de variables se encuentra en la parte final de la presente investigación (Ver Anexo N° 1)

3.3. Población, muestra y muestreo

3.3.1. Población

La presente Investigación tuvo como población a 10 jueces de investigación Preparatoria del Módulo Penal NCPP, a 10 jueces de Juzgamiento Unipersonales, a 6 jueces de los Juzgados Penales Colegiados, a 9 jueces de la Sala Penal de Apelaciones.

También se incluyó en el estudio a 6 fiscales de la Fiscalía Superior Penal de Apelaciones (titulares y adjuntos), a 12 fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (titulares y adjuntos), a 59 fiscales de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, a 4 fiscales de la Fiscalía Provincial de Prevención del delito de Chiclayo, a 3 fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas - Sede Chiclayo, a 14 fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Adicionalmente, también se incluyó a los abogados colegiados en el Colegio de Abogados de Lambayeque que son en la actualidad 8694 abogados.

3.3.2. Muestra

Como muestra para esta investigación se consideró pertinente seleccionar:

- a) 5 jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria.
- b) 5 jueces de Juzgamiento.
- c) 2 jueces de los Juzgados Penales Colegiados.
- d) 2 jueces de Sala Penal de Apelaciones.
- e) 3 fiscales de la Fiscalía Superior Penal de Apelaciones
- f) 6 fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque.
- g) 9 fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa.

- h) 2 fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Chiclayo.
- i) 1 fiscal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.
- j) 4 fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.
- k) 60 abogados colegiados del Colegio de Abogados de Lambayeque.

3.3.3. Muestreo

Como procedimiento para obtener la muestra de esta Investigación se aplicó un muestreo no probabilístico selectivo por conveniencia.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.

3.4.1. Técnica de investigación

La técnica que se usó en esta investigación fue la encuesta, conceptualizada como aquel proceso por la cual se valoran las respuestas de los jueces, fiscales y abogados conforme el instrumento debidamente validado con la finalidad de recabar información.

3.4.2. Instrumento de recolección de datos

El instrumento, fue el cuestionario, que puede ser definido como un documento que contiene un conjunto de preguntas o interrogantes que han emanado del análisis de las variables de manera intencional para que sean fluctuadas con la realidad problemática para verificar la hipótesis de la investigación; se ha desarrollado en base a la escala de Likert Ordinal y debidamente autorizado por el asesor temático, se encuentra en la parte final de la investigación (Ver Anexo N° 2).

3.5. Método de análisis de datos

Se usó el método analítico deductivo; ya que, se parte de una problemática que analizada desde la perspectiva nacional en los diversos pronunciamientos jurisdiccionales, y comparada con teorías internacionales; permitió llegar, a conclusiones específicas.

3.6. Procesamiento de datos

Se hizo uso del programa del SPSS y del programa Microsoft Excel, con el afán de precisar el alto grado de confiabilidad a través del Coeficiente Alfa Ordinal (ver Anexo N° 3), siendo revisados y aprobados por un profesional de Estadística; de manera que, se confirmó el haber alcanzado los objetivos y la hipótesis planteada.

3.7. Aspectos éticos

Este trabajo cuenta con todos los derechos de autoría, respaldado por un alto grado de autenticidad, cumpliendo minuciosa y estrictamente con todos los requisitos formales, metodológicos y académicos sugeridos por la Universidad César Vallejo, de modo que, se han esgrimido aportes temáticos relevantes como referencias bibliográficas, usando las citas y el parafraseo de textos como técnicas para las fuentes académicas, permitiendo de esta manera la consolidación de la investigación.

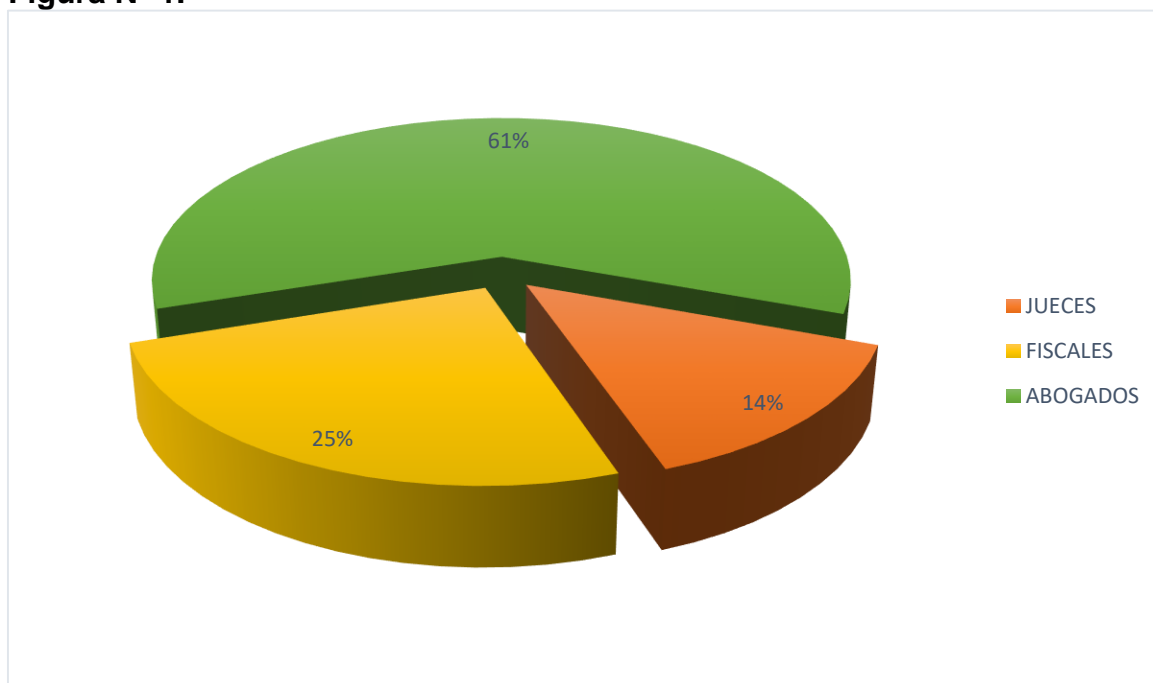
IV. RESULTADOS

Tabla N° 1. Condición de encuestados: jueces, fiscales y abogados.

	Cantidad	Porcentaje
Jueces	14	14.14
Fiscales	25	25.25
Abogados	60	60.61
Total	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura N° 1.



Fuente: Investigación Propia

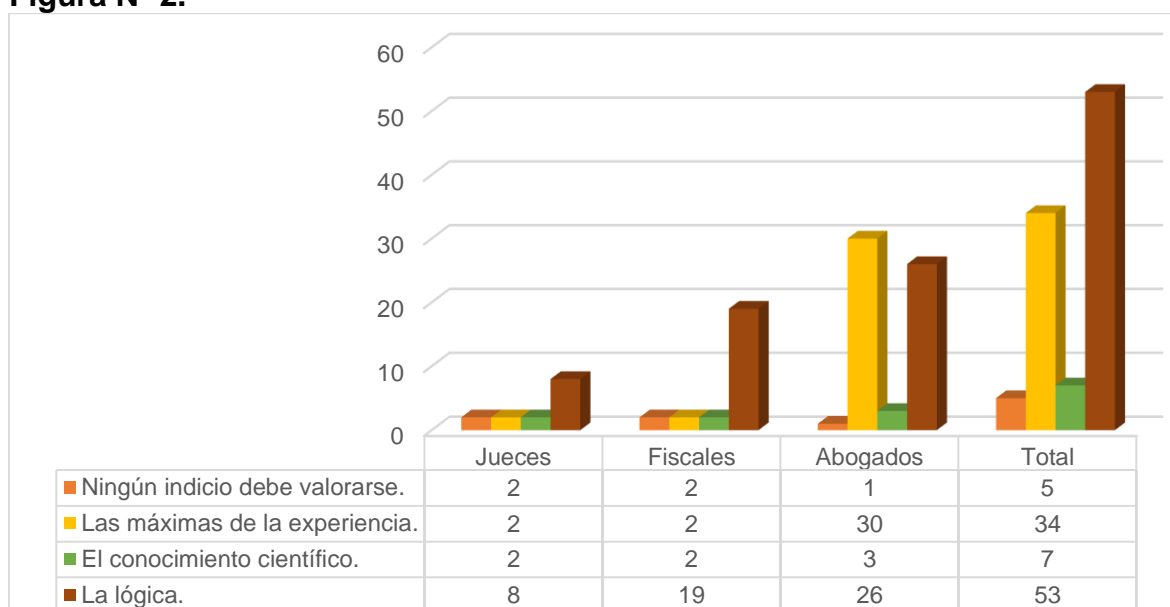
Según tabla y figura N° 1, el cuestionario fue presentado a jueces con 14.14%, abogados con 60.61% y fiscales 25.25%;

Tabla N° 2: Al valorar probatoriamente los indicios en el delito de lavado de activos, ¿Qué método consideraría más oportuno para determinar la responsabilidad penal?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Ningún indicio debe valorarse.	2	14.29%	2	8%	1	1.67%	5	5.05%
Las máximas de la experiencia.	2	14.29%	2	8%	30	50.00%	34	34.34%
El conocimiento científico.	2	14.29%	2	8%	3	5.00%	7	7.07%
La lógica.	8	57.14%	19	76%	26	43.33%	53	53.54%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura N° 2.



Fuente: Investigación Propia

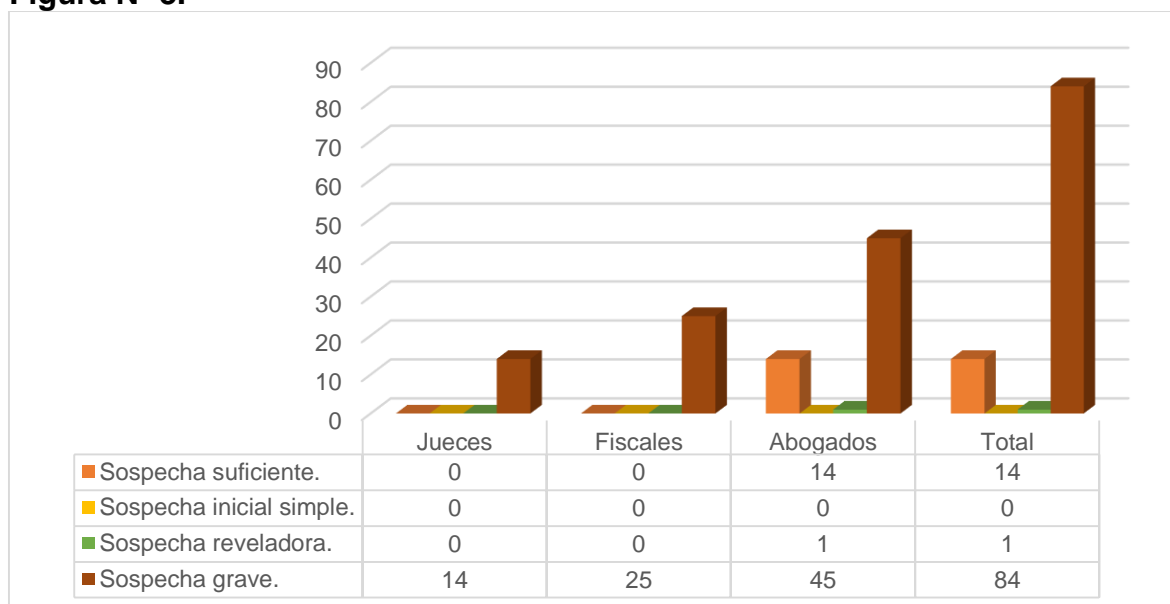
Según tabla y figura N° 2, de los resultados que se obtuvieron al aplicar la encuesta se observó que el 57.14% de jueces, el 76% de fiscales y el 43.33% de abogados consideró que la lógica es el método más oportuno para determinar la responsabilidad penal al valorar los indicios en el delito de L. A., lo que representó un total de 53.54% del total de los encuestados, resalta a la vista que este criterio se ha impuesto tanto para jueces como para fiscales; no obstante, en el caso de los abogados la mitad de estos; es decir, un 50% que representa el 34.34% del total, consideró que las máximas de la experiencia es el método más oportuno para determinar la responsabilidad penal.

Tabla Nº 3. ¿Qué grado de sospecha considera usted que se somete a valoración probatoria cuando se evalúa la medida de coerción procesal más gravosa en el lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Sospecha suficiente.	0	0%	0	0%	14	23.33%	14	14.14%
Sospecha inicial simple.	0	0%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Sospecha reveladora.	0	0%	0	0%	1	1.67%	1	1.01%
Sospecha grave.	14	100%	25	100%	45	75.00%	84	84.85%
Total	14	100%	25	100%	60	100.00%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura Nº 3.



Fuente: Investigación Propia

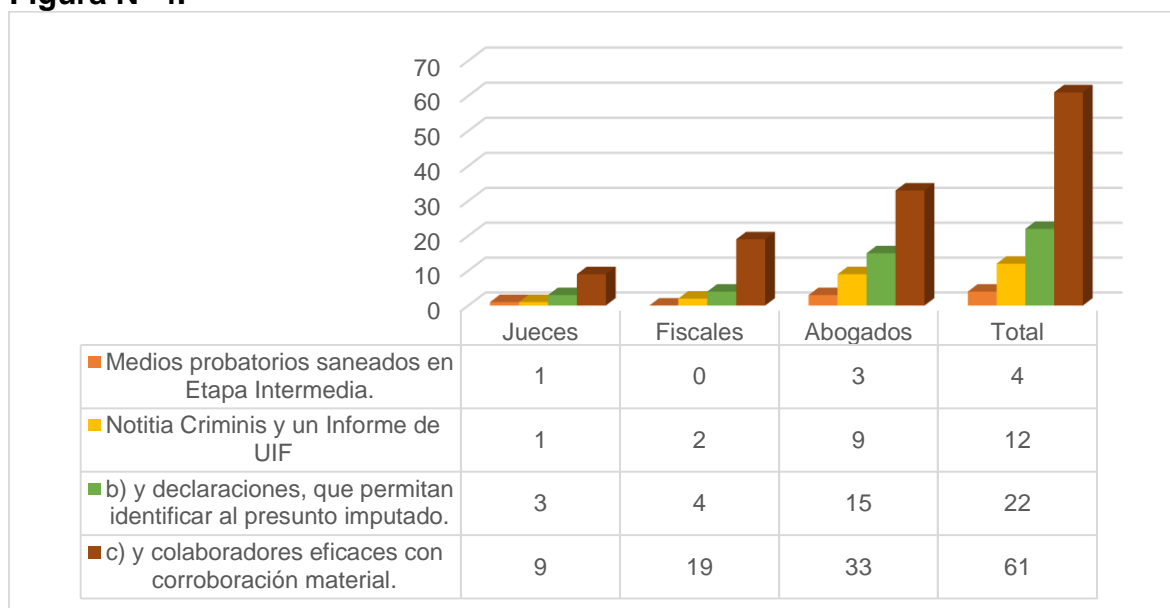
Según tabla y figura Nº 3, se observó de los resultados al aplicar la encuesta que el 100% de jueces, el 100% de fiscales y el 75% de abogados consideró que la sospecha grave es el grado de sospecha que se somete a valoración probatoria cuando se evalúa la medida de coerción más gravosa en el delito de L. A., lo cual representa un 84.85% del total de encuestados; para el 23.33% del total de abogados que representa el 14.14% del total de encuestados, sería la sospecha suficiente el grado de sospecha que somete a valoración probatoria en el estudio de la prisión preventiva.

Tabla Nº 4. ¿Qué criterio de valoración probatoria cree usted que se puede considerar sospecha grave en relación al incremento patrimonial en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Medios probatorios saneados en Etapa Intermedia.	1	7.14%	0	0%	3	5%	4	4.04%
Notitia Criminis y un Informe de UIF	1	7.14%	2	8%	9	15%	12	12.12%
b) y declaraciones, que permitan identificar al presunto imputado.	3	21.43%	4	16%	15	25%	22	22.22%
c) y colaboradores eficaces con corroboración material.	9	64.29%	19	76%	33	55%	61	61.62%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura Nº 4.



Fuente: Investigación Propia

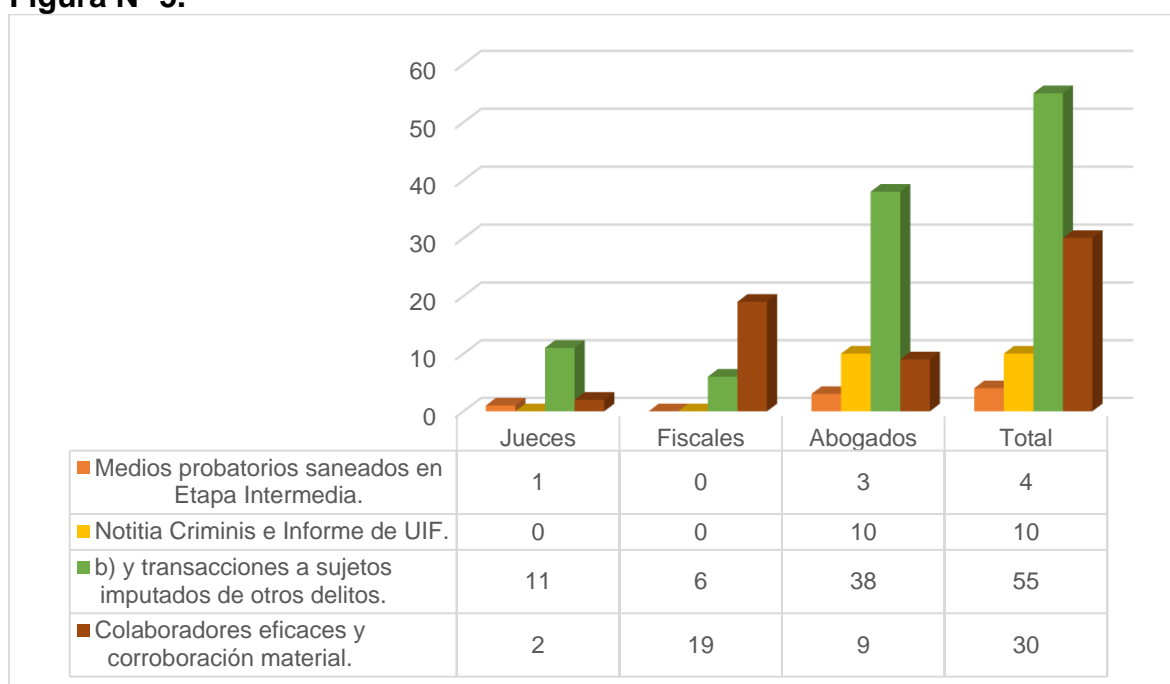
Según tabla y figura Nº 4, se observó de los resultados al aplicar la encuesta que el 64.29% de jueces, el 76% de fiscales y el 55% de abogados consideró que para valorar probatoriamente la sospecha grave respecto al incremento patrimonial se requiere un criterio acumulado, resalta el hecho de que, en el total, un 22.22% creyó que es necesario un nivel de convicción menor descartando a los colaboradores eficaces y la corroboración material.

Tabla Nº 5. ¿Qué criterio de valoración probatoria cree usted que se considera sospecha grave en relación a las operaciones financieras sospechosas en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Medios probatorios saneados en Etapa Intermedia.	1	7.14%	0	0%	3	5.00%	4	4.04%
Notitia Criminis e Informe de UIF.	0	0.00%	0	0%	10	16.67%	10	10.10%
b) y transacciones a sujetos imputados de otros delitos.	11	78.57%	6	24%	38	63.33%	55	55.56%
Colaboradores eficaces y corroboración material.	2	14.29%	19	76%	9	15.00%	30	30.30%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura Nº 5.



Fuente: Investigación Propia

En la tabla y figura Nº 5 respecto a las operaciones financieras sospechosas, el 78.57% de jueces, el 24% de fiscales y el 63.63% de abogados, que representa el 55.56% de los encuestados totales, creyó que se requiere de un criterio acumulado; el 30.30% del total de encuestados creyó necesaria la aplicación de un

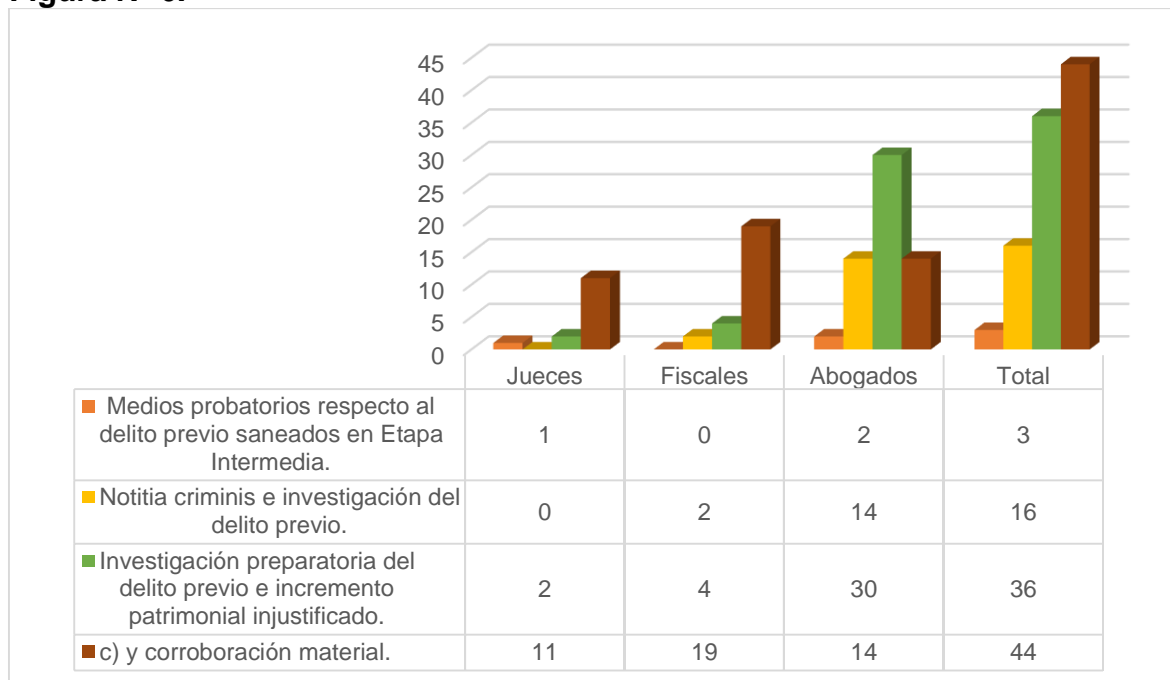
criterio mayor de valoración probatoria; es decir, requiriendo adicionalmente de colaboradores eficaces con aporte de corroboración material.

Tabla Nº 6. ¿Qué criterio de valoración probatoria desde su perspectiva se considera sospecha grave respecto a la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Medios probatorios respecto al delito previo saneados en Etapa Intermedia.	1	7.14%	0	0%	2	3.33%	3	3.03%
Notitia criminis e investigación del delito previo.	0	0.00%	2	8%	14	23.33%	16	16.16%
Investigación preparatoria del delito previo e incremento patrimonial injustificado.	2	14.29%	4	16%	30	50.00%	36	36.36%
c) y corroboración material.	11	78.57%	19	76%	14	23.33%	44	44.44%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura Nº 6.



Fuente: Investigación Propia

Según la tabla y figura Nº 6, el 78.57% de jueces, el 76% de fiscales y solo el 23.33% de abogados, que representa un 44.44% del total de encuestados,

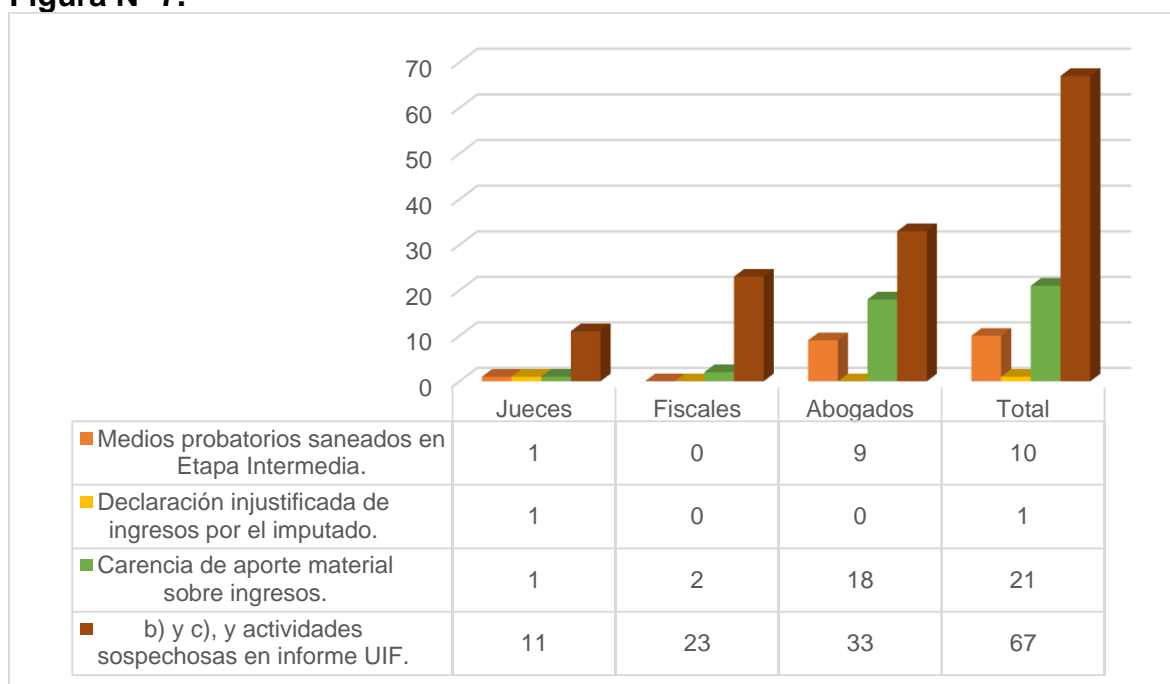
consideró desde su perspectiva que para valorar probatoriamente la existencia de sospecha grave ante la ausencia de explicación razonable de patrimonio, se requiere de un criterio acumulado; el 50% de abogados consideró que basta la alternativa c), lo cual se refleja en el total alcanzando el 36.36%

Tabla Nº 7. Según Usted, ¿Qué criterio de valoración probatoria en relación a la carencia de la actividad económica lícita se considera sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Medios probatorios saneados en Etapa Intermedia.	1	7.14%	0	0%	9	15%	10	10.10%
Declaración injustificada de ingresos por el imputado.	1	7.14%	0	0%	0	0%	1	1.01%
Carencia de aporte material sobre ingresos.	1	7.14%	2	8%	18	30%	21	21.21%
b) y c), y actividades sospechosas en informe UIF.	11	78.57%	23	92%	33	55%	67	67.68%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura Nº 7.



Fuente: Investigación Propia

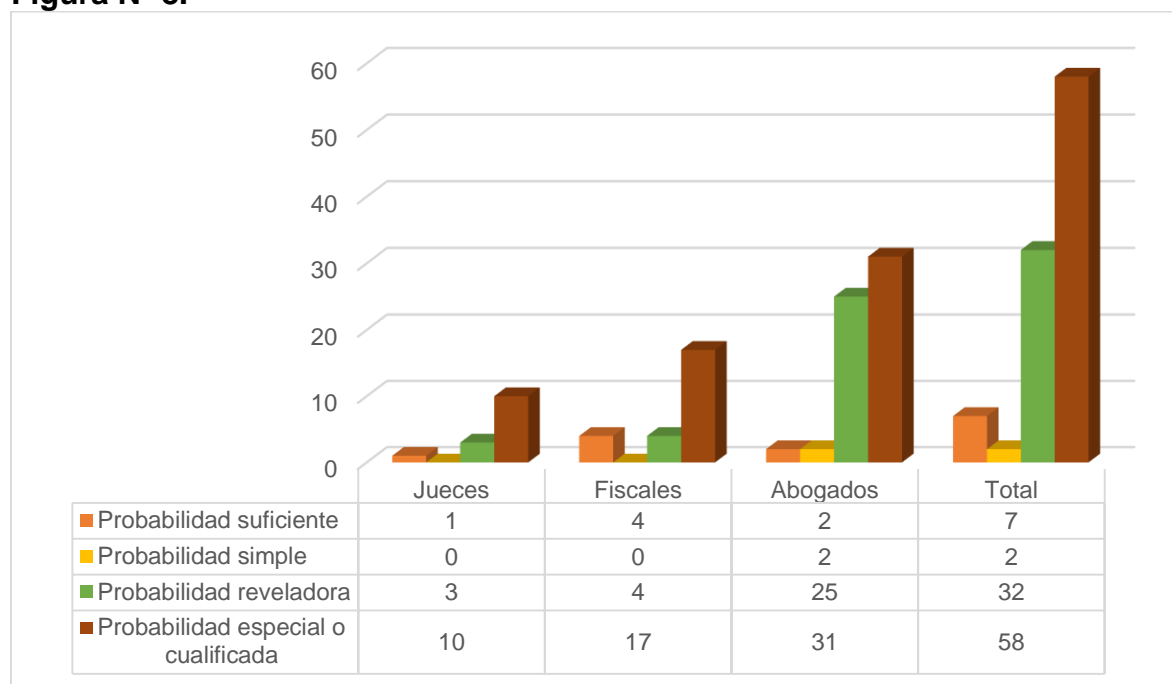
Se apreció en la tabla y figura N° 7, que el 78.57% de los jueces, el 92% de los fiscales y el 55% de los abogados, que representa el 67.68% del total, que la valoración probatoria en relación a la carencia de actividad económica lícita necesaria para considerarse sospecha grave requiere un criterio acumulado; el 21.21% de los encuestados, consideraron que basta la carencia de aporte material sobre ingresos, siendo mayormente abogados, representando un 30%.

Tabla N° 8. ¿Qué criterio usaría Ud. para la valoración lógica de los elementos de convicción en nivel de sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Probabilidad suficiente	1	7.14%	4	16%	2	3.33%	7	7.07%
Probabilidad simple	0	0.00%	0	0%	2	3.33%	2	2.02%
Probabilidad reveladora	3	21.43%	4	16%	25	41.67%	32	32.32%
Probabilidad especial o cualificada	10	71.43%	17	68%	31	51.67%	58	58.59%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura N° 8.



Fuente: Investigación Propia

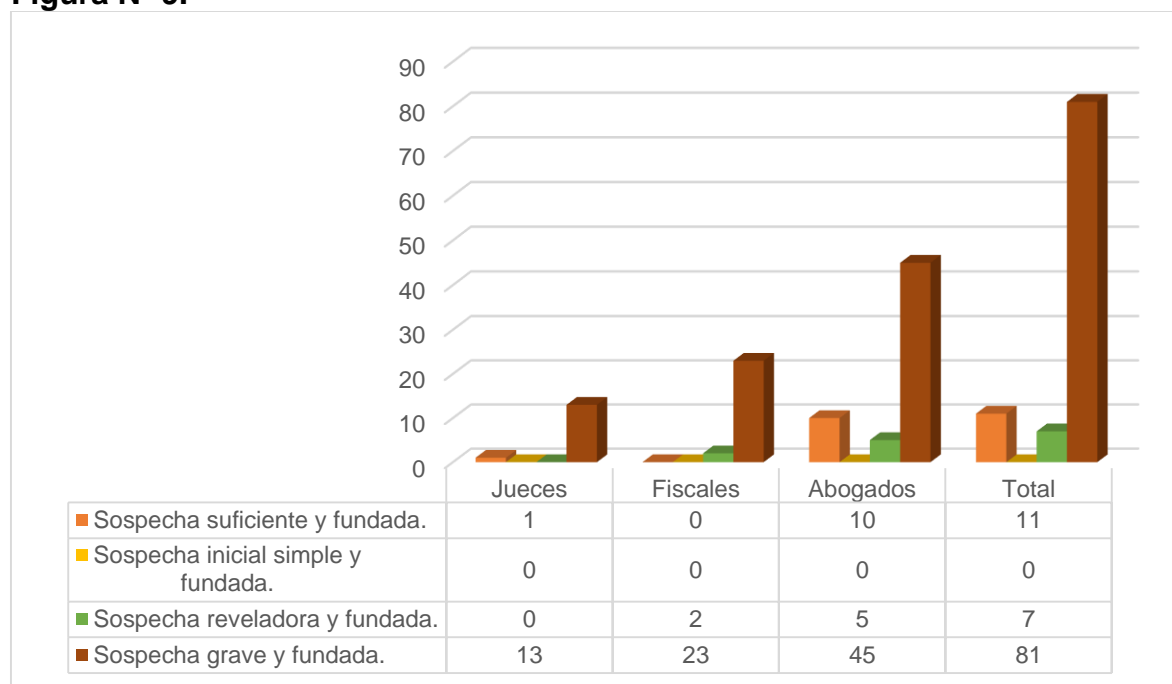
Respecto a la tabla y figura N° 8, el 71.43% de jueces, 68% de fiscales y el 51.67% de abogados, que representan el 58.59% del total de encuestados, usarían para la valoración lógica de los elementos de convicción en nivel de sospecha grave a la probabilidad especial o cualificada, sustentada en testimonios y corroboración, por otro lado, el 32.32% del total consideró a la sospecha reveladora, sustentada en informes y testimonios, siendo en su mayoría abogados representando un 41.67%.

Tabla N° 9. ¿Cómo considera Ud. que se define a la sospecha fuerte cuando se analiza la medida de coerción procesal más gravosa en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Sospecha suficiente y fundada.	1	7.14%	0	0%	10	16.67%	11	11.11%
Sospecha inicial simple y fundada.	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Sospecha reveladora y fundada.	0	0.00%	2	8%	5	8.33%	7	7.07%
Sospecha grave y fundada.	13	92.86%	23	92%	45	75.00%	81	81.82%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura N° 9.



Fuente: Investigación Propia

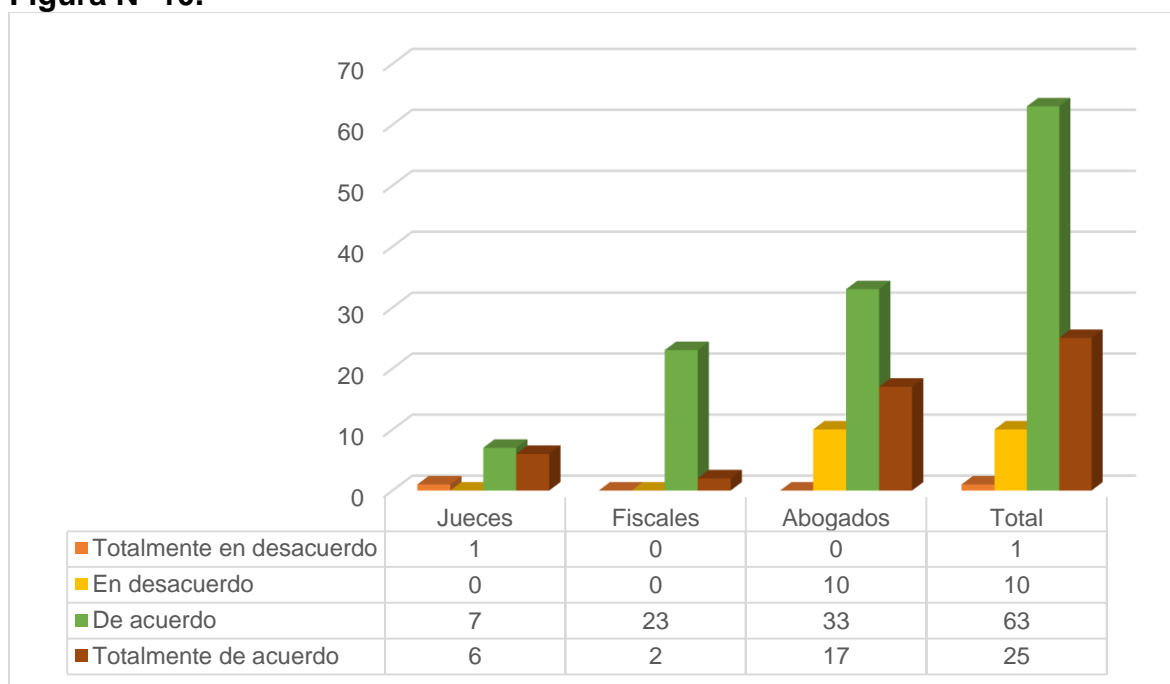
En la a tabla y figura N° 9 que antecede, el 92.86% de jueces, 92% de fiscales y 75% de abogados, que representan el 81.82% del total, consideró que la sospecha fuerte está definida por la sospecha grave y fundada, lo cual es un criterio que corrobora lo determinado en el A. P. N° 1-2019/CIJ-116.

Tabla N° 10. ¿Cree Usted que la sospecha grave y/o la sospecha fuerte están por encima del nivel de convicción de sospecha suficiente en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente en desacuerdo	1	7.14%	0	0%	0	0.00%	1	1.01%
En desacuerdo	0	0.00%	0	0%	10	16.67%	10	10.10%
De acuerdo	7	50.00%	23	92%	33	55.00%	63	63.64%
Totalmente de acuerdo	6	42.86%	2	8%	17	28.33%	25	25.25%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura N° 10.



Fuente: Investigación Propia

Según la tabla y figura N° 10, el 42.86% de jueces, el 92% de fiscales y el 55% de abogados, que representan un 63.64% del total, estuvieron de acuerdo que la

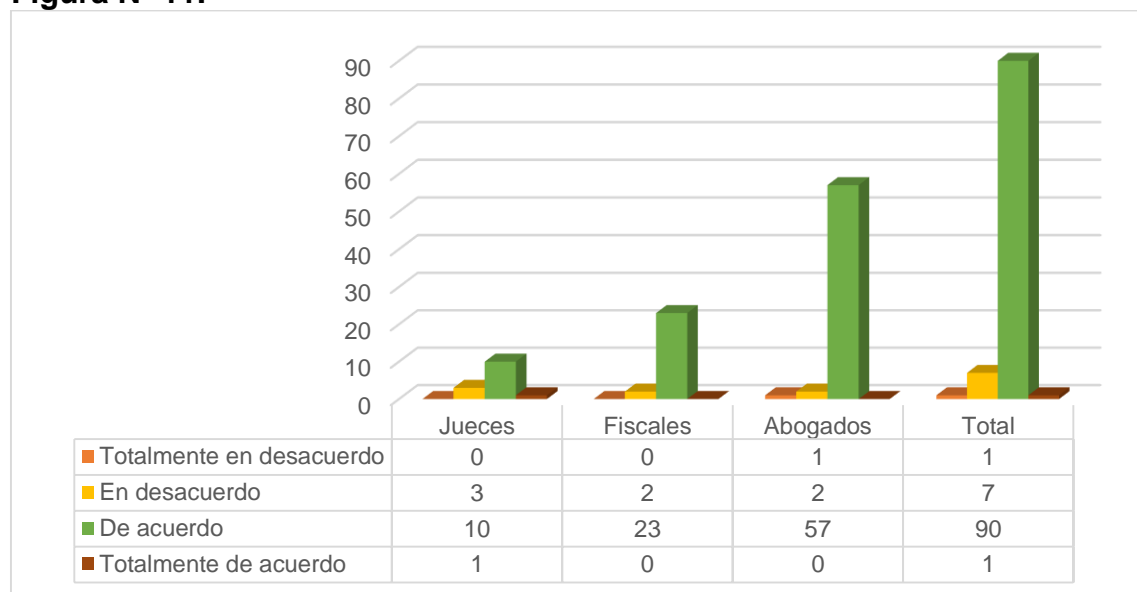
sospecha grave y/o fuerte están por encima del nivel de convicción de sospecha suficiente en la prisión preventiva, mientras un 25.25% estuvo totalmente de acuerdo, lo cual da cuenta de la existencia de una deficiencia entre lo que es sospecha suficiente y suficiencia probatoria; ya que, según la S. P. C. N° 1-2017/CIJ-433, la sospecha suficiente es el estándar de convicción para la emitir un auto de enjuiciamiento, mientras la sospecha fuerte (grave y fundada) es el estándar de la medida de coerción más gravosa.

Tabla N° 11. Respecto a la pregunta anterior, ¿Considera Usted que el Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 confunden los términos “suficiencia probatoria” con “sospecha suficiente”?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente en desacuerdo	0	0.00%	0	0%	1	1.67%	1	1.01%
En desacuerdo	3	21.43%	2	8%	2	3.33%	7	7.07%
De acuerdo	10	71.43%	23	92%	57	95.00%	90	90.91%
Totalmente de acuerdo	1	7.14%	0	0%	0	0.00%	1	1.01%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura N° 11.



Fuente: Investigación Propia

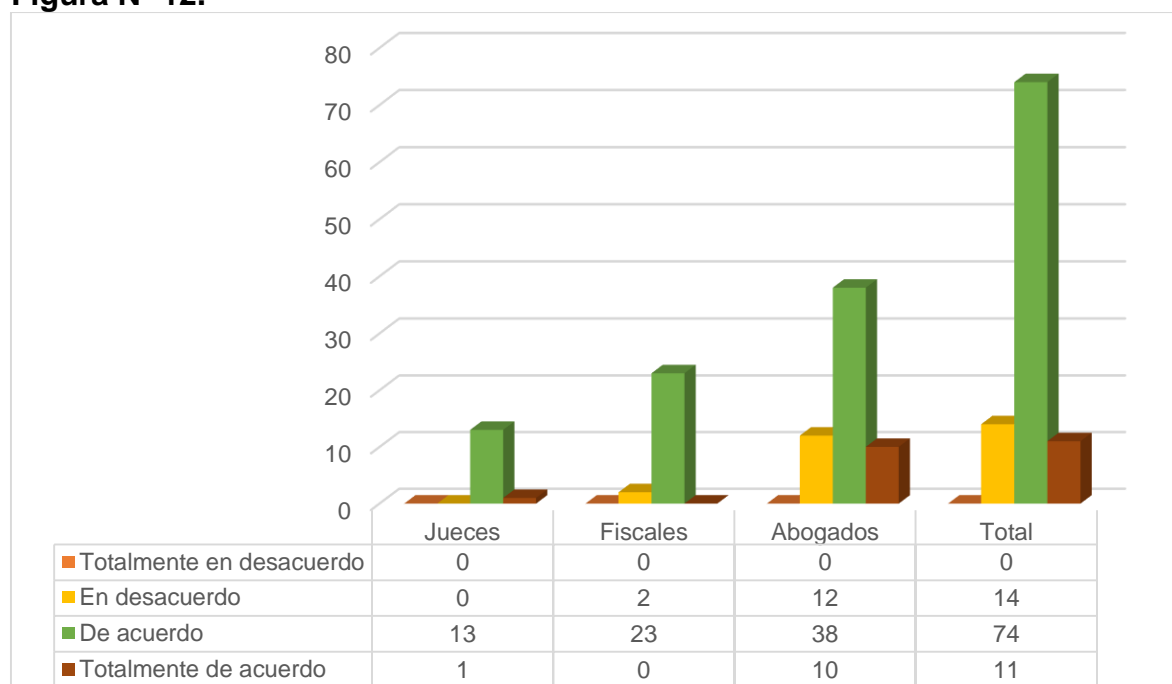
Se aprecia en la tabla y figura N° 11, que el 71.43% de jueces, 92% de fiscales y 95% de abogados, que representan un 90.91 % del total de encuestados, consideró que están de acuerdo con que las principales jurisprudencias de la materia de sospecha grave confunden los términos de suficiencia probatoria y sospecha suficiente; como se viene confirmando en la tabla y figura 10.

Tabla N° 12. ¿Cree Usted que sustentar la prisión preventiva cuando la investigación está en un grado de sospecha reveladora contradice los criterios de sospecha grave y/o fuerte?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente en desacuerdo	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
En desacuerdo	0	0.00%	2	8%	12	20.00%	14	14.14%
De acuerdo	13	92.86%	23	92%	38	63.33%	74	74.75%
Totalmente de acuerdo	1	7.14%	0	0%	10	16.67%	11	11.11%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura N° 12.



Fuente: Investigación Propia

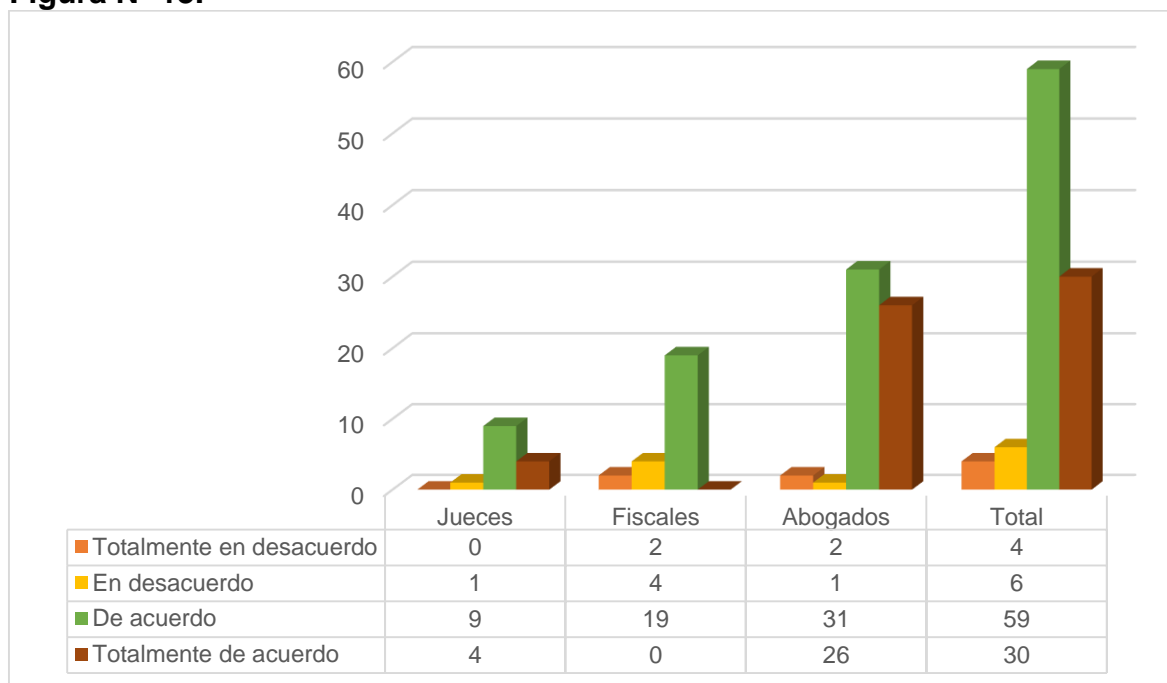
Respecto a la tabla y figura N° 12, el 92.86% de jueces, 92% de fiscales, 63.33% de abogados, que representan el 74.75% del total de encuestados, estuvieron de acuerdo en que la sustentación de la prisión preventiva cuando la investigación está en un grado de sospecha reveladora por lo cual se contradice los criterios de sospecha grave y/o fuerte.

Tabla N° 13. ¿Considera pertinente realizar un Acuerdo Plenario Nacional a fin de unificar criterios de valoración probatoria en la acreditación de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

	JUECES		FISCALES		ABOGADOS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente en desacuerdo	0	0.00%	2	8%	2	3.33%	4	4.04%
En desacuerdo	1	7.14%	4	16%	1	1.67%	6	6.06%
De acuerdo	9	64.29%	19	76%	31	51.67%	59	59.60%
Totalmente de acuerdo	4	28.57%	0	0%	26	43.33%	30	30.30%
Total	14	100%	25	100%	60	100%	99	100%

Fuente: Investigación Propia

Figura N° 13.



Fuente: Investigación Propia

Finalmente, en la tabla y figura N° 13 se muestra que 64.29% de jueces, el 76% de fiscales y el 51.67% de abogados, que representan el 59.60% del total estuvieron de acuerdo con realizar un Acuerdo Plenario Nacional a fin de unificar criterios de valoración probatoria en la acreditación de la sospecha grave en la prisión preventiva del delito de L. A., por su parte, el 30.30% del total estuvo totalmente de acuerdo con este mismo criterio.

V. DISCUSIÓN

La investigación está enfocada en rebatir la multiplicidad de criterios de valoración e inexactitud jurisprudencial que genera problemáticas en el establecimiento de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de L. A.; en tal sentido, los resultados de esta tesis han permitido determinar criterios de valoración probatoria estándares con respecto a la sospecha grave, lo que se condice con el objetivo general que pretende esta investigación; lo cual ofrecerá, a los jueces, fiscales y abogados penales, criterios tanto para el ofrecimiento, sustentación, y finalmente valoración probatoria, bajo la observancia del debido proceso, sin menoscabar el derecho a la presunción de inocencia.

Para lograr el objetivo general de la investigación corresponde preliminarmente identificar el sistema de valoración probatoria que tiene el país, según el autor Talavera (2009), nuestro ordenamiento procesal sigue las reglas de la sana crítica, pero es pertinente aclarar si existe dicha valoración probatoria en la instancia de las medidas de coerción procesal, ello hace recurrir a la investigación de Zúñiga (2019), quien da a conocer que existen nuevos estándares de motivación para la aplicación de las medidas de coerción, los cuales implican una seudo valoración probatoria, que contradictoriamente a lo mencionado por el autor, es razonable debido a que esta medida afecta derechos fundamentales.

Una de las debilidades de la investigación es que en la jurisprudencia, los elementos de convicción graves y fundados son un criterio de menor debate, decidiéndose a la discrecionalidad del magistrado en una resolución motivada, lo cual genera una apariencia de debido proceso, perjudicando la seguridad jurídica dentro de un paralelismo probatorio, y evaluando con más fuerza los elementos de peligro procesal; la estandarización no pretende crear criterios que se basen en fórmulas matemáticas, ni mucho menos en tabulaciones, la pretensión es la de coadyuvar a la labor del magistrado en el momento de motivar su fallo relativo a esta medida de coerción; por lo que, se ha tomado en cuenta complementariamente la opinión de abogados y fiscales como se muestra en la figura N° 1.

Para determinar este criterio de valoración probatoria como lo precisa el objetivo general de la presente investigación, es necesario adecuarse a lo dispuesto

por el Art. 158º del CPP, donde deben observarse tres reglas fundamentales, la lógica, las ciencias y las máximas de la experiencia; la figura N° 2 busca direccionar y priorizar el método de valoración que ha de seguirse; la mayoría de encuestados determinó que ese método debe ser la lógica. Esos porcentajes hacen suponer, que para los magistrados la lógica basada en probabilidades es un método más eficiente de valoración probatoria mientras no se encuentren en una etapa de certeza como lo es el juzgamiento.

El segundo método de valoración determinado en la figura N° 2 son las máximas de la experiencia elegido por la mitad de los abogados encuestados, que representan un 34.34% del total; desde la perspectiva de los abogados, la valoración probatoria depende en una mayor proporción del conocimiento del magistrado, en tal sentido, la experiencia le permitirá analizar el caso concreto, encontrándose esos factores en el ámbito de la discrecionalidad, que constituye una de las facultades jurisdiccionales, pero que, tratándose de un derecho como la libertad ambulatoria que resulta afectado por esta medida de coerción, es conveniente que contenga un mayor grado de convicción, tal como lo ha previsto el A. P. N° 1-2019/CIJ-116 al invocar el término “sospecha fuerte”.

Basados pues, en la lógica como se muestra en la figura N° 2, corresponde establecer qué grados de sospecha existen y las probabilidades que les corresponden, la fuente más elocuente al respecto es la S. P. C. 1-2017/CIJ-433, la cual permite clasificar la sospecha en el proceso penal en dos clases, la sospecha tácita y la sospecha jurisprudencial; la sospecha está invocada en el CPP, sin su *nomen iuris* el cual se definió jurisprudencialmente, esos grados de sospecha son: la sospecha inicial simple (diligencias preliminares), la sospecha reveladora (investigación preparatoria), la sospecha suficiente (etapa intermedia – auto de enjuiciamiento), siendo estos grados de sospecha parte de las etapas del proceso penal.

La sospecha grave constituye uno de los elementos del requerimiento de prisión preventiva, conforme lo señalara el tesista Zúñiga (2019) en los trabajos previos nacionales; en la figura N° 3, la sospecha grave fue elegida por el 84.85% de los encuestados considerando que se aplica a la prisión preventiva, lo cual lo define como un criterio exclusivo de las medidas de coerción, diferenciándose de

los grados de sospecha de las etapas del proceso penal; salvo la sospecha fuerte, que está constituida por la sospecha grave y fundada, siendo este último grado de sospecha el único perteneciente al ámbito jurisprudencial; cabe entonces revisar dos aspectos de la valoración lógica, el primero relacionado al principio de verificabilidad, y el segundo a la sustentación de este grado de sospecha.

El principio de verificabilidad precisado por el autor Talavera (2009), requiere que los elementos de convicción y los hechos se encuentren suficientemente fundados para acreditar una correcta motivación y valoración probatoria; perteneciendo dicha valoración al ámbito del análisis judicial, y no a las actuaciones previas; es decir, entrando en el caso concreto, en el requerimiento de prisión preventiva, ni en su sustentación en audiencia; por lo tanto, la sospecha fuerte no es condición propia del requerimiento de prisión preventiva, porque en dichas actuaciones sólo puede ser exigida la sospecha grave como se confirma en la figura Nº 3, la cual se constituirá en sospecha fuerte cuando el magistrado determine previa audiencia que los elementos de convicción presentados son fundados.

Es por lo tanto erróneo acudir al magistrado señalando o negando la existencia de la sospecha fuerte en el requerimiento de prisión preventiva, esta argumentación implica que el nivel de sospecha fuerte se determina a través del razonamiento que hace el juzgador luego de la valoración de los elementos de convicción que informan suficiencia probatoria, razonamiento que equivale al que se realiza para determinar certeza positiva de culpabilidad al momento de emitir sentencia; tal como lo ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia, siendo la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 04780-2017-PHC/TC acumulado al Exp N ° 00502-2018-PHC/TC, uno de los casos más resaltantes, permitiendo confirmar lo establecido en la figura Nº 3.

Ahora bien, corresponde de acuerdo al primer objetivo específico de la investigación establecer un criterio de valoración probatoria de la sospecha grave, y diferenciarlo del grado de convicción de las etapas del proceso común; por lo que, es necesario analizar las características comunes del delito de L. A.; el autor Tasayco (2018) precisó, que la jurisprudencia ha considerado características comunes en este delito, lo cual en concordancia a lo mencionado por Mendoza (2017) en los trabajos previos, ha permitido seleccionarlos bajo un criterio de

relevancia; sometiendo cada característica a grados de intensidad en la convicción, por ello, las figuras N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7, son las que permiten contrastar estas características vinculadas a los grados de sospecha.

La primera característica refiere al incremento patrimonial, la figura N° 4 presenta grados de intensidad en el nivel de convicción, a fin de establecer la suficiencia probatoria basada en la lógica para determinar la sospecha grave; involucrando criterios como la *Notitia Criminis* e informe de UIF, que representan el primer atisbo de conocimiento de la actividad criminal, tal como está citado en el Art. 329° del CPP, lo cual fija a la investigación en ese nivel apenas en sospecha inicial simple; tal conocimiento preliminar en ese nivel de convicción lo precisa Lafolla (2015) en los trabajos previos internacionales, quien refiere que las principales entidades que brindan estos informes de sospecha son las entidades bancarias y sus agentes especializados en *criminal compliance*.

Posteriormente, en la misma figura N° 4, ante la aparición de declaraciones que permitan identificar al presunto imputado, se genera un grado de convicción que permite formalizar la investigación preparatoria, cumpliendo lo dispuesto en el Art. 336 del CPP; asimismo, para llegar a la sospecha grave sería necesario aportar colaboraciones eficaces corroboradas, criterio que es apoyado por el 61.62% de los encuestados; es resaltante que estos elementos de convicción pueden aparecer en distintos órdenes a lo largo de la investigación, pero aun así, permiten definir criterios estándares de valoración probatoria, citados por Terra de Oliveira (2016) en los trabajos previos internacionales, referido al enfoque “*follow the money*”; tal concepto solo difiere en la configuración típica.

La segunda característica es relativa a las operaciones financieras sospechosas, en tal sentido, la Figura N° 5 muestra que la mayoría de los encuestados identifica que las transacciones a sujetos imputados de otros delitos configuran sospecha grave, por lo tanto, este hecho permitiría tanto formalizar la investigación preparatoria como solicitar la prisión preventiva, quedando la colaboración eficaz corroborada en un plano posterior y más cercano a la sospecha suficiente; tales actos de transferencia concuerdan con lo establecido por Castillo (2018) en los trabajos previos nacionales, siendo esto parte de la configuración típica del delito según el D. Leg. 1106 en su Art. 1.

Es conveniente destacar, respecto a la figura N° 5, que la mayoría de fiscales consideran necesario aplicar adicionalmente para llegar al nivel de convicción de sospecha grave, el uso de la colaboración eficaz corroborada; esto hace suponer, que el nivel de convicción que exigen los representantes del Ministerio Público es mayor al que en promedio se suele usar en estas etapas procesales; por lo que, estarían cumpliendo con el principio de objetividad, contradiciéndose lo que, en las teorías relacionadas al tema, fue señalado por Ask (2006) quien afirmó, que los investigadores prefieren la evidencia incriminatoria; en todo caso, al menos en relación a este criterio, el Ministerio Público está exigiendo un mayor nivel de convicción.

La tercera característica analiza la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado, la figura N° 6 evidencia dos aspectos resaltantes, el primero representado por la mayoría de encuestados, exige un mayor grado de convicción de la actividad criminal previa; dado que, una denuncia o simple investigación por un delito previo, solo sería suficiente para configurar sospecha inicial simple; si esta convicción aumenta permitiendo la investigación preparatoria del delito previo e incremento patrimonial injustificado, dan cuenta de una sospecha reveladora; Rodríguez (2018) en los trabajos previos nacionales, hace la precisión de que es inconstitucional que no se requiera el análisis del delito fuente, en tal sentido, pese a no estar de acuerdo, el resultado de este criterio ha permitido darle la razón.

La sospecha grave en la figura N° 6 se alcanzaría con la corroboración material, en este caso, dicha corroboración sería propiamente lo aportado por el imputado, siguiendo lo establecido por el autor Maurer (2017), en los trabajos previos internacionales, en relación a la carga inversa de la prueba; tal aporte material no sería coincidente o razonable para demostrar la acumulación patrimonial; es evidente también que en un país donde la informalidad es de grandes dimensiones, muchos sean incapaces de demostrar coherentemente sus ingresos; tal es así, que incluso las actividades extractivas muchas veces acumulan patrimonio encontrándose en los supuestos de defraudación tributaria.

Por otro lado, la figura N° 6, muestra que la mayoría de los abogados consideran que basta con la investigación preparatoria del delito previo y el incremento patrimonial injustificado, para configurar sospecha grave, revelando un

menor nivel de convicción del exigido por los magistrados, ello se refleja en el resultado final siendo equivalente al 36.36%; se aprecia en ese resultado, que el vínculo con un delito previo, desde la perspectiva de los abogados, hace innecesaria la aplicación de un mayor grado de convicción en la investigación, confirmando que aquel incremento patrimonial configura sospecha grave, y a la vez negando lo precisado por Rodríguez (2018) respecto al vínculo con el delito previo, siendo ese el criterio más acertado desde el punto de vista jurisprudencial.

La cuarta y última característica es precisada en la figura N° 7 sometiendo a valoración probatoria la carencia de actividad económica lícita, tal criterio está muy relacionado con el anterior, esto debido a que la actividad económica ilícita genera las ganancias que luego no pueden explicarse razonablemente, y que por lo tanto, constituyen una conducta sospechosa, tal como es mencionado por Santa Cruz (2018) en los trabajos previos locales; la mayoría de los encuestados; es decir, un 67.68% postuló un criterio acumulado para determinar la sospecha grave; para llegar a ese nivel de convicción, se iniciará con la declaración injustificada del imputado en relación a sus ingresos, lo cual puede recabarse, en una diligencia o interrogatorio, permitiendo de esa manera iniciar diligencias preliminares.

Continuando con el análisis de lo establecido en la figura N° 7, la declaración injustificada de ingresos del imputado se convertirá en sospecha reveladora cuando el imputado no pueda justificar materialmente lo declarado, pero será sospecha grave cuando la UIF presente un informe que demuestre las actividades sospechosas del imputado, tal como fue precisado por el autor Sánchez (2018), respecto al cruce de información de la UIF; la fortaleza de dicho informe dependerá de los actos de transferencia que vinculen al imputado con la actividad criminal previa, principalmente por detectarse nexos con organizaciones criminales.

Es destacable que la alternativa que menos eligieron los encuestados en las Figuras N° 4, 5 y 6, y sólo los magistrados en la Figura N° 7 fue la que precisa que el criterio de valoración exigido serían los medios probatorios saneados en Etapa intermedia, esto debido a que en esta etapa se emite el auto de enjuiciamiento, lo que más adelante aunado a otros criterios permitirá desvirtuar que el nivel de sospecha grave está por encima del nivel de sospecha suficiente, tal como lo invoca el A. P. N° 1-2019/CIJ-116 y la S. P. C. N° 1-2017-CIJ/433, máxime si el

requerimiento de prisión preventiva se puede interponer inmediatamente después de la formalización de la investigación preparatoria; desvirtuando el criterio que muchos juristas han desarrollado (véase Anexo N° 5).

El segundo objetivo específico de la investigación consistente en identificar si la probabilidad cualificada, llamada también en esta investigación probabilidad especial, resulta ser el criterio de valoración probatoria que tiene mayor relevancia para los sujetos procesales en el momento de analizar la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de L. A., la figura N° 8 precisa objetivamente que la mayoría de encuestados la usarían en la valoración lógica de los elementos de convicción con un 58.59%; tal resultado, se corresponde a lo establecido por Martínez de Morentín (2007) en las teorías relacionadas al tema; ya que, se está generando un grado de certeza positiva que vincula al supuesto de hecho generando una convicción probable de la realización del hecho criminal.

Es resaltante también que en la misma figura N° 8 un gran porcentaje de abogados usaría a la probabilidad reveladora; es decir, el grado de probabilidad usado en investigación preparatoria, este dato es consecuencia justamente del mal uso del requerimiento de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público; ya que, es precisamente en esta etapa en la que se suele solicitar esta medida de coerción, y dado que, la investigación se encuentra en sospecha reveladora, no existe una proporcionalidad entre el requerimiento solicitado y la etapa procesal en la cual se encuentra la investigación; ya que, la probabilidad cualificada o especial debe reunir características propias del delito con la finalidad de generar convicción en el juzgador.

Finalmente, corresponde analizar el tercer objetivo específico de la investigación, a través del cual se pretende proponer un Acuerdo Plenario Nacional a fin de unificar criterios respecto a la valoración probatoria y la suficiencia probatoria en la acreditación de la sospecha grave; la figura N° 9, permite analizar lo expresado en el A. P. N° 1-2019/CIJ-116; es decir, la sospecha fuerte; ya que, como se mencionaba anteriormente, corresponde al grupo de las sospechas establecidas jurisprudencialmente; y, está compuesta por la sospecha grave y fundada, tal como la gran mayoría de encuestados precisó.

Respecto a esta pregunta representada en la figura N° 10, algunos encuestados colocaron el porqué de su respuesta, en tal sentido, los jueces que estuvieron de acuerdo manifestaron que hay una exigencia de juicio pleno para emitir sentencia, dado que, se requiere una mayor evidencia para dictar la prisión preventiva, precisando además que la sospecha suficiente implica una alta probabilidad de condena lo cual se verá en el juzgamiento, mientras la sospecha grave o fuerte implica una alta probabilidad de que el imputado sea condenado, es decir, una cuasi certeza; un magistrado que estuvo en desacuerdo manifestó que a su consideración se trata de sospechas iguales. Estos comentarios no hacen sino dar cuenta de la evidente contradicción existente en los órganos jurisdiccionales.

Respecto a la misma pregunta que se aprecia en la figura N° 10, Los fiscales que precisaron el porqué de su respuesta, fueron los que estuvieron de acuerdo, sustentándose tanto en el A. P. N° 1- 1019/CIJ-116 y la Cas. N° 626 – 2013; además, manifestaron que deben existir concretos y suficientes indicios, lo cual cabe, según su opinión, en la definición de sospecha suficiente. Los abogados que decidieron precisar el porqué de su respuesta, fueron los que estuvieron de acuerdo, manifestaron que debido a tratarse de la supresión de un derecho fundamental debe basarse en una alta probabilidad de que el imputado sea condenado, precisando además, según su apreciación, que la sospecha suficiente está por debajo de todos los graves y fundados elementos de convicción.

La figura N° 10 es un resultado que se esperaba en el momento de plantear el instrumento, básicamente se debe a una errónea interpretación de lo establecido en la S. P. C. N° 1-2017/CIJ-433, que define los grados de sospecha clasificándolos con la etapa procesal que les corresponden, pero, en vista de que la sospecha grave pertenece al grupo de sospecha vinculado a las medidas de coerción, se colocó al final, lo cual no define a la sospecha grave como un nivel de convicción mayor al de la sospecha suficiente, sino que simplemente, siguiendo lo establecido por el CPP en su Art. 268 Inc. 1, hace referencia a los elementos de convicción graves y fundados.

La figura N° 10 contradice lo establecido en las Figuras N° 4, 5 y 6; y, lo afirmado por los magistrados en la Figura N° 7; toda vez que, el requerimiento de prisión preventiva, siendo una medida de coerción procesal, pretende el

aseguramiento del imputado en el proceso, siendo sus principales elementos el peligro de fuga y de obstaculización, los cuales deben descartarse para evitar que se ponga en peligro la investigación, en tal sentido, resulta inoportuno que tal medida se aplique con posterioridad a la emisión del auto de enjuiciamiento, dado que, en esa etapa la investigación ya ha concluido, y en todo caso, inutilizaría esta medida de coerción.

Ante la contradicción que invoca la figura N° 10, la pregunta ulterior en la figura N° 11 acota la premisa de la existencia de una confusión terminológica producto de la fundamentación de la S. P. C. N° 1- 2017/CIJ-433; y, el A. P. N° 1-2019/CIJ-116, respecto a la suficiencia probatoria y la sospecha suficiente; la mayoría de encuestados considera que si existe una confusión terminológica, y como se evidencia en el CPP, la suficiencia es una expresión común que se manifiesta en las diversas etapas del proceso penal, mientras la sospecha suficiente es propia de la etapa intermedia; Durrieu (2012) en los trabajos previos internacionales, menciona que la suficiencia probatoria es un nivel de convicción que pretende alcanzar un estándar de prueba.

La figura N° 12 permite tener una visión más amplia del párrafo precedente; ya que, mientras en la figura N° 10 se establece un límite superior al analizar la sospecha fuerte, esta figura pretende establecer un límite inferior, en tal sentido la mayoría de los encuestados está de acuerdo que sustentar la prisión preventiva cuando la investigación está en grado de sospecha reveladora contradice los criterios de sospecha grave y/o fuerte; lo que se entiende de esta figura, es que tal como lo menciona el CPP ambos niveles de convicción son distintos, lo cual se condice con lo señalado por Fernández (2017) en los trabajos previos locales, que asegura que, se está usando la prisión preventiva como regla en todo proceso iniciado lo cual la convierte en una pena adelantada.

Respecto a lo representado en la figura N° 13, algunos encuestados consideraron necesario colocar el porqué de su respuesta, en mérito de ello, los jueces que estuvieron de acuerdo, manifestaron que es necesario aclarar terminologías, a fin de unificar términos que han sido usados en diversos plenos y que provocan confusión en el juzgador, un juez acertadamente manifiesta que si la sospecha suficiente es un nivel de convicción menor, entonces no guarda

coherencia lógica que se sustente un requerimiento de prisión preventiva con un grado de convicción mayor; por lo tanto, corresponde identificar un criterio claro de valoración de cara al tipo penal de lavado de activos.

Otra opinión, respecto a la Figura N° 13, la tuvieron los jueces que no estuvieron de acuerdo, manifestaron su preocupación de que nuevos acuerdos plenarios unifiquen criterios pro- delincuentes de cuello blanco y pseudo empresarios, esto se comprende desde un punto de vista histórico, toda vez que muchas pretensiones normativas se han concebido desde las fauces de organizaciones criminales, que como ya anteriormente se decía, pretenden obtener impunidad; sin embargo, no es esa la pretensión de la presente investigación, todo lo contrario, la pretensión principal es evitar la impugnación de las resoluciones que declaren fundada la prisión preventiva sustentándola en fuertes criterios que gocen de concreción lógica.

Respecto a la Figura N° 13, los fiscales que estuvieron a favor del Acuerdo Plenario, manifestaron que hace falta un estándar probatorio para medir el grado de suficiencia de las pruebas, de manera que se comprenda lo que significa la sospecha grave y pueda ser estandarizada; por su parte, los fiscales que no estuvieron de acuerdo precisaron que cada caso es particularmente distinto; por lo tanto, desde su punto de vista, no cabe la unificación de criterios, además, según su opinión, no podría plantearse un acuerdo plenario por cada delito, ya que el juez deberá valorar los elementos de convicción determinando si existe la sospecha fuerte; además manifiesta, que en la actualidad no existen suficientes pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales respecto a estos criterios.

Con respecto a la figura N° 13, los abogados que estuvieron de acuerdo, manifestaron que hay variedad de plenarios y sentencias que se contradicen entre sí, por lo cual, la sospecha grave viene interpretándose de manera diferente; adicionalmente, se precisa que no existe suficiencia probatoria en la investigación preliminar ya que no se estarían valorando pruebas sino indicios; por su parte, los que estuvieron en contra manifestaron que el A. P. N° 1 – 2019/ CIJ-116 establece principios de sospecha, los cuales, a su parecer, olvidan el criterio constitucional.

Consecuentemente, al haberse evidenciado las contradicciones en los criterios de valoración de los elementos de convicción relativos a la sospecha grave, así como en la suficiencia probatoria y los grados de sospecha, la figura N° 13 hace evidente la necesidad de realizar un Acuerdo Plenario Nacional a fin de unificar los criterios de valoración probatoria en la acreditación de la sospecha grave, en consecuencia, el 59.6% de los encuestados están de acuerdo y el 30.3% están totalmente de acuerdo, respaldando los fundamentos que se han venido sustentando en esta investigación.

Finalmente, se colige que la hipótesis que fuera emitida en esta tesis ha sido debidamente corroborada por el tesista; por cuanto, la figura N° 8 conforme se ha apreciado de los resultados obtenidos, el 58.59% ha considerado que la probabilidad cualificada es el criterio de valoración probatoria que ha de aplicarse a la sospecha grave en el delito de L. A.; por lo que, corresponde realizar un Acuerdo Plenario Nacional, el cual se ha de desarrollar en la parte pertinente de esta tesis.

VI. CONCLUSIONES

1. La valoración probatoria de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos, dentro de los parámetros de valoración probatoria, se determina en un criterio de valoración lógica, basado en probabilidades; dado que, en el momento de interponer el requerimiento, solamente se considera la gravedad de los elementos de convicción, y el debate por parte de la defensa debe estar orientado a negar dicha gravedad; la fortaleza en la convicción, o sospecha fuerte, es el producto de la valoración judicial, cuyo enfoque deberá anteponer la lógica a las máximas de la experiencia, caso contrario la valoración carecería de una motivación suficiente.
2. El análisis del requerimiento de prisión preventiva en el delito de lavado de activos involucra cuatro características, las cuales permiten establecer el criterio de valoración lógica sobre los elementos de convicción; estas características comunes son: el incremento patrimonial, las operaciones financieras sospechosas, la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado y la carencia de actividad económica lícita; las que, siendo analizadas individualmente, formarán convicción en el juzgador respecto al requerimiento fiscal, estableciendo así que la sospecha grave propuesta se ha constituido en sospecha fuerte, y de esta manera diferenciar la convicción necesaria para las demás etapas del proceso penal.
3. La valoración lógica de los elementos de convicción respecto al incremento patrimonial, fijará la investigación en sospecha grave cuando, habiendo sido formalizada la investigación preparatoria, se realice corroboración tanto de los testimonios como de las colaboraciones eficaces, de ser el caso; si se trata de pruebas indiciarias, será de aplicación lo expuesto en la jurisprudencia que invoca la presencia de variedad de indicios que demuestren un mismo hecho jurídico, o un indicio de alto poder acreditativo; el uso de la lógica, se sustenta en la demostración que el incremento patrimonial no responde a actividades lícitas, siendo los aportes materiales eficaces para determinar el dolo o dolo eventual en la realización del supuesto típico del delito.

4. La valoración lógica de los elementos de convicción respecto a las operaciones financieras sospechosas, detecta la sospecha grave cuando, habiéndose formalizado la investigación preparatoria, existan transacciones a sujetos imputados de otros delitos; las que, estarán sustentadas en documentos formales, pronunciamientos técnicos de entidades financieras, o en informes de inteligencia de las entidades autorizadas tales como la SBS, SUNAT, y especialmente UIF; el uso de la lógica, se sustenta en que la operación financiera sospechosa queda altamente relacionada al lavado de activos cuando las transacciones evidencian un vínculo a la actividad delictiva previa, usando al imputado para reingresar el dinero ilícito a la economía.
5. La valoración lógica de los elementos de convicción respecto a la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado, fijará la investigación en sospecha grave cuando, el imputado del delito conminado a demostrar su patrimonio, en un supuesto de carga inversa de la prueba, no cumpla con acreditar la totalidad de sus ingresos, o acreditándola, la razón manifestada es insuficiente para justificarlos. Para ello, el vínculo con el delito previo debe ser tan fuerte, que este delito debe encontrarse en investigación preparatoria, aunado a la detección por parte de la inteligencia financiera de un incremento patrimonial injustificado; para esta característica, se descarta la sola sustentación de manera indiciaria del origen ilícito.
6. La valoración lógica de los elementos de convicción respecto a la carencia de actividad económica lícita, fija la investigación en sospecha grave cuando, después de un trámite procesal que incluye la declaración injustificada del imputado en relación a sus ingresos y su incapacidad de justificar materialmente su declaración; formalizada la investigación preparatoria, se solicite un informe de inteligencia financiera que recabe detalles crediticios, y mediante estos, se acredite indubitavelmente la existencia de actividades sospechosas; por ser un criterio acumulado, y refiriéndose a la realización de una actividad económica ilícita, el vínculo con las operaciones financieras sospechosas dan cuenta en sí mismas de la existencia de un origen ilícito.

7. La probabilidad cualificada es el criterio de mayor relevancia en el análisis lógico del nivel de convicción necesario para acreditar la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos, ordinalmente está en una escala superior a la convicción de la sospecha reveladora, y en una escala inferior a la sospecha suficiente; es cualificada, porque reúne en sí misma el análisis lógico de las características del delito de lavado de activos, y a partir de éstas, genera criterios de valoración probatoria razonables que puedan aplicarse de forma estandarizada permitiendo la obtención de la probabilidad fuerte o vehemente; razonamiento que se asemeja, aunque a menor escala, a la evaluación de certeza en el juzgamiento.
8. Ha quedado evidenciada en esta investigación que existe una confusión terminológica en la jurisprudencia respecto a los criterios de valoración probatoria y la suficiencia probatoria, los cuales afectan la valoración y acreditación de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos, haciendo necesaria la unificación de criterios a través de un Acuerdo Plenario Nacional, el cual se anexa a la presente investigación.

VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los legisladores que en el marco de sus potestades promulguen una ley que fortalezca la autonomía del delito de lavado de activos; ya que, como se ha planteado en esta investigación, reprimir al delito de delitos será la verdadera lucha contra la criminalidad organizada en el país, evitando que los capitales que han sido obtenidos de manera ilícita se conviertan en fuentes de financiamiento de inescrupulosos que a través del poder económico y haciendo uso de entramadas corruptelas pretenden aferrarse al poder político, lo cual ha impedido que este país enfrente a sus más grandes enemigos como son la pobreza, la desigualdad y la delincuencia.
2. Se recomienda a los investigadores que profundicen las teorías y conclusiones de esta investigación; existe en nuestro país un uso inapropiado de las medidas de coerción procesal, lo que hace necesario investigar las características propias de cada delito, para a través de ello y mediante un criterio de análisis de valoración probatoria de la probabilidad cualificada, se determine coherentemente la existencia de la sospecha grave; la cual, de acuerdo a las normas procesales, es mayor que la sospecha reveladora e inferior a la sospecha suficiente.
3. Se recomienda a los abogados que hagan uso de medios impugnatorios contra las resoluciones que, careciendo de sospecha fuerte, hayan sido a discrecionalidad identificadas como tal, sin un criterio razonable; en la actualidad, el debate se centra en el peligro procesal, pero también es necesario poner al análisis del magistrado la insuficiencia probatoria.
4. Se recomienda a los estudiantes de derecho que tengan siempre claro que la justicia está por encima del derecho; por ello deben tener pensamiento crítico, la investigación del delito de L. A. puede ser la solución contra la criminalidad organizada; hoy en día, como nunca antes en generaciones anteriores, podemos asegurar que nadie es dueño de la verdad absoluta, y que la

corrupción siempre sale a la luz; los magistrados del desarticulado Colegio Nacional de la Magistratura, los políticos acusados de formar parte de organizaciones criminales, los empresarios acusados de millonarias coimas; son un ejemplo de ello, por creerse dueños de la justicia, han quedado en evidencia y serán sancionados por los graves delitos que han cometido.

5. Finalmente, y siendo coherentes con la propuesta, se recomienda a los magistrados analizar los elementos de convicción, y no solo priorizar los elementos de peligro procesal. Corregir puntualmente la sustentación del requerimiento de prisión preventiva cuando en este se invoca la sospecha fuerte; ya que, pertenece a una etapa posterior al requerimiento, es el magistrado quien se pronuncia respecto a la suficiencia probatoria declarando fundados los elementos de convicción ofrecidos. Se recomienda que, en base a la problemática y discrepancias presentados en esta tesis, se realice un Acuerdo Plenario Nacional para la unificación de criterios, el mismo que es competencia de los jueces de la Corte Suprema de la República.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

_____ PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL

ACUERDO PLENARIO N.º ____ - ____ /CIJ-116

BASE Artículo 116 del Texto Único
LEGAL: Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial

ASUNTO: Criterios para la valoración
probatoria de la Sospecha Grave en
la Prisión Preventiva en el Delito de
Lavado de Activos, Literal a) del
Artículo 268 del Código Procesal
Penal; D. Leg. 1106 modificado por el
D. Leg. 1249. Suficiencia Probatoria.

Lima, uno de julio de dos mil veinte

Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las salas penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en el Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1.º Las salas Permanentes, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa N° _____, de fecha _____, con el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del Sr. Juez _____, realizaron el _____ Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de los Jueces Supremos de lo Penal - _____, que incluyó la participación en los temas objeto de análisis propuestos por la comunidad jurídica, a través del Link de la Página Web del Poder Judicial – abierto al efecto-, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial – en adelante, LOPJ-, a fin de dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal y definir la doctrina legal correspondiente.

2.º El _____ Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de dos mil diecinueve se realizó en tres etapas.

La primera etapa estuvo conformada por dos fases. Primera: la convocatoria a la comunidad jurídica y la selección de los temas del foro de aportes con participación ciudadana para proponer los puntos materia de análisis que necesitan interpretación uniforme y la generación de una doctrina jurisprudencial para garantizar la debida armonización de criterios de los jueces en los procesos jurisdiccionales a su cargo.

Segunda: la selección preliminar de temas alcanzados por la comunidad jurídica, designación de jueces supremos ponentes y fecha de presentación de ponencias respecto a las propuestas temáticas que presentaron los abogados y representantes de instituciones públicas y privadas.

3.º El día _____ de _____, se publicaron en la página web del Poder Judicial los temas seleccionados para el debate identificándose siete mociones: A. Prisión preventiva en el delito de Lavado de Activos, definición y precisiones de los elementos que la configuran. B. Sospecha fuerte como estándar de convicción en

la Prisión Preventiva del delito de Lavado de Activos. C. Aplicación de las medidas de coerción procesal para el delito de Lavado de Activos y uso de la sospecha grave. D. Suficiencia probatoria en el delito de Lavado de Activos. E. Sospecha Suficiente como estándar de convicción. F. El requerimiento de prisión preventiva del delito de Lavado de Activos y estándares de convicción. G. Características comunes del delito de lavado de Activos.

4. ° Han presentado, a través de la página web del Poder Judicial, informes en relación a la Sospecha Grave en la Prisión preventiva en el delito de Lavado de Activos:

1. _____.
2. _____.
3. _____.
4. _____.
5. _____.

5. ° La segunda etapa consistió en el desarrollo de una audiencia pública que se realizó el día _____. Hicieron uso de la palabra, en cuanto a los presupuestos de la Sospecha Grave en la Prisión preventiva en el delito de Lavado de Activos: _____, _____, _____, _____.

6. ° La tercera etapa residió, primero, en la sesión reservada de análisis, debate y deliberación de las ponencias; y, segundo, en la votación y obtención del número conforme de votos necesarios; por lo que, en la fecha, se acordó pronunciar el Acuerdo Plenario que se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las Salas Especializadas de la Corte Suprema de la República a pronunciar resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar y definir criterios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales.

7. ° Han sido ponentes los señores: _____, _____, _____, _____.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. DEFINICIÓN Y ALCANCES DE LA SOSPECHA GRAVE

1. ° La sospecha grave es un presupuesto elemental de la prisión preventiva (Art. 268, literal “c”, del CPP), tal como lo invoca la norma procesal, se sustenta en la existencia de fundados y graves elementos de convicción o razonables sospechas (TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, 10 de noviembre de 1969, caso Stögmüller, Fundamento jurídico 4º; de 28 de marzo de 1990, caso B. contra Austria, parágrafo 42; de 26 de junio de 1991, caso Letellier, parágrafo 35; de 27 de noviembre de 1991, caso Kemmache, parágrafo 45; de 12 de diciembre de 1991, caso Toth, parágrafo 67; de 12 de diciembre de 1991, caso Clooth, parágrafo 36; de 27 de agosto de 1992, caso Tomasi, parágrafo 84; de 26 de enero de 1993, caso W. contra Suiza, parágrafo 30; citado en STC 128/1995, 26 de enero de 1995); es decir, el conjunto de pruebas recabadas en la investigación correlacionadas y de manera conjunta permiten evidenciar razonablemente que existe un delito, de manera que, la existencia de ese delito tenga un vínculo directo con el imputado ya sea por haber cometido el delito directa o indirectamente (autor), o por haber participado directamente en el hecho criminal (partícipe).

2. ° La sospecha grave es un estándar de convicción, que pese a estar mencionada en la norma procesal de forma tácita, pertenece al ámbito de las sospechas jurisprudenciales, siendo citada por primera vez en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1- 2017/CIJ-433, siendo un estándar de convicción que una vez alcanzado por el persecutor del delito permite sustentar la medida de coerción procesal de prisión preventiva, siempre que, existan los elementos del peligro procesal y se deduzca proporcional y razonablemente la necesidad de la aplicación de la medida, ejerciendo en su conjunto lo que se conoce como sospecha razonable, en la cual el nivel de convicción es tal, que cualquier observador puede ser persuadido de que el encausado cometió una infracción (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Chaparro Álvares y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, STC. Del 21 de noviembre de 2007. Fundamento 102 y 103).

3. ° La sospecha grave a partir del Acuerdo Plenario N° 1-2019/CIJ-116, pasó a ser evaluada en un segundo plano; es decir, su análisis dejó de ser relevante, toda vez

que se interpuso como estándar a la sospecha fuerte, lo cual dio lugar a una confusión terminológica; por un lado, la sospecha grave aparecía fuera de los otros niveles de sospecha, eso se debe principalmente a que los otros niveles de sospecha son inherentes del proceso penal, mientras la sospecha grave y la sospecha fuerte pertenecen a las medidas de coerción procesal; por otro lado, la sospecha fuerte terminaba reemplazando a la sospecha grave, toda vez que estaba constituida en la sospecha grave y fundada; y finalmente, dejó de hablarse de sospecha grave y se procedió a hablar de sospecha fuerte; por lo que, cabe hacer precisiones de dichos criterios.

4. ° la oportunidad en la cual se invoca y configura la sospecha grave en el proceso penal es posterior a la etapa de investigación preparatoria, lo cual supone que se ha superado a la sospecha reveladora; es decir, se ha formalizado la investigación preparatoria según lo dispuesto en el Artículo 336 del Código Procesal Penal; en consecuencia, los elementos de convicción recabados le dan mayor solidez al argumento invocado por el Representante del Ministerio Público, permitiendo evidenciar el delito y vincularlo a su autor o partícipe; es por ello que, en ese momento se formula el requerimiento de prisión preventiva, el cual debe ser meticulosamente excepcional, subsidiario, provisional y proporcionado (SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESPAÑOL, STC 128/1995, 26 de junio de 1995, II.3 3er párrafo); ya que, no basta la configuración de sospecha grave, sino que se requiere que a su vez se configuren los elementos del peligro procesal debidamente desarrollados en los Artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal.

5. ° El nivel de convicción en el que se configura la sospecha grave es inferior al de sospecha suficiente invocado en el Artículo 344, en dicho artículo, el fiscal decidirá si formulará acusación siempre que exista base suficiente para ello; por lo tanto, el Estado mediante su representante, debe demostrar que estas sospechas han aumentado para justificar la detención y legitimidad de la medida, y periódicamente revisar su necesidad y legitimidad (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Tibi vs Ecuador 07 de septiembre de 2004, Fundamento 91); es inferior debido a que el requerimiento de prisión preventiva solicitado no necesita la formulación del auto de enjuiciamiento; de ser así, se estaría hablando de una condena preventiva, institución que no existe en el ordenamiento jurídico peruano,

y cuyo efecto deviene en innecesario; ya que, en esa etapa procesal ya ha culminado la investigación.

6. ° Corresponde que la sospecha grave se sustente en características propias de cada delito, los elementos de convicción graves se deducen de acuerdo a un valor probatorio, lo cual no implica que estén sustentados en fórmulas matemáticas o tabulaciones, porque estamos en un sistema de valoración probatoria que hace uso de la sana crítica; la valoración de los elementos de convicción que se realiza en la medida de coerción de la prisión preventiva es similar a la usada en el juzgamiento respecto a las pruebas al fin de alcanzar la certeza (EXP. N° 4780-2017-PHC/TC acumulado al EXP. N° 502 – 2018-PHC/TC); dicho análisis de las características debe ser específico para cada delito, y por lo tanto, la gravedad invocada en el Código Procesal Penal debe definir específicamente es criterio de probabilidad cualificada.

2. NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

7. ° La norma que regula el delito de lavado de activos es el Decreto Legislativo N° 1106, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249, cuyos alcances han sido objeto de interpretación en el Acuerdo Plenario N° 003-2010/CJ-116, y la Sentencia Plenaria Casatoria N° 001-2019/CIJ-433; sus presupuestos típicos regulados en dicha norma invocan a los actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito; también se formulan circunstancias agravantes, y dos conductas adyacentes como lo son la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, y el rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información.

8. ° El contenido típico del delito, sin embargo, no hace precisión a las características de este delito, las cuales, después de un exhaustivo análisis jurisprudencial (Acuerdo Plenario N° 003- 2010/CJ-116, R.N. 4003 – 2011, R.N. 3036-2016, I Pleno Casatorio de 2017 – Tasayco, Jesús: La Probanza del origen ilícito en el delito de lavado de activos y el principio de presunción de inocencia, distrito judicial de Huánuco, Universidad Hermilio Valdizan, 2018, p. 31), se establece que, las cuatro características del delito de lavado de activos son: el

incremento patrimonial, las operaciones financieras sospechosas, la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado, y la carencia de actividad económica lícita.

9. ° A efectos de analizarse los grados de sospecha, tanto para aumentar la convicción que permita avanzar las etapas procesales, como para sustentar las medidas de coerción procesal, corresponde, que dicho análisis se efectúe directamente sobre las características del delito de lavado de activos, en la medida que, de reunirse los criterios de suficiencia probatoria se cumpla con lo dispuesto en la norma procesal, esto es, sospechas fundadas sobre la culpabilidad del sospechoso (SENTENCIA DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN, BVerfGE 19, 342 Wencker – Prisión preventiva)

3. LA PROBABILIDAD CUALIFICADA Y LA MOTIVACIÓN CUALIFICADA

10. ° Para analizar la probabilidad cualificada es fundamental precisar que la prisión preventiva puede solicitarse desde formalizada la investigación preparatoria; es decir, desde que la investigación se encuentra en sospecha reveladora, sin embargo, no es coherente interponer prisión preventiva inmediatamente después o de manera conjunta a la formalización de la investigación preparatoria; ya que, de ser así, el requerimiento de prisión preventiva sustentado en los mismos elementos de convicción no cumpliría con la suficiencia probatoria para determinar la sospecha grave, debido a que no se estarían incluyendo las circunstancias particulares del hecho, careciendo de razonabilidad e indicios suficientes (SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESPAÑOL, STC 3/2012, 13 de enero de 1992, I.3 – 3er párrafo, y II.2 1er párrafo); no obstante, es así como se viene aplicando en la práctica esta medida de coerción procesal.

11. ° Entonces, se requiere que exista un criterio determinante de la sospecha grave, de otra forma, estaría sustentada en la discrecionalidad del juzgador, la cual finalmente, identificará sin mediar mayor análisis, que sí existe sospecha grave, dado que, en la mayoría de los casos, la defensa tiende a no impugnarla ni contradecirla, prefiriendo enfocarse en los aspectos del peligro procesal; sin embargo, ya la jurisprudencia ha establecido la necesidad de una motivación cualificada, que implica una motivación que sustente que se ha cumplido con el

requisito de la existencia de graves y fundados elementos de convicción, así como los demás presupuestos de la prisión preventiva, por lo tanto, para analizar de manera preliminar si los elementos de convicción han configurado sospecha grave, corresponde que el representante del Ministerio Público los examine bajo un criterio de probabilidad cualificada, ello implica que realmente exista una sospecha razonable de la realización de un hecho criminal (EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Campbell y Hartley vs. Reino Unido, sentencia del 30 de agosto de 1990, Serie A Nº 182, págs. 16-17, y 32)., y mucho menos se deberá usar con el fin de obligar a la confesión o testimonio para obtener información (EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Cebotari vs. Moldova, sentencia del 13 de Noviembre de 2007, Fundamento Nº 48)

12. ° Determinar la probabilidad cualificada implica analizar las características o circunstancias particulares del hecho delictivo, tales características formuladas en el fundamento Nº 8 del presente Acuerdo Plenario, permitirán definir la existencia de la sospecha grave en el delito de lavado de activos, al reunir dichos presupuestos se evitarán arbitrariedades en el ámbito del requerimiento de prisión preventiva, y permitirá que el magistrado tenga criterios que le permitan finalmente motivar cualificadamente su fallo, para lo cual, deberá seguir lo previsto en la STC. Nº 003-2019-CSJJ/2do. JIP-EBM, dado que el auto debe estar especialmente motivado.

4. SOSPECHA GRAVE EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

13. ° Para determinar la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos, corresponde analizar el criterio de la probabilidad cualificada, en otras palabras, analizar las características del delito de lavado de activos, dichas características son:

a) Respecto al incremento patrimonial, fijará la investigación en sospecha grave cuando, habiendo sido formalizada la investigación preparatoria, se realice corroboración tanto de los testimonios como de las colaboraciones eficaces, de ser el caso; si se trata de pruebas indiciarias será de aplicación lo expuesto en la jurisprudencia que invoca la presencia de variedad de indicios que demuestren un

mismo hecho jurídico, o un indicio de alto poder acreditativo; el uso de la lógica, se sustenta en la demostración que el incremento patrimonial no responde a actividades lícitas, siendo los aportes materiales eficaces para determinar el dolo o dolo eventual en la realización del supuesto típico del delito; (Véase Resolución N° OCHENTA Y UNO, Exp. 299-2017-36-5001-JR-PE-01, en el caso de la sospecha grave, la existencia de prueba indiciaria en variedad, da cuenta de un alto grado de probabilidad de la realización de un hecho delictivo, tal como son: “i) acta de recepción de documentos presentados por la representante de la empresa Odebrecht, ii) declaración de Jorge Henrique Simoes Barata, iii) declaración de Marcelo Bahía Odebrecht, iv) declaración de Luiz Antonio Mameri, v) declaración de Fernando Migliaccio Da Silva, vi) declaración de Antonieta Ornella Gutierrez Rosati”, a través de los cuales, la investigada Keiko Fujimori habría tenido conocimiento de los ingresos y aportes de dinero realizados a favor de su agrupación política.)

b) Respecto a las operaciones financieras sospechosas, detecta la sospecha grave cuando, habiéndose formalizado la investigación preparatoria, existan transacciones a sujetos imputados de otros delitos; las que estarán sustentadas en documentos formales, pronunciamientos técnicos de entidades financieras, o en informes de inteligencia de las entidades autorizadas tales como la SBS, SUNAT, y especialmente UIF; el uso de la lógica se sustenta en que la operación financiera sospechosa queda altamente relacionada al lavado de activos cuando las transacciones evidencian un vínculo a la actividad delictiva previa usando al imputado para reingresar el dinero mal habido a la economía; en el caso Exp. 0023-2019-9-5002-JR-PE-01 de la Primera Sala Penal de Apelaciones, en los fundamentos de 1ra instancia, da cuenta de que se identifica operaciones financieras sospechosas existiendo activos maculados no reconocidos total o parcialmente por los testigos consignados en los informes de la ONPE, caso en el que es relevante analizar que estas operaciones financieras buscaban ocultar dineros que con una gran probabilidad provenían de delitos contra la administración pública.

c) Respecto a la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado, fijará la investigación en sospecha grave cuando, el imputado del delito conminado

a demostrar su patrimonio, en un supuesto de carga inversa de la prueba, no cumpla con acreditar la totalidad de sus ingresos, o acreditándola, la razón manifestada es insuficiente para justificarlos. Para ello, el vínculo con el delito previo debe ser tan fuerte, que este delito debe encontrarse en investigación preparatoria, aunado a la detección por parte de la inteligencia financiera de un incremento patrimonial injustificado; para esta característica, se descarta la sola sustentación de manera indiciaria del origen ilícito; el tribunal podrá, sin obstáculo alguno, valorar los indicios que resulten suficientemente graves, precisos y coherentes (CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, DH vs. República Checa, Demanda N° 57325/00); en la jurisprudencia nacional, La Resolución N° 2 del Expediente N° 0036-2017-48-5002-JR-PE-03, en su fundamento 2.7, precisa que existieron actos tendientes a que el dinero producto de la corrupción sea ingresado al circuito económico, existiendo declaraciones falsas ante el JNE y la ONPE, para evitar la identificación del origen ilícito, casos en los que Susana Villarán habría tenido dominio del hecho.

d) Respecto a la carencia de actividad económica lícita, fijará la investigación en sospecha grave cuando, después de un trámite procesal que incluye la declaración injustificada del imputado en relación a sus ingresos; así como, su incapacidad de justificar materialmente lo declarado; y, formalizada la investigación preparatoria se solicite un informe de inteligencia financiera a fin de recabar detalles crediticios, y mediante este, se acredite indubitadamente la existencia de actividades sospechosas; por ser un criterio acumulado, y refiriéndose a la realización de una actividad económica ilícita, el vínculo con las operaciones financieras sospechosas dan cuenta en sí mismas de la existencia de un origen ilícito; en la Resolución N° 3 del Exp. 0019-2018-13-5201-JR-PE-03, de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de fecha 27 de abril de 2019, en su fundamento 3.1, queda establecido que la actividad delictiva previa se configura toda vez que Odebrecht operaba como organización criminal; por lo que, las resoluciones emitidas por Pedro Pablo Kuczynski Godard resultarían adecuadas para materializar un acuerdo corrupto de buena pro a la concesionaria IIRSA SUR (tramos 1 y 2) y Traspase Olmos; entre otras operaciones sospechosas que no tendrían una actividad lícita como origen y generadoras de

capitales, configurándose la sospecha grave; habiéndose realizado actos de lavado en las modalidades de transferencia y ocultamiento.

5. LA SOSPECHA GRAVE Y LA SOSPECHA FUERTE

14. ° La sospecha grave como se definió en los fundamentos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6; del presente Acuerdo Plenario, se resume en los elementos de convicción graves presentados en el requerimiento y debatidos en la audiencia de prisión preventiva, corresponde específicamente a las medidas de coerción procesal; es una convicción sometida a análisis del juez de garantías, es por lo tanto, una parte del primer presupuesto elemental del requerimiento de prisión preventiva; siendo su configuración previa al análisis judicial; por lo que, quien asume la responsabilidad del requerimiento es el representante del Ministerio Público; para ello, deberá garantizar que su solicitud cuenta con los indicios suficientes, caso contrario se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, STC. Del 24 de junio de 2005, Fundamento 114).

15. ° La sospecha fuerte es una condición posterior al análisis judicial, ante los elementos de convicción graves sustentados en audiencia y su debida contradicción por parte de la defensa, el juez de garantías construirá a partir de ellos los hechos identificando la suficiencia probatoria de las pruebas que han presentado, con la finalidad de estimar razonablemente la comisión de un delito que a su vez genere un vínculo al imputado como autor o participe del mismo (EXP. N° 102 – 2007 HUAURA – VILLAVICENCIO RIOS, Fresia Sissi; REYES ALVARADO, Víctor Raúl. El Código Procesal Penal en la Jurisprudencia, Ed. Gaceta Jurídica. Lima – Perú. 2008, p. 109). De acuerdo a lo precisado, corresponde que el juez declare fundados los elementos de convicción; es decir, se puede emitir a partir de ellos, una motivación cualificada por la fortaleza de la convicción.

6. DEFINICIÓN DE SUFICIENCIA PROBATORIA O CONVICCIONAL

16.° La suficiencia probatoria o conviccional es una condición reiterada en el Código Procesal Penal, es un presupuesto que indica que se ha cumplido con el estándar

de prueba o de convicción de la etapa o medida, en tal sentido, los artículos en los que se menciona la suficiencia probatoria son:

- a) La presunción de inocencia, invocada en el Artículo II del Título Preliminar, precisa que toda persona imputada es considerada inocente, mientras no se declare mediante sentencia firme y motivada su responsabilidad, necesitando una suficiente actividad probatoria de cargo.
- b) Legalidad de las medidas limitativas de derechos, invocada en el Artículo VI del Título Preliminar, señala que se impondrán estas medidas mediante resolución motivada, siendo sustentadas en suficientes elementos de convicción.
- c) Inimputabilidad del procesado, regulado en el Artículo 75, ante la aplicación de una pericia al imputado el juez considerará que existen indicios suficientes para acreditar la inimputabilidad, dictará resolución incoando el procedimiento de seguridad.
- d) Las Reglas adicionales del Informe Pericial, regulado en el Artículo 180 inc. 3; detalla que cuando el informe pericial resultare insuficiente, se podrá ordenar su ampliación por el mismo perito o nombra otro perito par que se emita uno nuevo.
- e) Los presupuestos de la búsqueda de pruebas y restricción de derechos, regulado en el Artículo 203, las medidas se tomarán de acuerdo al principio de proporcionalidad, y existiendo suficientes elementos de convicción.
- f) La intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles, regulada en el Artículo 230, precisa que el fiscal, ante la existencia de suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y siendo la intervención necesaria para la investigación, podrá solicitarlo al juez de garantías.
- g) Las medidas de coerción procesal, principios y finalidad, regulado en el Artículo 253, inc. 2, señala que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respecto al principio de proporcionalidad y

siempre que, en la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción.

h) Los presupuestos de la internación preventiva, regulado en el Artículo 293 inc. 1 literal a), señala como primer presupuesto la presencia de elementos de convicción suficientes.

i) La suspensión preventiva de derechos, regulada en el Artículo 297 inc. 2 literal a), que refiere que para interponer esta medida es necesario la presencia de suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito, que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

j) El embargo, regulado en el Artículo 303, inc. 3, refiere que se adoptará el embargo cuando existan en autos suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito objeto de imputación.

k) El desalojo preventivo, regulado en el Artículo 311, inc. 1, precisa que en los delitos de usurpación, a solicitud del fiscal o el agraviado, el juez ordenará el desalojo del inmueble ocupado siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado.

l) Medidas preventivas contra las personas jurídicas, regulado en el Artículo 313, Inc. 2 literal a), señalando que para interponer las medidas es necesario contar con suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación de la persona jurídica en los supuestos previstos en el artículo 105 del Código Penal.

m) El sobreseimiento, regulado en el artículo 344 Inc. 2 literal d), señala que el sobreseimiento procede cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no existe elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

n) Sentencia absolutoria, regulada en el artículo 398 Inc. 1, establece que los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad, que subsiste

una duda sobre la misma, o que está probada una causal que lo exime de responsabilidad.

o) Proceso de terminación anticipada, regulado en el artículo 468 inc. 6, sobre las reglas, el juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, de conformidad con lo acordado, son razonables y obran elementos de convicción suficientes.

17. ° De acuerdo a estas precisiones normativas, se puede colegir que la suficiencia probatoria es invocada no de manera exclusiva para una etapa procesal o para una medida en específico, sino que, reiterando lo señalado en el fundamento anterior, la suficiencia da cuenta del cumplimiento de un estándar de prueba necesario, y que en ese sentido, difiere totalmente de la sospecha suficiente.

7. DEFINICIÓN DE LA SOSPECHA SUFICIENTE

18. ° Aclarado el término de suficiencia probatoria, es relevante definir a la sospecha suficiente, con el objeto de evitar la confusión terminológica que se ha generado en el momento de interpretarlos como se evidencia en el párrafo 37 del Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116, donde se refiere que la sospecha suficiente es inferior a la sospecha fuerte, lo cual no guarda ninguna relación a lo dispuesto tanto en la jurisprudencia y la norma procesal, y que finalmente, resulta perjudicial al momento de definir a la sospecha grave, la cual, evidentemente se encuentra en un nivel de convicción inferior al de sospecha suficiente; ya que, se refiere a una medida de coerción procesal cuya interposición puede aplicarse inmediatamente después de formalizada la investigación preparatoria.

19. ° La sospecha suficiente es definida en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1 – 2017/CIJ-433, aparece en el preciso instante en que después de valorar lo sustentado en la Audiencia de Control de Acusación, el juez valorando los elementos de convicción presentados, determina que son fundados, y por lo tanto, acreditan suficientemente la acusación fiscal, emitiendo de esta manera el auto de enjuiciamiento; la sospecha suficiente, es un estado de saneamiento para la ulterior obtención de pruebas fundadas; es decir, que tengan la condición de utilidad, pertinencia y conducencia, para su respectivo análisis en juzgamiento; en resumen,

la sospecha suficiente se configurará si ante el análisis de los elementos de convicción presentados en el requerimiento acusatorio, estos son declarados fundados emitiéndose en consecuencia un auto de enjuiciamiento y concluyendo de esta manera la etapa de probabilidad y entrando en la etapa de búsqueda de certeza que es el juzgamiento.

III. DECISIÓN

49.º En atención a lo expuesto, las salas penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ:

ACORDARON

50.º ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 12, 13, 14 y 15 del presente Acuerdo Plenario.

51.º PRECISAR que los principios jurisprudenciales expuestos que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios y al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico.

52.º DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial, en aras de la afirmación del valor seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley, solo pueden apartarse de las conclusiones de un Acuerdo Plenario cuando se incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas o desestimadas expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la República.

53.º PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano.
HÁGASE saber.

S.s

REFERENCIAS

LIBROS

1. Chero, F. y Quispe, J. (2013) Proceso común y sistema de audiencias en el Nuevo Código Procesal Penal, Editorial Universidad San Martín de Porres, Impreso en el Perú, ISBN N° 978-612-4088-73-5 (Indexado en EBSCOhost)
2. Chiesa, E. (1992) Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Volumen II, Editorial Forum, Impreso en Colombia ISBN N° 958-616-181-1 (Indexado en EBSCOhost)
3. Código Penal, Jurisprudencia Actualizada (2018) – contiene: Decreto Legislativo N° 635, Decreto Legislativo N° 957, Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo N° 1249 - Legales Ediciones, Edición Junio de 2018, ISBN: 9786124321153.
4. Lamas (2017). La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. (1ra Edición). Perú: Instituto el Pacífico S.A.C. ISBN: 9786124328619
5. Martínez de Morentín, L. (2007) “Régimen Jurídico de las Presunciones”, Editorial Dykinson, S.L., Madrid – España. ISBN: 9788498490282 (Indexado en EBSCOhost)
6. Pariona (2017). El delito precedente en el delito de lavado de activos. (1ra Edición). Perú: Instituto Pacífico S.A.C. ISBN: 9786124328800
7. Prado, V. (2013). Criminalidad organizada y lavado de activos. (1ra Edición) Perú: IDEMSA, ISBN: 9786124037702
8. Roxin, C. (1981) “Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal” Universidad de Munich, Editorial Reus. Madrid – España ISBN: 84-290-1264-8

NORMAS LEGALES Y JURISPRUDENCIA

9. Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116. (6 de Noviembre de 2019). El Peruano. Diario Oficial del Bicentenario. N° 1118, XI Pleno Jurisdiccional de las

Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República – Separata Especial p. 2

10. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ – 116. (16 de Noviembre de 2010). El Peruano, Diario Oficial del Bicentenario, p. 8500.
11. Casación N° 626-2013 (27 de febrero de 2016). El Peruano, Diario Oficial del Bicentenario, p. 7398.
12. Expediente N° 04780-2017-PHC/TC acumulado al Exp N ° 00502-2018-PHC/TC (26 de abril de 2018). Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, p. 1 – 42.
13. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. (25 de Octubre de 2017). El Peruano, Diario Oficial del Bicentenario, p. 7920.
14. Resolución Administrativa SBS N° 2660 – 2015. (18 de Mayo de 2015). El Peruano, Diario Oficial del Bicentenario, p. 552736
15. Resolución Administrativa SBS N° 4705 – 2017. (11 de Diciembre de 2017). El Peruano, Diario Oficial del Bicentenario, p. 7

TESIS Y REVISTAS

16. Aguilar, A. (2014). Presumption of Innocence and Public Safety: A Possible Dialogue. Stability: International Journal of Security and Development, 3(1). stabilityjournal.org. (Indexada en EBSCOhost)
17. Arratia, E. (2016). The new hideout of cockroaches? the expansion of the mexican organized crime in the northern triangle of Central America. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 11. ISSN: 1909-3063. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=927/92746462008> (Indexada en SCIELO)
18. Ask, K. (2006). Criminal investigation: Motivation, emotion and cognition in the processing of evidence. Department of Psychology Göteborg University, Sweden. <http://gu.se> (Indexada en EBSCOhost)

19. Aspinwall, M. & Reich, S. (2013). The Paradox of Unilateralism: Institutionalizing Failure In U.S.-Mexican Drug Strategies. Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM, 8. ISSN: 1870-3550. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1937/193730201001> (Indexada en REDALYC)
20. Bravo, R. (2010). La prueba en materia penal. Tesis para obtener el grado de bachiller. Universidad de Cuenca. <http://ucuenca.edu.ec> (Indexada en EBSCOhost)
21. Brown, C. (2015). Investigating and prosecuting cyber crime: Forensic dependencies and barriers to justice. International Journal of Cyber Criminology, Australian Nacional University, Australia. <http://cybercrimejournal.com> (Indexada en EBSCOhost)
22. Buitrago, W. y Téllez, R. (2014). La manipulación de la escena del delito, valoración y exclusión probatoria. Via Inveniendi Et Iudicandi, Vlel Vol. 9, Nº 2, Universidad Santo Tomás, Bogotá, D.C. – Colombia. <http://usantotomas.edu.co> (Indexada en EBSCOhost)
23. Carvalho, J. & Crosara, R. & Jardim, D. (2015). Market Efficiency and Organizational Corruption: Study on the Impact on Shareholder Value. Brazilian Business Review. ISSN: 1808-2386. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1230/123041059001> (Indexada en REDALYC)
24. Castillo, V. (2018) Prueba indiciaria en el delito de lavado de activos en el distrito judicial de Lima Norte, 2016. Tesis para obtener el grado de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad César Vallejo – Perú. <http://181.224.246.201> (ALICIA)
25. Céspedes, M. (2018). La autonomía del delito de lavado de activos y su aplicación en la legislación nacional. Tesis para obtener el título de abogado, Universidad Señor de Sipán – Perú. <http://uss.edu.pe> (ALICIA)

26. Clavijo, C. (2014). Criminal compliance en el derecho penal peruano. Derecho PUCP N° 73 – Pontificia Universidad Católica del Perú – Perú. <http://redalyc.org> (REDALYC)
27. Condori, E. y Zapana, L. (2018). Inclusión de las reglas de la exclusión de la prueba ilícita y las excepciones a la regla en el Proceso Penal Peruano para una eficacia probatoria en tiempos de criminalidad organizada y corrupción. Tesis para optar por el título de abogado, Universidad Nacional del Altiplano – Perú. <http://unap.edu.pe> (ALICIA)
28. Contreras, C. (2015). La valoración de la prueba de interrogatorio. Marcial Pons. Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo. <http://marcialpons.es> (Repositorio Marcial Pons)
29. Curi, M. (2018) La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. Tesis de grado para optar por el título profesional de abogado, Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” – Perú. <http://repositorio.undac.edu.pe> (ALICIA)
30. De Jong, F. & Van Lent, L. (2016). The presumption of innocence as a counterfactual principle. Utrecht L. Rev., 12, 32. <http://UU.NL> (Indexada en EBSCOhost)
31. De Fragoso, N. (2018). International development strategies for the XXIst century and post-modern patrimonialism in Africa – Angola and Mozambique. Revista Brasileira de Política Internacional, 61. ISSN: 0034-7329. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358/35860342015> (Indexada en REDALYC)
32. De Souza, R. & Ferreira, M. (2019). Violence and Justice in UNASUR’s Institutional History. From the Early Optimism to the Fragile Cooperation Combating Criminality. (55), ISSN: 0121-5167. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=164/16460717005> (Indexada en REDALYC)

33. Durrieu, R. (2012). Rethinking Money Laundering Offences: A Global Comparative Analysis. Thesis for the degree of Doctor, en la University of Oxford – United Kingdom. <http://ox.ac.uk> (Indexada en EBSCOhost)
34. Fernández, W. (2017). La vulneración al derecho a la libertad personal por aplicación abusiva de la prisión preventiva: Chota 2015 – 2016. Tesis para optar por el Grado Académico de Maestro en Derecho con Mención en Constitucional y Gobernabilidad, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. <https://alicia.concytec.gob.pe/> (Indexado en ALICIA)
35. Figueroa, I. (2015). El principio de imputación necesaria y el control de la formalización de la investigación preparatoria en el proceso penal peruano. Tesis para optar por el Título Profesional de Abogado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Perú. <http://unasam.edu.pe> (indexado en ALICIA)
36. Garry, S. & Zapata, W. & Moreno, J. (2016). Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico. Economía: Teoría y práctica. ISSN: 0188-3380. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2811/281145721002> (Indexada en SCIELO)
37. González, D. (2015). Presunción de inocencia, verdad y objetividad. La Argumentación en Materia de Hecho. Universidad de Alicante. <http://ua.es> (Indexada en EBSCOhost)
38. Guillen, L. (2017). La investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015; (Tesis por el Grado de Magister en Ciencia Política y Gobierno con Mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú). <http://pucp.edu.pe> (ALICIA)
39. Haigner, S.D., Schneider, F. and Wakolbinger, F. (2012). "Combating money laundering and the financing of terrorism: A survey". Economics of Security Working Paper 65, Berlin: Economics of Security. University of Linz. <http://econstor.eu> (Indexada en EBSCOhost)

40. Hedstrom, J. (2018). The American and Swedish Criminal Justice System: A Comparative Study. <http://etsu.edu> (Indexada en EBSCOhost)
41. Heras, L. (2018). La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero. IUS: Revista de investigación de la Facultad de Derecho, Volumen 8 N° 14. – Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Perú. <http://usat.edu.pe> (Indexado en VLEX)
42. Hsieh, K. (2011). Exclusionary rule of evidence in the United Kingdom, United States and China. Thesis submitted for the degree of PhD, University of Edinburgh. <http://ed.ac.uk> (Indexada en EBSCOhost)
43. Jimeno, M. (2012). American Criminal Procedure in a European Context. Cardozo Journal of International and Comparative Law, (Issue 2), 409. <http://cornell.edu> (Indexada en EBSCOhost)
44. Kangur, A. (2015). Can rules of criminal evidence be devised that would be uniform across jurisdictions? (Doctoral dissertation, University of Glasgow). <http://gla.ac.uk> (Indexada en EBSCOhost)
45. Lafolla, V. (2015). Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy in Canada: Origins, Implementation, and Enforcement; (Thesis submitted for the degree of Doctor, University of Toronto – Canadá). (Acceso el 15 de setiembre de 2019). <http://econstor.eu> (Indexada en EBSCOhost).
46. Marzec, T. (2018). Instytucja plea bargainingu–w amerykańskim postępowaniu karnym–między ekonomią a sprawiedliwością. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. (english version). <https://www.law.umk.pl/panel/wp-content/uploads/summary-Tymoteusz-Marzec.pdf> (Indexada en EBSCOhost)
47. Maurer, F. (2017). “Release from Pre-Trial Detention in Theory and Practice in Modern International Criminal Justice in the Light of International and European Human Rights Standards”. Tesis de Doctorado der

48. Mejía, M. (2017). El derecho internacional de los derechos humanos, un nuevo concepto. *International Human Right Law*, a new concept. En *Justicia*, 32, 38 – 63. <https://doi.org/10.17081/just.23.32.2904> (Indexada en SCIELO)
49. Mendoza, F. (2017). El tipo base del delito de lavado de activos en el Perú (Arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106): (apuntes desde el derecho penal español). Tesis para obtener el grado de Doctor, Universidad de Salamanca – España. <http://usal.es> (Indexada en EBSCOhost)
50. Meza, W. (2019). La prueba como garantía mínima para el debido proceso en delitos de lavado de activos-distrito judicial Lima-2018. Tesis para obtener el grado de abogado, Universidad de San Andrés – Perú. <http://usan.edu.pe> (Repositorio USAN)
51. Naheem, M. (2017). Trade based money laundering: exploring the implications for international Banks. Thesis for the degree of Doctor, en la University of Wolverhampton – United Kingdom. <http://openrepository.com> (Indexada en EBSCOhost)
52. Nandayapa, C. y Ramírez, B. (2009). Introducción a la prueba en el nuevo proceso penal acusatorio. UBIJUS. Azcapotzalco, México D.F. <http://cleu.edu.mx> (Repositorio CLEU)
53. Nieto, D. (2012). Neoliberalism, Biopolitics, and the Governance of Transnational Crime. *Colombia Internacional*. ISSN: 0121-5612. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=812/81224569006> (Indexada en SCIELO)
54. Peña, M. (2017). Debido proceso y autonomía del delito de lavado de activos en el Decreto Legislativo N° 1249 en las sentencias de los jueces del Poder Judicial. Tesis para obtener el grado de Maestro en Derecho

Penal, Universidad Privada Norbert Wiener – Perú. <http://uwiener.edu.pe>
(Indexada en ALICIA)

55. Pérez, M. (2000). La Prueba Provocada como Supuesto de Prueba Prohibida desde el Proceso Penal Alemán y Español: Propuestas y Desafíos al Modelo del Proceso Penal Peruano y Latinoamericano. *Derecho & Sociedad*, (14), 103-130). <http://pucp.edu.pe> (ALICIA)
56. Pisfil, D. (2014). La Prueba Indiciaria y su relevancia en el Proceso Penal. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal* vol. 5(1) ISSN: 2072-7976, Pontificia Universidad Católica del Perú – Perú. <http://pucp.edu.pe>
(Indexada en EBSCOhost)
57. Rivas, C. (2018) El delito de lavado de activos en el ámbito empresarial peruano; tesis para obtener el título de abogado, en la Universidad Señor de Sipán – Pimentel, Perú. <http://uss.edu.pe> (Repositorio USS)
58. Rodriguez, J. (2018). La inconstitucionalidad de la No necesidad de condena del delito fuente para sancionar a procesados por lavado de activos. Tesis para obtener el título de abogado, en la Universidad Continental – Huancayo, Perú. <http://continental.edu.pe> (Indexado en ALICIA)
59. Salas, E. (2018) La naturaleza jurídica de la prueba preconstituida en el Código Procesal Penal de 2004. Tesis para optar por el grado académico de Magister en Derecho Penal. Pontificia Universidad Católica del Perú – Perú. <http://pucp.edu.pe> (ALICIA)
60. Sánchez, C. (2018). La aplicación de la atenuación facultativa de pena del Art. 13.2 del Código Penal a la responsabilidad penal por lavado de activos del compliance officer. Tesis para obtener el título de abogado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Perú. <http://core.ac.uk> (ALICIA)
61. Santa Cruz, J. (2018). Propuesta de un proyecto de ley en la implementación de reglas de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos para proteger las garantías procesales del imputado; (Tesis para

obtener el grado de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad Señor de Sipán - Perú). <http://uss.edu.pe> (ALICIA)

62. Schwartz, V. (2007). Comparing us and french models of criminal pre-trial investigation. Thesis for the degree of Master of the Science of Law, Stanford Law School, United States of America. <http://stanford.edu> (Repositorio Stanford)
63. Shanmugam, K. (2011). Validating digital forensic evidence (Thesis of degree of Doctor of Philosophy, Brunel University School of Engineering and Design PhD Theses). <http://brunel.ac.uk> (Indexada en EBSCOhost)
64. Shapovalov, M. (2015). History, current state and prospects of development of international financial law. Revista de Derecho, ISSN: 0121-8697. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=851/85138494012> (Indexada en REDALYC)
65. Soares, L. (2001). On insecurity as a public issue. Civitas - Revista de Ciências Sociais, 1. ISSN: 1519-6089. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=742/74210204> (Indexada en REDALYC)
66. Soriano, J (2019). High expectations. Interregional agendas on global security challenges: East Asia, Europe and Latin America. Revista Brasileira de Política Internacional, 62. ISSN: 0034-7329. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358/35860327006> (Indexada en SCIELO)
67. Talavera, P. (2009). La Prueba en el Nuevo Proceso Penal: Manual del Derecho Probatorio y de la valorización de las pruebas en el Proceso Penal Común. Academia de la Magistratura, Lima – Perú ISBN: 978-9972-854-53-8. <http://amag.edu.pe> (Academia de la Magistratura)
68. Tasayco, J. (2018) La probanza del origen ilícito en el delito de lavado de activos y el principio de presunción de inocencia, distrito judicial de Huánuco. Tesis para optar por el grado de Maestro en Derecho en

- mención en Ciencias Penales, Universidad Nacional Hermilio Valdizan – Perú. <http://repositorio.unheval.edu.pe> (Indexado en ALICIA)
69. Terra de Oliveira, W. (2017). Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid – España). <http://utoronto.ca> (Indexada en EBSCOhost).
70. Tourinho, M. (2018). Brazil in the global anticorruption regime. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 61. ISSN: 0034-7329. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358/35860342004> (Indexada en SCIELO)
71. Ungar, M. (2016). Networks of Criminality: The State and Crime Policy in Contemporary Democracy. *Desafíos*, 28. ISSN: 0124-4035. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3596/359646673008> (Indexada en SCIELO)
72. Zorzoli, O. (2009). Teoría general del proceso. Naturaleza procesal de las pruebas anticipadas. Perú. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, Pontificia Universidad Católica del Perú – Perú. <http://pucp.edu.pe> (Indexada en EBSCOhost)
73. Zúñiga, P. (2019). Nuevos estándares en la motivación de la prisión preventiva, según el Tribunal Constitucional, sus efectos en la administración de justicia. Tesis para optar por el grado académico de Maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – Perú. <http://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/UNSAAC/4654> (Indexado en ALICIA)

PÁGINAS WEB

74. Bergsmo, M. (2017) *Abbreviated Criminal Procedures for Core International Crimes*. Brussels, Belgium: Torkel Opsahl Academic EPublisher. <http://www.toaep.org/ps-pdf/9-bergsmo>

75. León, J. (2017). Criterios estándar de los órganos jurisdiccionales respecto a la autonomía del delito de lavado de activos – Chiclayo 2017. <http://asociacion-iurismundi.blogspot.com/2018/01/autonomia-del-delito-de-lavado-de.html>
76. McEwen, T. (2011). The role and impact of forensic evidence in the criminal justice system, final report. Washington, DC: National Institute of Justice. <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=258480>
77. Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (2014) Informe de Inteligencia Financiera, Formato “A” – Informe DOMESTICA, Exposición CEFI. https://www.mpf.n.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2785_informe_domestica_cefi.pdf
78. Moreno J, (2018). La variación de “sospecha suficiente” a “sospecha grave” como estándar requerido en la imposición de la prisión preventiva; Legis, pasión por el derecho, <https://lpderecho.pe/sospecha-suficiente-sospecha-grave-estandar-prision-preventiva/>

LINKOGRAFÍA

79. Telefónica negó registros de llamadas en el caso Keiko (20 de enero de 2019), La República, <https://larepublica.pe/politica/1397948-telefonica-nego-registros-llamadas-caso-keiko/>

ANEXOS

ANEXO Nº 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VA R.	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
VARIABLE INDEPENDIENTE VALORACIÓN PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL	Buitrago (2014) “Por valoración probatoria debe entenderse el ejercicio científico e intelectual realizado por el juez, en el cual, cada una de las pruebas aportadas dentro del proceso de manera sistemática, lógica y ordenada, con el fin de reproducir los hechos que dieron origen a la conducta y determinar si esta es punible o no.” (p. 79)	La valoración probatoria resulta ser un criterio meramente discrecional del juzgador; por ello, es deber del acusador poner a su alcance la información de manera sistemática, lógica y ordenada, las pruebas, por tanto, que llegaron como meros indicios se han convertido en información relevante y posteriormente suficiente para acreditar un hecho delictivo.	Doctrina	Nacional Extranjera	Ordinal
	Contreras (2015) sobre la prueba precisa que “(...) es menester señalar cuál es el sentido que debe darse a cada una de las acepciones indicadas. De este modo, deberá entenderse por medios a las modalidades, vehículos o formas en que se introducen al proceso las diferentes fuentes de prueba, en tanto elementos en favor de una determinada hipótesis de los hechos (documental, pericial, etc.); por procedimiento o actividad probatoria a la realizada tanto por las partes como por el tribunal para comprobar o adquirir la convicción de la veracidad de las afirmaciones de hecho, o bien, a las fases o etapas del juicio donde se realizan actos vinculados a la prueba (proposición, práctica, valoración); y por resultado, a la conclusión que se obtiene sobre los hechos, que puede ser el éxito o el fracaso en la acreditación de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes.” (p. 31)	La prueba contiene adicionalmente diversas acepciones relativas a esta, las cuales permiten comprender en un ámbito más profundo la obtención de información de un hecho delictivo, así se considerará que existen: medios de prueba, actividad probatoria, y finalmente, la acreditación de los hechos que determinará si son suficientes para demostrar responsabilidad penal en trámite del Proceso.	Legislación Operadores Jurídicos	Constitución Política Peruana Código Penal Código Procesal Penal Jueces Penales Fiscales Abogados	

VAR.	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
VARIABLE DEPENDIENTE SOSPECHA GRAVE EN LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS	<p>Heras (2018) manifiesta en análisis a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 que “Para iniciar diligencias preliminares solo se exige elementos de convicción que sostengan una "sospecha inicial simple", para formalizar la investigación preparatoria se necesita "sospecha reveladora", para acusar y dictar auto de enjuiciamiento se precisa "sospecha suficiente", y para proferir auto de prisión preventiva se demanda "sospecha grave" (la sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia). La sentencia condenatoria requiere elementos de prueba más allá de toda duda razonable.” (p. 72)</p>	<p>La fuente jurisprudencial que refiere los grados de sospecha es justamente la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, pero tiene una gran falencia, y esto es que no precisa los criterios de valoración probatoria que darán lugar a la acreditación suficiente del delito; la sospecha grave es uno de estos grados de sospecha, siendo este, el que más ha levantado suspicacias doctrinales.</p>	<p>Doctrina</p> <p>Operadores Jurídicos</p> <p>Jurisprudencia</p> <p>Normas Jurídicas</p>	<p>Nacional Extranjera</p> <p>Jueces Penales Fiscales Abogados</p> <p>Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/Cij-433 Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116</p> <p>Código Procesal Penal</p>	Ordinal
	<p>Clavijo (2014) refiere que “(...) se promulgó el decreto legislativo 1106 (...). Esta norma tipifica diferentes delitos como los actos de conversión y transferencia (Artículo 1); actos de ocultamiento y tenencia (Artículo 2); actos de transporte o traslado de dinero o títulos valores (Artículo 3). Asimismo, tipifica el delito de omisión de la comunicación de operaciones o transacciones sospechosas (Artículo 5); delito de rehusamiento, retardo o falsedad en el suministro de información (Artículo 6). (...) consecuencias accesorias para personas jurídicas (Artículo 8) y el decomiso de los activos involucrados (Artículo 9).” (p. 636)</p>	<p>Para el delito de lavado de activos han previsto diversos verbos rectores que tendrían un mayor alcance de las conductas delictivas, tal es así, que se han considerado diversos tipos de actos ilícitos que involucran incluso la omisión de parte de quienes están obligados a entregar información. Las etapas de investigación están directamente relacionadas con el grado de sospecha en el delito de lavado de activos, por lo tanto, la investigación preliminar como primera etapa de este delito se aperturará con la existencia de sospechas siendo una de ella el desbalance patrimonial.</p>	<p>Jurisprudencia</p> <p>Normas Jurídicas</p> <p>Operadores Jurídicos</p> <p>Doctrina</p>	<p>Expedientes Judiciales Corte Suprema Res. Adm. 2660 – 2015- SBS</p> <p>Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo N° 1249 Ley N° 27693 Ley N° 29038</p> <p>Jueces Penales Fiscales Abogados</p> <p>Nacional Extranjera</p>	



ANEXO Nº 2
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ANEXO 1-A
CUESTIONARIO

“Criterio de valoración probatoria de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos”

Instrucciones: Se le solicita que conteste el siguiente cuestionario en forma **anónima** y con honestidad para el desarrollo de la investigación; asimismo, se agradece su colaboración.

Condición:

JUEZ PENAL ☐

FISCAL ☐

ABOGADO ☐

1. Al valorar probatoriamente los indicios en el delito de lavado de activos, ¿Qué método consideraría más oportuno para determinar la responsabilidad penal?

- a) Ningún indicio debe valorarse.
- b) Las máximas de la experiencia.
- c) El conocimiento científico.
- d) La lógica.

2. ¿Qué grado de sospecha considera usted que se somete a valoración probatoria cuando se evalúa la medida de coerción procesal más gravosa en el lavado de activos?

- a) Sospecha suficiente.
- b) Sospecha inicial simple.
- c) Sospecha reveladora.
- d) Sospecha grave.

3. ¿Qué criterio de valoración probatoria cree usted que se puede considerar sospecha grave en relación al incremento patrimonial en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

- a) Medios probatorios saneados en Etapa Intermedia.
- b) Notitia Criminis y un Informe de UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
- c) La alternativa b) y declaraciones, que permitan identificar al presunto imputado.
- d) La alternativa c) y colaboradores eficaces con corroboración material.

4. ¿Qué criterio de valoración probatoria cree usted que se considera sospecha grave en relación a las operaciones financieras sospechosas en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

- a) Medios probatorios saneados en Etapa Intermedia.
- b) Notitia Criminis e Informe de UIF.
- c) La alternativa b) y transacciones a sujetos imputados de otros delitos.
- d) Colaboradores eficaces y corroboración material.

5. ¿Qué criterio de valoración probatoria desde su perspectiva se considera sospecha grave respecto a la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

- a) Medios probatorios respecto al delito previo saneados en Etapa Intermedia.
- b) Notitia criminis e investigación del delito previo.
- c) Investigación preparatoria del delito previo e incremento patrimonial injustificado.
- d) Alternativa c) y corroboración material.

Dr. Félix Chero Medina
ABOGADO
ICAL 1742

6. Según Usted, ¿Qué criterio de valoración probatoria en relación a la carencia de la actividad económica lícita se considera sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

- a) Medios probatorios saneados en Etapa Intermedia.
- b) Declaración injustificada de ingresos por el imputado.
- c) Carencia de aporte material sobre ingresos.
- d) Alternativas b) y c), y actividades sospechosas en informe UIF.

7. ¿Qué criterio usaría Ud. para la valoración lógica de los elementos de convicción en nivel de sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

- a) Probabilidad suficiente (prueba saneada)
- b) Probabilidad simple (Notitia criminis).
- c) Probabilidad reveladora (Ejm: Informes y testimonios).
- d) Probabilidad especial o cualificada (Ejm: testimonio y corroboración).

8. ¿Cómo considera Ud. que se define a la sospecha fuerte cuando se analiza la medida de coerción procesal más gravosa en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

- a) Sospecha suficiente y fundada.
- b) Sospecha inicial simple y fundada.
- c) Sospecha reveladora y fundada.
- d) Sospecha grave y fundada.

9. ¿Cree Usted que la sospecha grave y/o la sospecha fuerte están por encima del nivel de convicción de sospecha suficiente en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

- a) Totalmente en desacuerdo b) En desacuerdo c) De acuerdo d) Totalmente de acuerdo

- Si considera necesario, explique brevemente el porqué de su respuesta:

10. Respecto a la pregunta anterior, ¿Considera Usted que el Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 confunden los términos "suficiencia probatoria" con "sospecha suficiente"?

- a) Totalmente en desacuerdo b) En desacuerdo c) De acuerdo d) Totalmente de acuerdo

11. ¿Cree Usted que sustentar la prisión preventiva cuando la investigación está en un grado de sospecha reveladora contradice los criterios de sospecha grave y/o fuerte?

- a) Totalmente en desacuerdo b) En desacuerdo c) De acuerdo d) Totalmente de acuerdo

12. ¿Considera pertinente realizar un Acuerdo Plenario Nacional a fin de unificar criterios de valoración probatoria en la acreditación de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos?

- a) Totalmente en desacuerdo b) En desacuerdo c) De acuerdo d) Totalmente de acuerdo

- Si considera necesario, explique brevemente el porqué de su respuesta:

Dr. Félix Chero Medina
ABOGADO
ICAL 1742

ANEXO N° 3

CONSTANCIA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

OBJETIVO

Determinar la Fiabilidad de consistencia interna del instrumento que valora el "Criterio de valoración probatoria de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos" mediante la fórmula de Alfa ordinal.

POBLACIÓN

La población estuvo determinada por Jueces Penales, Fiscales, y Abogados de la provincia de Chiclayo.

MUESTRA PILOTO

Se seleccionaron 99 profesionales Juez, abogado y docente de la provincia de Chiclayo para evaluarlos. Magistrados y profesión Encuestados.

Tabla 1: Tipificación de la función laboral que realizan los profesionales del derecho encuestados.

CONDICIÓN	ENCUESTADOS
JUEZ PENAL	14
FISCAL	25
ABOGADO	60
TOTAL	99

Fuente: Investigación propia

Msc 
LIC. JUAN MANUEL ANTON PEREZ
COESPE 12
COLEGIO DE ESTADÍSTICOS DEL PERÚ

FÓRMULA ESTADÍSTICA DEL ALFA ORDINAL

El Alfa ordinal se utiliza para hallar la confiabilidad de consistencia interna de instrumentos sobre escalas de respuesta Likert, y su fórmula es la siguiente:

Para una escala compuesta por n ítems el coeficiente alpha podría estimarse como:

$$\alpha = \frac{n}{n-1} \left[\frac{n(\bar{\lambda})^2 - \bar{\lambda}^2}{n(\bar{\lambda})^2 + (u^2)} \right] \quad (1)$$

Donde n es el número de ítems.

$\bar{\lambda}$ es la media aritmética de los pesos factoriales.

$\bar{\lambda}^2$ es la media aritmética de los cuadrados de los n pesos factoriales.

u^2 es la media aritmética de las unicidades de las n variables.

(1) **Fuente:** Elosua P, Zumbo B. Coeficientes de fiabilidad para escalas de respuesta categórica ordenada. *Psicothema*. 2008; 20(5):896-901.

RESULTADOS

Tabla 1: Confiabilidad del instrumento de acuerdo al Alfa de Cronbach

ALFA ORDINAL	ENCUESTADOS
0.79	99

Fuente: Investigación propia

Tabla 2: Tabla de valoración de la confiabilidad Alfa de Cronbach

MARGEN DE RESULTADO	FIABILIDAD
0.01 a 0.20	Muy baja
0.21 a 0.40	Baja
0.41 a 0.60	Moderada
0.61 a 0.80	Alta
0.81 a 1.00	Muy alta

Fuente: Tesis UCV

De acuerdo al valor Alfa ordinal, la confiabilidad de consistencia interna del instrumento es de 0.79, lo que indica una confiabilidad alta en la medición del "Criterio de valoración probatoria de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos" por parte de los profesionales del derecho del estudio piloto.

El instrumento de acuerdo al autor y asesores, ha sido estructurado con ítems con respuesta equivalente a la escala de lickert, de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Todos los ítems se refieren al delito de lavado de activos, y sus etiquetas son:

VALPROB: Valoración probatoria de los indicios en el delito de lavado de activos.

GRADSOS: Grado de sospecha que considera se debe someter a valoración probatoria cuando se evalúa la medida de coerción procesal más gravosa.

INCREPAT: Criterio de valoración probatoria que se puede considerar sospecha grave en relación al incremento patrimonial en la prisión preventiva.

OPERSOS: Criterio de valoración probatoria que se considera sospecha grave en relación a las operaciones financieras sospechosas.

AUSEXPL: Criterio de valoración probatoria que considera sospecha grave respecto a la ausencia de explicación razonable del patrimonio acumulado en la prisión preventiva.

CARACTIV: Criterio de valoración probatoria en relación a la carencia de la actividad económica lícita como sospecha grave en la prisión preventiva.

VALOLOG: Criterio para la valoración lógica de los elementos de convicción en nivel de sospecha grave en la prisión preventiva.

SOSPFUER: Criterio para la valoración conceptual de la sospecha fuerte cuando se analiza la medida de coerción procesal más gravosa en la prisión preventiva.

GRAVSSUF: Criterio de valoración de la sospecha grave y/o la sospecha fuerte por encima del nivel de convicción de sospecha suficiente en la prisión preventiva.

Msc, 
LIC. JUAN MANUEL ANTON PEREZ
COESPE 12
COLEGIO DE ESTADÍSTICOS DEL PERÚ

SUFVSSOS: Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 confunden los términos "suficiencia probatoria" con "sospecha suficiente".

REVSGRAV: Sustentar la prisión preventiva cuando la investigación está en un grado de sospecha reveladora contradice los criterios de sospecha grave y/o fuerte.

ACUERPLE: Es pertinente realizar un Acuerdo Plenario Nacional a fin de unificar criterios de valoración probatoria en la acreditación de la sospecha grave en la prisión preventiva.

Reporte estadístico con el entorno de lenguaje de programación R:

```
raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N median_r
0.79      0.79      0.88      0.24 3.7      0.21

Reliability if an item is dropped:
raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N var.r med.r
VALPROB   0.77      0.77      0.90      0.23 3.3 0.085 0.19
GRADSOS   0.75      0.75      0.89      0.22 3.1 0.076 0.17
INCREPAT   0.73      0.73      0.97      0.20 2.7 0.078 0.17
OPERSOS    0.77      0.77      0.91      0.23 3.3 0.070 0.19
AUSEXPL    0.77      0.77      0.93      0.23 3.3 0.083 0.21
CARACTIV   0.75      0.75      0.93      0.21 3.0 0.076 0.19
VALOLOGI   0.75      0.75      0.93      0.21 3.0 0.083 0.19
SOSPFUER   0.76      0.76      0.89      0.23 3.2 0.077 0.19
GRAVSSUF   0.79      0.79      0.97      0.26 3.8 0.089 0.25
SUFVSSOS   0.80      0.80      0.99      0.27 4.0 0.087 0.29
REVSGRAV   0.79      0.79      0.93      0.25 3.7 0.082 0.24
ACUERPLE   0.82      0.82      0.99      0.29 4.6 0.068 0.29

Item statistics
r r.cor r.drop
VALPROB 0.587 0.523 0.473
GRADSOS 0.701 0.673 0.610
INCREPAT 0.858 0.891 0.808
OPERSOS 0.605 0.609 0.494
AUSEXPL 0.581 0.573 0.465
CARACTIV 0.740 0.760 0.658
VALOLOGI 0.730 0.723 0.646
SOSPFUER 0.630 0.571 0.524
GRAVSSUF 0.382 0.321 0.241
SUFVSSOS 0.271 0.154 0.122
REVSGRAV 0.425 0.392 0.288
ACUERPLE 0.055 -0.021 -0.097
```

Para la interpretación del coeficiente Alfa ordinal se ha tomado la siguiente escala:

Msc.  LIC. JUAN MANUEL ANTON PEREZ
COESPE 12
COLEGIO DE ESTADÍSTICOS DEL PERÚ

Tabla 2: Porcentaje de encuestados: Jueces, fiscales y abogados.

	Cantidad	Porcentaje
Jueces	14	14.14
Fiscales	25	25.25
Abogados	60	60.61
Total	99	100%

Fuente: Investigación Propia

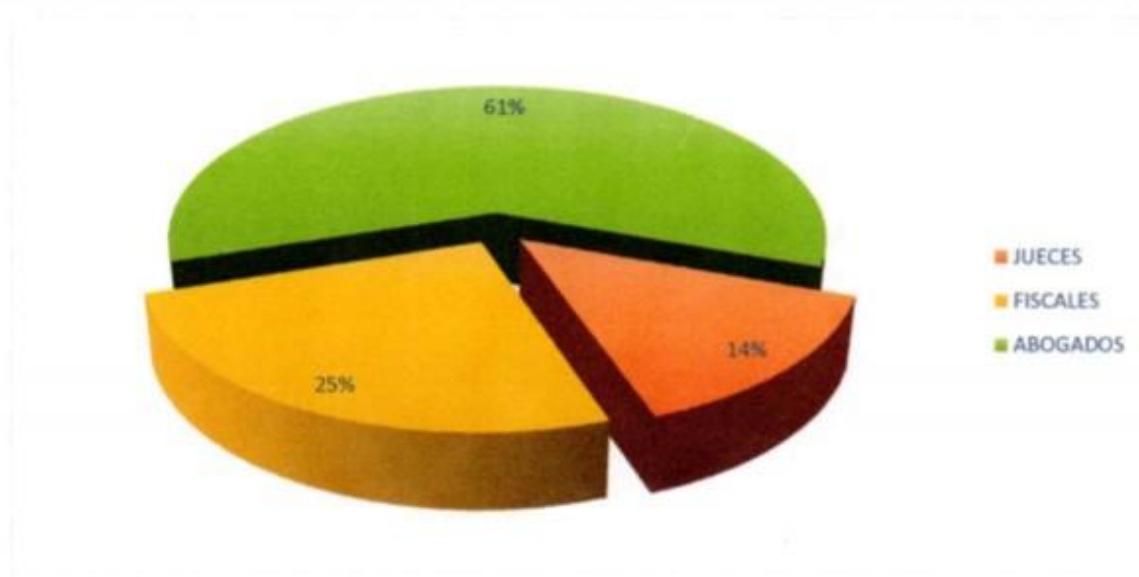


Figura N° 1: Tipificación de la función laboral que realizan los profesionales del derecho

Fuente: Investigación Propia

DATOS

N°	COND	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	ITEM 10	ITEM 11	ITEM 12
1	0	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2
2	0	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2
3	2	1	3	1	1	1	0	2	3	2	2	2	2
4	2	2	3	0	2	2	3	3	2	2	2	1	1
5	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
6	2	1	0	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
7	2	1	3	2	2	3	3	3	3	1	2	2	2
8	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2
9	2	3	3	2	0	3	2	3	0	3	2	3	3
10	2	3	3	3	1	3	2	3	3	2	2	2	0
11	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	2	0
12	2	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	3

Msc. 
 LIC. JUAN MANUEL ANTON PEREZ
 COESPE 12
 COLEGIO DE ESTADÍSTICOS DEL PERÚ

13	1	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1
14	0	2	3	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2
15	0	1	3	1	2	3	1	2	3	3	2	2	2
16	0	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
17	0	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
18	2	1	0	3	2	2	3	1	0	2	2	2	3
19	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
20	1	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
21	0	3	3	3	3	3	3	3	0	3	2	2	2
22	1	1	3	1	2	3	3	0	3	2	2	2	2
23	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	0
24	1	0	3	3	3	3	3	0	3	2	1	2	2
25	0	0	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2
26	0	0	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2
27	0	2	3	2	2	2	2	2	3	0	1	2	1
28	0	3	3	2	2	2	3	2	3	2	1	2	2
29	0	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	2	3
30	2	2	3	0	0	0	0	0	3	3	1	3	3
31	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
32	0	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
33	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	2
34	2	1	0	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
35	1	3	3	3	3	1	3	3	3	2	2	2	1
36	2	1	0	2	2	2	2	2	0	2	2	1	3
37	2	1	0	2	3	3	3	2	3	1	2	1	2
38	2	3	3	1	1	2	3	2	2	2	2	1	2
39	2	0	2	3	2	3	3	2	3	2	2	1	2
40	2	3	3	1	1	2	3	2	2	2	2	1	2
41	1	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1
42	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
43	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	2
44	2	1	0	2	2	2	2	2	0	2	2	1	3
45	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	0
46	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
47	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	2
48	2	1	3	1	1	1	0	2	3	2	2	2	2
49	2	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	3
50	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
51	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
52	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2
53	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
54	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
55	2	1	0	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
56	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
57	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2
58	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2

Msc.  LIC. JUAN MANUEL ANTON PEREZ
COESPE 12
COLEGIO DE ESTADÍSTICOS DEL PERÚ

59	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
60	2	2	3	0	0	0	0	0	3	3	1	3	3
61	2	1	0	2	2	2	2	2	0	2	2	1	3
62	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	2
63	1	0	3	3	3	3	3	0	3	2	1	2	2
64	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
65	1	3	3	3	3	1	3	3	3	2	2	2	1
66	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2
67	2	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	3
68	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2
69	1	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
70	2	1	3	1	1	1	0	2	3	2	2	2	2
71	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
72	2	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	3
73	2	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	3
74	2	1	3	2	2	3	3	3	3	1	2	2	2
75	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	2
76	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
77	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	2
78	2	1	3	1	1	1	0	2	3	2	2	2	2
79	1	1	3	1	2	3	3	0	3	2	2	2	2
80	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2
81	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
82	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
83	2	1	0	2	2	2	2	2	0	2	2	1	3
84	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
85	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	2
86	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
87	2	1	3	1	1	1	0	2	3	2	2	2	2
88	2	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	3
89	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
90	2	1	0	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
91	2	1	0	3	2	2	3	1	0	2	2	2	3
92	2	1	3	1	1	1	0	2	3	2	2	2	2
93	2	1	0	2	2	2	2	2	0	2	2	1	3
94	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2
95	2	1	0	2	2	2	2	2	0	2	2	1	3
96	2	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	3
97	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
98	2	1	3	1	1	1	0	2	3	2	2	2	2
99	2	1	0	2	2	2	2	2	0	2	2	1	3

Fuente: Investigación propia

Msc. 
 LIC. JUAN MANUEL ANTON PEREZ
 COESPE 12
 COLEGIO DE ESTADÍSTICOS DEL PERÚ

ANEXO N° 4

	INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA	1

FORMATO: "A"

INDICE

I. ANÁLISIS.....	2
I.1. Sustentación de los indicios detectados	2

	INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA	2

RESUMEN

PEDRO y su presunta conviviente DIANA, quienes registran investigaciones por el delito de lavado de activos en el Ministerio Público, crearon empresas a través de su empleada del hogar (MARIA) y de terceras personas. Estas empresas tienen características de fachada, presumiblemente dedicadas a la venta de facturas, por lo cual estaría incurriendo en delito de defraudación tributaria. Los fondos obtenidos por tal ilícito, retirados de sus cuentas bancarias, presentarían actos de conversión, transferencia y ocultamiento habrían sido canalizados a través del sistema financiero, para luego ser retirados e invertidos en capital social de empresas, compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias al exterior.

El periodo analizado va desde octubre del 2007 hasta abril del 2011, siendo el monto identificado de las operaciones realizadas, con características de lavado de activos USD 25,000,000.

I. ANÁLISIS

Es preciso iniciar esta parte del análisis, informando que las empresas constituidas por PEDRO y DIANA, presuntamente a través de testaferros para efectuar la venta de facturas, tienen características de empresa de fachada, las mismas, que en este caso corresponden a la operativa desarrollada para generar fondos ilícitos. Estos hechos estarán desarrollados en el punto III.2. (Información Adicional) en el numeral B del presente informe.

A continuación y de acuerdo al análisis realizado se ha podido identificar los siguientes indicios que presentan características compatibles con el lavado de activos:

1. Participación de personas con delito precedente,
2. Vinculaciones con personas con antecedentes en TID,
3. Adquisición de activos sin financiamiento registrado,
4. Utilización del sistema financiero para transferir fondos,
5. Incremento de capital social en efectivo,
6. Posible participación de testaferros,
7. Sustento de operaciones con información no consistente,

I.1. Sustentación de los indicios detectados

1. Participación de personas con delito precedente. (Ver Gráfico 01).

- Según información de inteligencia, PEDRO y DIANA son convivientes y según el MP registran investigaciones por el delito de lavado de activos (CASO 000001-2011-130-0 de fecha 30/03/2011).
- Según Sunarp, PEDRO y DIANA, son apoderados de MARIA (quien de acuerdo a información de inteligencia, es su empleada del hogar) y de ALLISON (quien según Reniec, es sobrina de DIANA).
- Según Sunarp, HERMANO 2 es apoderado de las siguientes personas: de su hermano PEDRO, de EX ESPOSA (quien sería ex esposa de PEDRO) y de VARON 4. Este último fue Gerente General de FACHADA 1, empresa de la cual HERMANO 2

	INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA	3

y VARON 5 son accionistas con el 50%. Cabe señalar que JOSE (de 19 años de edad), es hijo de DIANA y actual Gerente General de FACHADA 1.

- Según Sunarp, MARIA es accionista mayoritaria de FACHADA 11, FACHADA 09 y FACHADA 20; mediante dichas empresas se vincula varias personas, entre ellas: TRAFICANTE INDIA (nacionalidad Indio), CONTADOR 1 y CONTADOR 2 (ambos de profesión Contador). El primero es accionista de cinco empresas en sociedad con ALLISON (ver Gráfico 01).
- Según Reniec, tres hermanos de DIANA residen en el exterior, los mismos que se detallan a continuación: JHON (reside en Suiza), ISABEL y ESTELA (ambas residen en España). Ésta última es madre de ALLISON.
- Según BANCO BAVARO, el 26/08/2010, catorce (14) empresas informaron al banco BANCO BAVARO (mediante carta firmada por el representante legal de cada una) el nuevo domicilio para fines administrativos, que coincidentemente es el mismo que registra en Reniec CONTADOR 1 y en Sunat, FACHADA 1 (Av. La Javier Prado 202 – Oficina 304 – Surco).
- Según Sunat, ocho (08) empresas registraron como domicilio fiscal la "Calle Cotalinas N° 811 – Dpto. 001 – Lima y Av. Cruz 701 – Sta. Patricia 8 etapa - La Molina"; siendo este domicilio según Reniec y Páginas Blancas de Telefónica del Perú SAA respectivamente, los registrados por PANDORA; quien según información de inteligencia es el abogado de PEDRO.

2. Vinculaciones con personas con antecedentes en TID

- Como se detalló en el indicio anterior, TRAFICANTE INDIA (nacionalidad Indio) está vinculado con MARIA a través de la empresa FACHADA 20. Según Sunarp, Partida N° 0089542, TRAFICANTE INDIA es apoderado general de la empresa FACHADA 20 desde el 30/06/2009. Según Migraciones, TRAFICANTE INDIA registra el Pasaporte N° O0009582 e ingresó a nuestro país el 27/06/2009 (procedente de Brasil), saliendo con destino a Panamá el 12/08/2009. Según información de inteligencia, en abril del 2010, el ciudadano Indio TRAFICANTE INDIA fue detenido a raíz de la incautación de heroína en Brasil, asimismo lo señalan como presunto traficante de estupefacientes, asimismo dicha persona registra empresas y registra cuentas en el exterior sin sustento, también es investigado en la India por defraudación tributaria.
- Según el BANCO MONEY, durante los meses de agosto y setiembre del año 2010 (dos meses), FE Y ESPERANZA giró cheques a favor de FACHADA 23 por el importe total de USD 420,212. No se descarta que FE Y ESPERANZA sea un posible comprador de facturas. Según los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) N° 888-2010-DA-UIF-SBS, N° 441-2009-DA-UIF-SBS y N° 09990-2010-DA-UIF-SBS, FE Y ESPERANZA estaría vinculada a la familia MURDOC BARAKUS e investigada en el MP por los delitos de defraudación de rentas de aduanas así como de TID.

3. Adquisición de activos sin financiamiento registrado.

- Según Sunarp, el 04/06/2008, PEDRO compra un vehículo marca BMW de placa RRRK040 por el importe de USD 53,500 al contado (con presuntos fondos obtenidos ilícitamente), dos días después, es decir el 06/06/2008 dicho vehículo es vendido por el mismo monto a FACHADA 7 (empresa vinculada, quien también adquiriría el bien

	INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA	4

con presuntos fondos obtenidos ilícitamente), quien lo vende el mismo día a Atrium Inmobiliaria SAC por el importe de USD 60,000. Ver Gráfico 02.

- FACHADA 7, durante el año 2008, según Sunarp, adquirió 09 vehículos por un total de USD 154,100 (pagados al contado). Dichos bienes fueron vendidos a terceros, en su mayoría el mismo mes o dos meses después a terceros naturales y jurídicos por un importe total de USD 233,730. Ver Cuadro 01. Es importante señalar que dicha empresa, en el mismo año registró incremento de capital social por S/. 120,000 y según Sunat, registra baja de oficio desde el 30/06/2010.
- FACHADA 2, cuya actividad comercial registrada en Sunat es la "Venta por mayor de materiales de construcción, minas y canteras, construcción de edificios", efectuó la compra de tres (03) camionetas rurales marca Jeep (modelo Cherokee), Chrysler (modelo Town & Country Lx) y Mercedes Benz (modelo ML 350), por un importe total de USD 44,287, las mismas que fueron vendidas al mes siguiente de su compra.

CUADRO 01: FACHADA 7				
N°	Adquisición vehículos		Venta vehículos	
	Fecha	USD	Fecha	USD
1	07/03/2008	8,000	09/04/2008	16,500
2	17/04/2008	17,000	18/04/2008	19,000
3	26/03/2008	12,500	26/03/2008	19,000
4	07/03/2008	16,500	16/04/2008	17,000
5	23/07/2008	10,000	23/07/2008	20,000
6	04/06/2008	53,500	06/06/2008	60,000
7	26/09/2008	36,000	26/09/2008	62,000
8	07/10/2008	300	06/02/2009	10,115
9	07/10/2008	300	06/02/2009	10,115
Total USD		154,100		233,730

Fuente: Sunarp
Elaboración Propia

4. Utilización del sistema financiero para transferir fondos.

- El BANCO BAVARO y el BANCO MONEY remitieron extractos de cuentas corrientes de nueve (09) empresas vinculadas a PEDRO, las mismas que se detallan en el Cuadro 03.
- Según los extractos bancarios señalados en el Cuadro 02, el sistema financiero fue utilizado para transferir fondos a vinculados el mismo día de su inserción, modalidad que según el diario Gestión (de fecha 26/07/2010), es utilizada en la venta de facturas¹. El importe transferido de las cuentas bancarias a favor de terceros vinculados asciende a un total de USD 18,189,538. Es preciso señalar que parte de dicho importe estaría afecto al pago de tributos que estarían dejándose de pagar al Estado Peruano como una modalidad de defraudación tributaria² (no se ha contado con información al respecto).

¹ "Los cheques que se emiten, no los cobra él, son endosados [...] y depositado en la misma cuenta de la empresa un minuto después de su cobro [...]"

² Nacimiento de la obligación tributaria para efectos del IGV, se origina con la emisión del comprobante o el pago del mismo, lo que suceda primero y para el Impuesto a la Renta, la obligación tributaria se origina en el año en que devenga dicha operación comercial, sin importar que se haya pagado o no.

	INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA	5

CUADRO 02: DETALLE DE CUENTAS CORRIENTES REMITIDAS POR EL BABARO Y MONEY					
N°	NOMBRE DE EMPRESA	Scotia		BBVA	
		MN	ME	MN	ME
1	FACHADA 1			100030	
2	FACHADA 18	5119	30435	100029	10002
3	FACHADA 22	51192	30434		
4	FACHADA 3	7163	3442		
5	FACHADA 12	7163	3442		
6	FACHADA 4	7177	34452		
7	FACHADA 11	7163	34425		10003
8	FACHADA 15	7163	34425	100032	10003
9	FACHADA 23	71626	34425		

Fuente: Extractos bancarios del Scotia y BBVA
Elaboración Propia

- Según BANCO BAVARO, la transferencia de fondos (total de USD 13,985,679) se efectuó mediante el cobro de cheques por personas vinculadas (PEDRO, CONTADOR 1 y SOBRINA VARON 11), cuyos giradores y beneficiarios fueron las mismas empresas. Del mismo modo según el BANCO MONEY, PEDRO y sus vinculados, efectuaron el cobro de cheques girados al portador. (Ver Gráfico 02).
- Del mismo modo, según el BANCO MONEY, ASISTENTE CONTABLE (USD 37,132) y VARON 11 (USD 562,412) retiraron fondos en efectivo de las cuentas corrientes de FACHADA 18 y FACHADA 22 y FACHADA 23, respectivamente. Ver Gráfico 02.
- Según los ROS de BANCO BAVARO, señalan textualmente lo siguiente: "[H]emos observado en esas otras empresas una operativa inusual de Abono con Cheque Mismo Banco y/o Depósitos en Efectivo y Retiros inmediatos con Pago de Cheques en una misma oficina y ventanilla, sin que se haya podido determinar el verdadero propósito del negocio, así como el origen y destino de los fondos".
- Según información de base de datos, durante el año 2011, se efectuaron retiros de efectivo desde la cuenta corriente del BANCO METROPOLIS, cuenta corriente N° 5898995 de la empresa FACHADA 23, por un importe total de USD 1,450,504.
- Según el BANCO MONEY, el 12/10/2010, FACHADA 2 giró el cheque N° 69885 por USD 320,000 a favor de FACHADA 19. Cabe señalar que ALLISON (quien otorgó poderes a PEDRO y a DIANA) es accionista de FACHADA 2 (tratado en el Indicio 01). Las actividades comerciales de ambas empresas vinculadas no guardan relación con el monto transferido: FACHADA 2 registra en Sunat la actividad comercial de "Venta de materiales de construcción, minas, canteras y construcción de edificios"; mientras que, FACHADA 19 registra en Sunat la actividad comercial de "Venta mayorista de otros productos".
- Producto del análisis de los cheques remitidos por el BANCO MONEY, se observa, que se han depositado dos cheques (N° 26 y N° 25) en las cuentas corrientes de FACHADA 2, los mismos que fueron girados a favor de FACHADA 18 el 28/12/2010. El importe de los cheques son de USD 45,000 y USD 35,000 respectivamente.
- Según los swift del BANCO MONEY, FACHADA 2 efectuó transferencias al exterior por un importe total de USD 1,473,415 durante el mes de marzo 2011 sin sustento aparente.
- Los fondos tuvieron su origen, en las transferencias de cheques hacia las cuentas corrientes detalladas en el Cuadro 03 de las empresas vinculadas (con características de fachada), entre los giradores se encuentran las siguientes empresas (posibles compradores de facturas): EMPRESA 01, FE Y ESPERANZA, EMPRESA 02, EMPRESA 03 y EMPRESA 04. Gráfico 02.

	INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA	6

Según BANCO BAVARO, PEDRO, CONTADOR 1 y SOBRINA VARON 11 (todos vinculados) efectuaron transferencias de fondos en efectivo, los mismos que ascendieron a un total de USD 3,159,251.

5. Incremento de capital social en efectivo.

- Según Sunarp, durante los años 2008 y 2009, cuatro (04) empresas vinculadas registran incremento de capital social con aportes en efectivo. El importe total asciende a USD 320,631 (ver Cuadro 03). Cabe señalar que dos empresas se encuentran con baja de oficio desde el año 2010 habiendo incrementado su capital social en el año 2008 (FACHADA 5 y FACHADA 7).

CUADRO 03: INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN EFECTIVO					
Nombre de empresa	Inicio Actividades RUC	Incremento de capital social	Importe sr.	TC	Importe USD
FACHADA 11	20/03/2007	26/02/2009	146,573	3,243	45,197
FACHADA 1	12/09/2008	13/08/2009	564,234	2,929	192,637
FACHADA 5	03/05/2007	15/09/2008	120,000	2,974	40,350
FACHADA 7	28/01/2005	10/03/2008	120,000	2,827	42,448
Importe Total			950,807		320,631

T.C. venta, según la SBS

Fuente: Sunarp
Elaboración propia

6. Posible participación de testafieros. (Ver Gráfico 01).

MARIA

- Según información de inteligencia, MARIA sería empleada del hogar (trabajaría para PEDRO).
- MARIA registra en el Sistema Privado de Pensiones (en adelante SPP) historial laboral en empresas vinculadas a PEDRO (FACHADA 11 y FACHADA 20), registrando una remuneración promedio mensual de S/. 550.
- Según Sunarp (partida N° 17110 de fecha 30/03/2007), PEDRO y DIANA se registran como apoderados de MARIA ante toda clase de autoridades civiles y comerciales.
- Durante los años siguientes a los poderes otorgados (2008-2009), MARIA registra adquisiciones de cuatro inmuebles por un total de USD 155,000 (todos ubicados en el distrito de Surco) y dos automóviles (modelo Coupé de marca Mercedes Benz - Placa BTY202 - y modelo Kompresor de marca Mercedes Benz -Placa ZZX017) por un total de USD 57,900. Cabe señalar que dichos bienes forman parte de garantía en el sistema financiero (Tratado en Información Adicional C).
- Según información de inteligencia, MARIA no tiene licencia de conducir.
- Según Reniec, el domicilio registrado por MARIA es "Av. Cerros de Molina 780 – Dpto. 801 -2to piso Block 8 torre A – Surco" (inmueble adquirido por ella el 23/06/2008 a USD 137,000); sin embargo, según información de inteligencia, ella reside en el distrito de Comas (Jr Pachacútec s/n Mz Z80 Lt02). Esta última información ha sido corroborada con Páginas Blancas de Telefónica del Perú SAA.
- Según el Reporte Crediticio de Deudores (en adelante RCD), al mes de junio 2011, MARIA registra endeudamiento en el sistema financiero por un importe total de USD 430,468, de los cuales USD 241,092 es hipotecario y la diferencia por préstamos en efectivo; sin embargo, los pagos de dicho endeudamiento asciende a un promedio mensual de USD 5,000 (importe que no guarda relación con sus ingresos registrados en el SPP).

	INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA	7

- Es importante señalar que respecto a los dos párrafos anteriores, se desconoce si dichas operaciones fueron realizadas directamente por MARIA o por sus apoderados PEDRO y DIANA.

ALLISON:

- Según Sunat y SPP, no registra historial laboral.
- Según Sunarp (Partida N° 006365), desde el 28/05/2007 hasta el 06/05/2011, ALLISON nombró como apoderados a PEDRO y DIANA ante toda clase de autoridades civiles y comerciales.
- Según Sunat, a inicios del mes de mayo del 2007 inician actividades comerciales cuatro (04) empresas que registran como accionistas a ALLISON con el 78% y a CONTADOR 2 con el 22%. Dichas empresas son las siguientes: FACHADA 2, FACHADA 3, FACHADA 4 y FACHADA 5.
- Según Sunarp, durante el mes de mayo del año 2007, ALLISON adquirió dos (02) vehículos de placas TTT023 (sedan marca Mercedes Benz, modelo C230-97) y UIO925 (camioneta rural marca Jeep, modelo Cherokee) por un total de USD 9,500 (al contado), los mismos que fueron vendidos el mismo año.

7. Sustento de operaciones con información no consistente.

- Según BANCO BAVARO, el Banco no concluyó el proceso de apertura de cuentas corrientes a 06 empresas vinculadas; puesto que las verificaciones domiciliarias no fueron conformes; debido a que la dirección de dichas empresas corresponden a un estudio contable y no a una empresa que pudiera brindar los servicios para los cuales fueron constituidas (según Sunat, entre las actividades comerciales están confecciones textiles, mantenimiento, reparación de vehículos y venta mayorista de otros productos).
Es probable que la dirección del estudio contable (Av. La Javier Prado 202 – Oficina 304 – Surco) sea la de CONTADOR 1, quien se registra en Sunat como Contador. La participación de este tipo de profesionales en operaciones de lavado de activos es internacionalmente conocida como Actividades y Profesionales No financieras Designadas (APNFD), la cual es compatible con tipologías³ del GAFISUD.
- Según los ROS, el BANCO MONEY, respecto a las empresas: FACHADA 23, FACHADA 2, Repuestos y Accesorios y FACHADA 22, se indica textualmente lo siguiente: “[P]ese a reiterados pedidos el titular se niega a proporcionar el sustento de las operaciones realizadas y se niega a dar facilidades para la verificación del giro de negocio y las visitas respectivas a las instalaciones de la empresa. Titular mayormente moviliza fondos en efectivo que no tienen el respaldo documental correspondiente”.
- Según los swift del BANCO MONEY, FACHADA 2 ha efectuado durante el mes de marzo del 2011, transferencias al exterior por un importe total de USD 1,473,415, cuyo concepto consignado en dichos documentos es el siguiente: “Gastos en el exterior”; sin embargo, según Sunat, dicha empresa no registra importaciones ni exportaciones (ver Cuadro 04). Es importante señalar que dicha empresa registra como actividades comerciales en Sunat las siguientes: Venta mayorista de materiales de construcción; minas, canteras y construcción de edificios. Se desconoce si dicha empresa recibe asesorías del exterior, que justificarían las indicadas transferencias al exterior.

³ Entre las tipologías según GAFISUD 2010 aplicado para los APNFD están: “Lavado de fondos provenientes de defraudación de fondos públicos” y “Lavado de activos a través de estudios de abogados o contadores”

	INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA	8

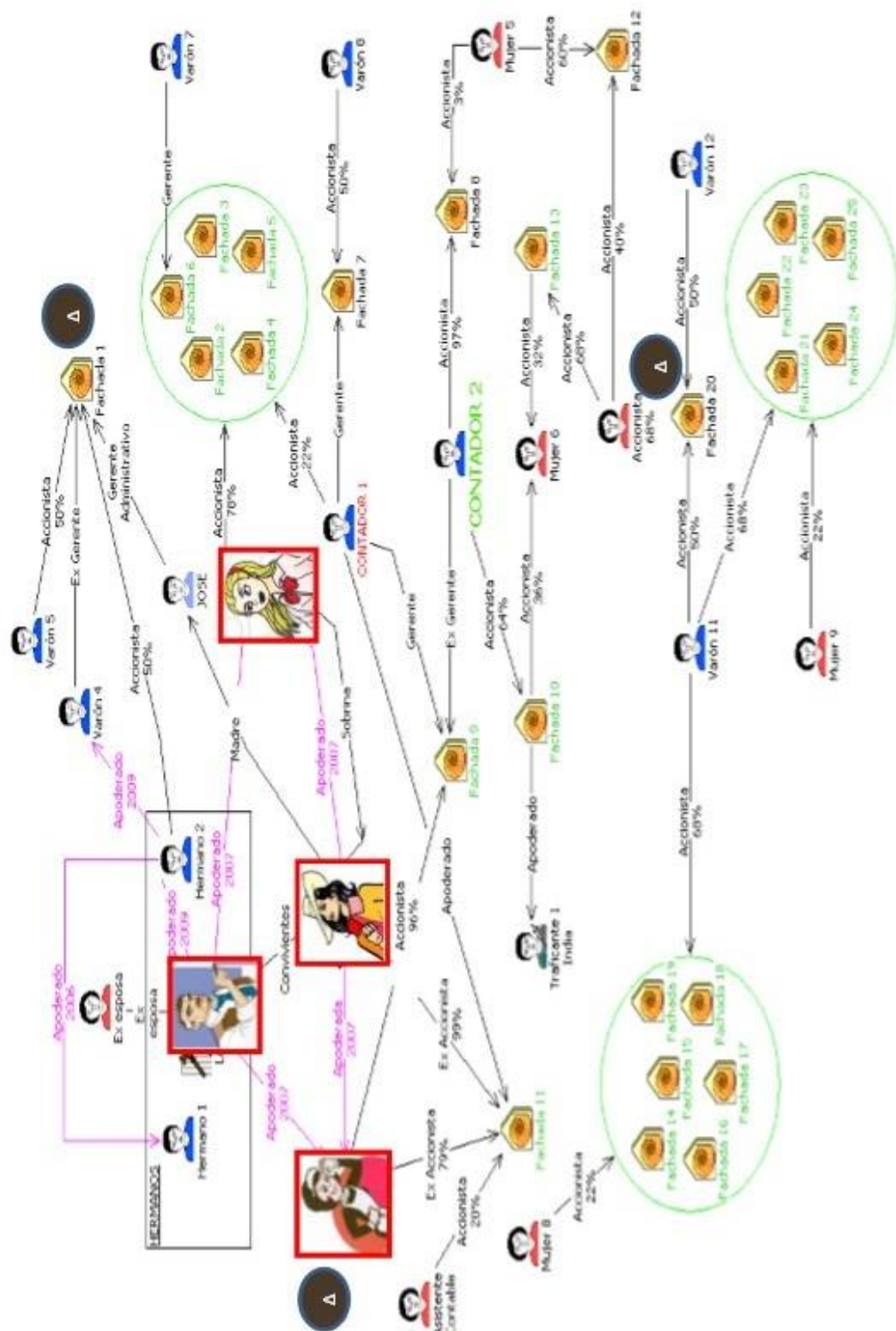
CUADRO 04: DETALLE DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR, EFECTUADOS POR FACHADA 2				
Beneficiario	País	Fecha swift	Importe USD	Detalle
AAA	Italia	07/03/2011	118,615	Gastos en el extranjero
BBB	New york	15/03/2011	100,000	Gastos en el extranjero
CCC	Panama	15/03/2011	410,000	Gastos en el extranjero
DDD	Panama	15/03/2011	417,000	Gastos en el extranjero
DDD	Panama	15/03/2011	423,000	Gastos en el extranjero
EEE	Italia	31/03/2011	4,800	Gastos en el extranjero
IMPORTE TOTAL USD			1,473,415	

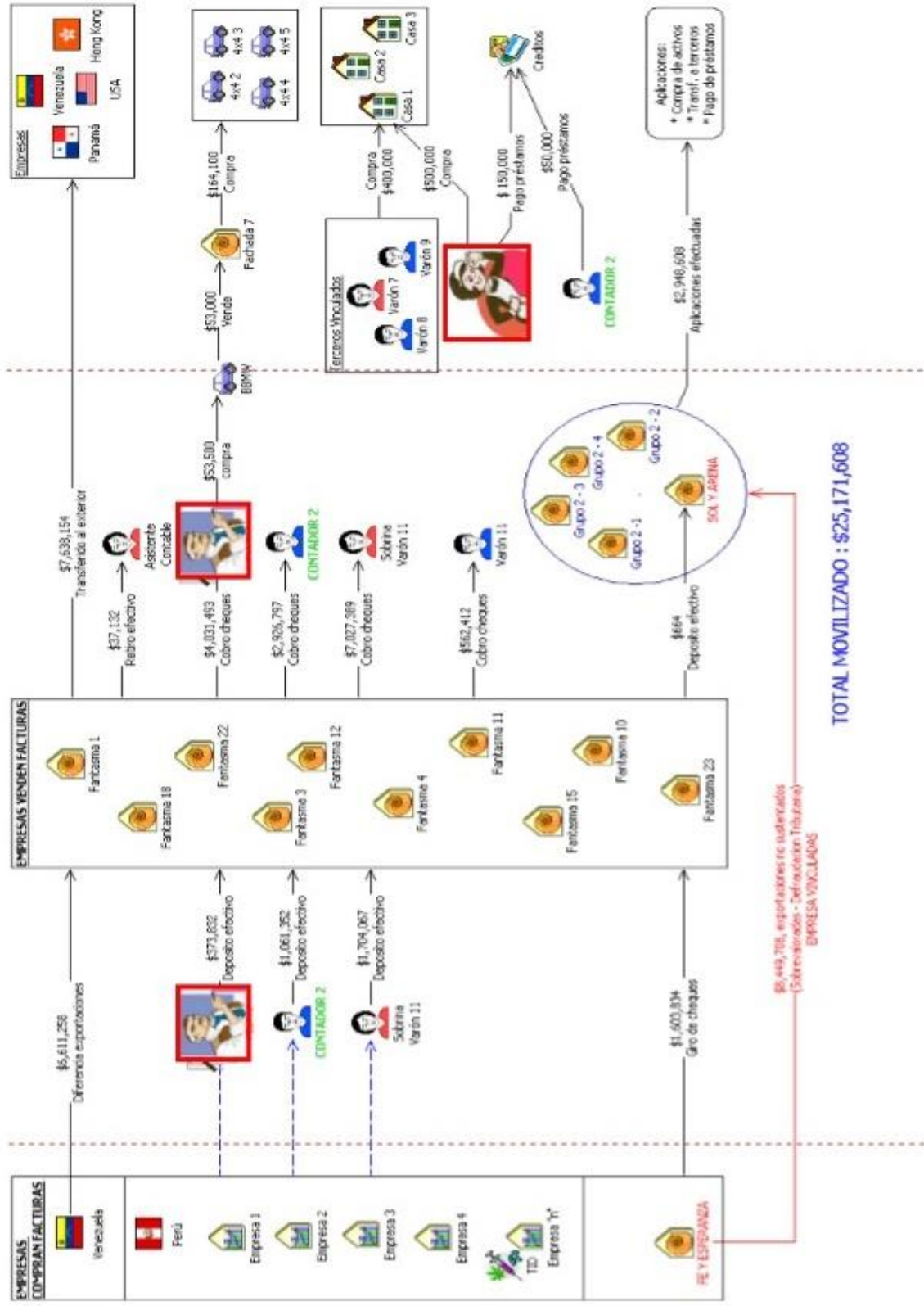
Fuente: Swift BBVA

Elaboración Propia

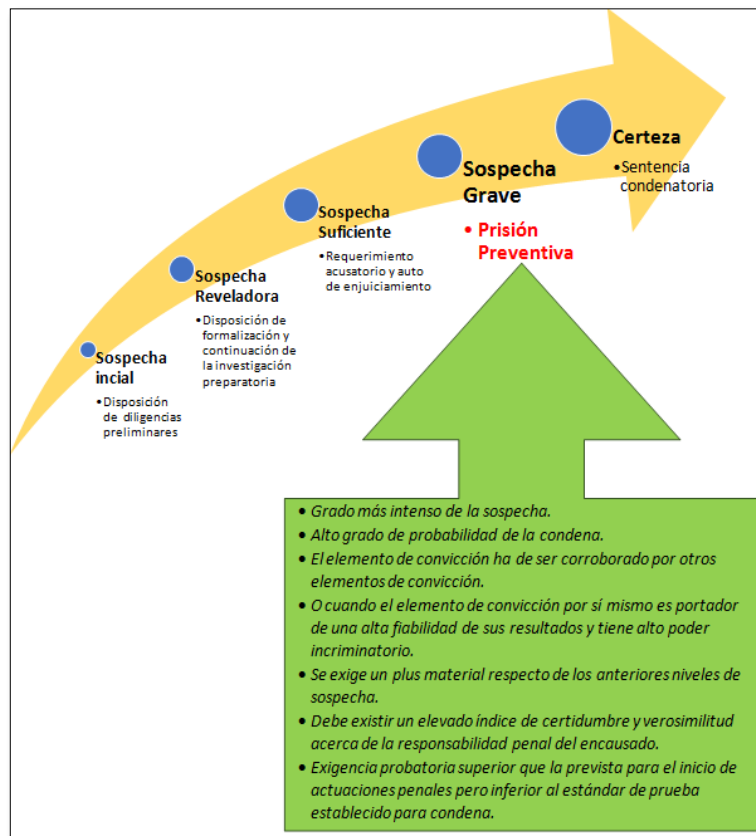
- Según Sunat, CONTADOR 1 registra RUC de persona natural, bajo la modalidad de recibos por honorarios, cuya actividad comercial es de actividades de contabilidad (desde el año 1995) y según el SPP, registra una remuneración promedio mensual de S/. 600 de su empleador FACHADA 2 de la cual es accionista (señaladas en el indicio 01).
Según el RCD, a junio 2011, registra créditos en efectivo por USD 42,874; por los que paga aproximadamente USD 1,500 promedios mensuales.
- Según el SPP y tal como se mencionó en el Indicio 02, MARIA (empleada del hogar de PEDRO) registra remuneración promedio mensual de S/. 550, proveniente de empresas vinculadas a PEDRO. Según el RCD registra endeudamiento a junio 2011 por un total de USD 430,468; por los que paga aproximadamente USD 5,000 promedios mensuales.

II. GRÁFICOS DEL CASO

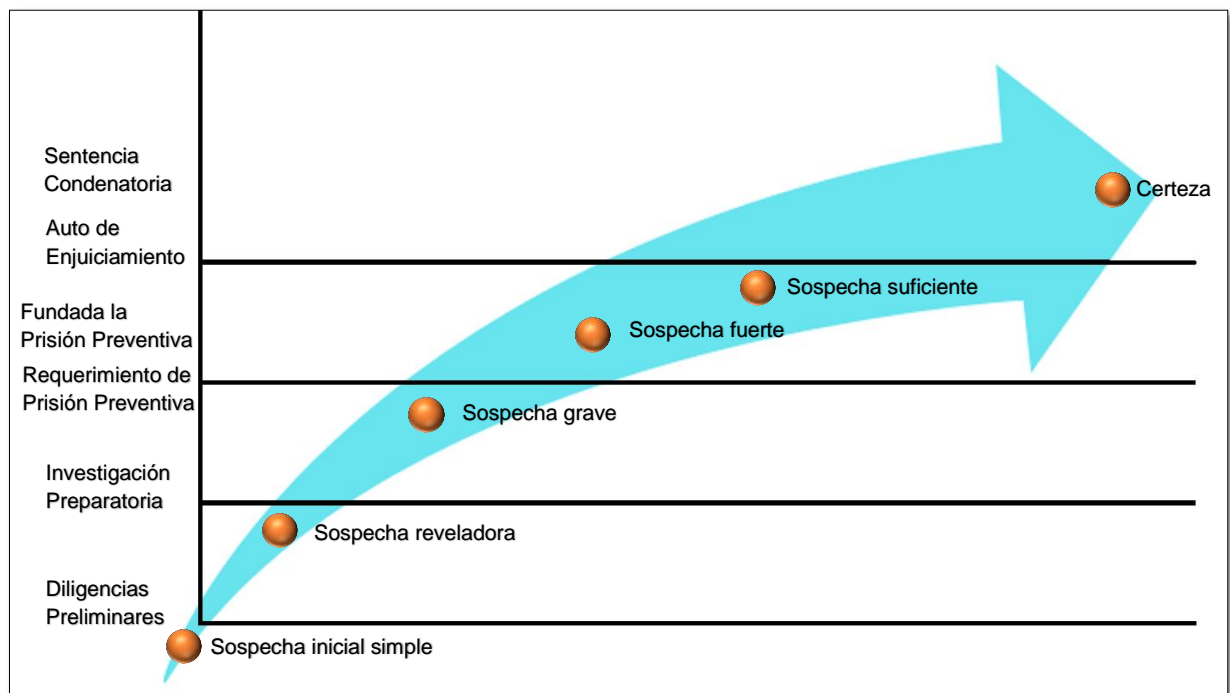




ANEXO Nº 5



Fuente: Moreno, J. (2018) – Legis, pasión por el derecho.



Fuente: Investigación Propia.